

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

32ª REUNION — 10ª SESION EXTRAORDINARIA (Continuación) — 8 DE ABRIL DE 1988

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDISON OTERO,

del señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
doctor ADOLFO GASS,

del señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia,
don LUIS RUBEO,

del señor presidente de la Comisión Presupuesto y Hacienda,
doctor JUAN TRILLA,

del señor presidente de la Comisión de Defensa nacional,
doctor ANTONIO T. BERTHONGARAY

y de la señora presidenta de la Comisión de Educación,
doña MARGARITA MALHARRO de TORRES

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRON

SENADORES PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Ramón
AMOEDO, Julio A.
BENÍTEZ, Alfredo L.
BERTHONGARAY, Antonio T.
BRAVO, Leopoldo
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CONCHEZ, Pedro A.
DEL VILLAR, Manuel
FALSONE, José A.
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
LAFFERRIERE, Ricardo E.
MALHARRO de TORRES, Margarita
MARTIARENA, José H.
MAZZUCCO, Faustino M.
MOLINA, Pedro E.
NAPOLI, Antonio O.
OTERO, Edison
ROMERO FERIS, José A.
RUBEO, Luis
SALIM, Luis
SANCHEZ, Libardo N.

SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
TENEV, Carlos
TRILLA, Juan
VELAZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.

AUSENTES, EN COMISION:

BRASESCO, Luis A. J.
GROSSO, Edgardo Roger M.
JIMENEZ MONTILLA, Arturo I.
LEÓN, Luis A.
MURGUIA, Edgardo P. V.
SOLANA, Jorge D.

AUSENTE, CON AVISO:

DE LA RÚA, Fernando
GENOUD, José
JUÁREZ, Carlos Arturo
MAUHUM, Fernando H.
MENEM, Eduardo
NIEVES, Rogelio J.
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
ROMERO, Juan C.
SAADI, Ramón Eduardo
SAPAG, Elías

SUMARIO

1. Continúa la consideración de los dictámenes en mayoría y en minoría de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional. (C.D.-105-74/87.) (Pág. 3026.)

2. Apéndice:

Inserciones. (Pág. 3091.)

—En Buenos Aires, a las 10 y 36 del viernes 8 de abril de 1988:

Sr. Presidente (Otero). — Continúa la sesión.

1

LEY DE DEFENSA NACIONAL

Sr. Presidente (Otero). — Corresponde proseguir con la consideración de los dictámenes de la Comisión de Defensa Nacional, en mayoría y en minoría, en el proyecto de ley en revisión sobre defensa nacional.

Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: igual que en el anterior tratamiento de esta ley, se ha hecho referencia a que en el proyecto que estamos considerando se da por primera vez preeminencia al Poder Ejecutivo en la defensa nacional, quien asume la conducción de las fuerzas armadas y de la defensa nacional.

Esta es la primera inexactitud porque la ley 13.234 que es la primera ley de defensa nacional dictada en 1948 durante el gobierno peronista, establece en numerosas disposiciones que el presidente de la Nación, como jefe supremo de la República, es el encargado de la defensa nacional, el responsable y el comandante en jefe de todas las fuerzas. Y también en numerosas normas que le siguen se dispone su completa autoridad y responsabilidad en el manejo de la defensa nacional.

Igualmente sucede con el proyecto Illia, con el decreto ley 16.970 —que ha sido dejado de lado en su uso— y con el proyecto de la señora Isabel Perón, que no fue ley debido a la revolución del 24 de marzo de 1976.

Es decir que ninguna ley ha discutido el papel que tiene que ocupar el Poder Ejecutivo en la defensa nacional; y esta es una cuestión que no solamente rige en la Argentina sino históricamente en todos los países del mundo.

Los otros puntos que se incluyen como una gran creación en este nuevo proyecto y que figuran también en las discusiones mantenidas últimamente en la Cámara de Diputados, son el accionar militar conjunto y la doctrina mili-

tar conjunta. Los mencionan como si también fuera una gran creación de este proyecto, cuando no es así, pues el decreto-ley 16.970 establece expresamente estos puntos y también lo hace el proyecto de Isabel Perón.

Me voy a remitir a leer solamente la norma que hace referencia a este tema porque sería muy largo hacer todas las enunciaciones que se relacionen con esta cuestión. Precisamente el artículo 20 del decreto ley 16.970 trata el punto especial de los comandos conjuntos y específicos. Establece lo siguiente: "Compete al Comité Militar... c) Establecer comandos conjuntos y específicos; d) Formular la doctrina conjunta de las fuerzas armadas y las políticas para el adiestramiento conjunto".

Y el proyecto de la señora de Perón, del 11 de septiembre de 1975, que fue aprobado por la Cámara de Diputados, también establece la competencia del Comité Militar en la aprobación de la doctrina militar conjunta y en la creación de los comandos conjuntos y específicos.

Con esto doy por terminado este punto haciendo notar que no se ha innovado nada en esta materia ni se ha inventado nada nuevo.

El tercer punto que se hace aparecer también como una conquista de la nueva legislación que se propugna es la eliminación de la doctrina de la seguridad nacional. He afirmado —y lo sigo diciendo— que no hay un cuerpo serio que establezca la existencia de una doctrina de seguridad nacional. En todas las publicaciones en que he buscado información no existe una definición definitiva; no se sabe quiénes son los autores ni de dónde provienen.

Solicito a los señores legisladores y demás presentes que se encuentran conversando que lo hagan más bajo que el volumen de mi voz para que sea respetada mi palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Así se hará.

Sr. Bravo Herrera. — Señor presidente: entonces, con respecto a la doctrina de la seguridad nacional no hay una formulación seria. Todos los autores que se refieren a ella tratan sobre la guerra francesa de Argelia, la guerra francesa en Indochina, la Segunda Guerra Mundial, la guerra fría, el traspaso al Brasil, etcétera, de que algunos militares norteamericanos toman esta doctrina, de la que se le suele decir que es una ideología, y sobre todo se pone el acento en que consiste en ubicarnos a nosotros en la órbita de los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo, crear una lucha ideológica dentro del partido, someternos a un armamento que sería utilizado únicamente en la represión interna para colocarnos, entonces, dentro de ese juego de lucha, entre el Este y el Oeste, para instau-

rar consecuentemente dictaduras en cada uno de los países en los que es acogida esa doctrina.

Ahora bien; dentro de la ley 16.970 y las otras disposiciones que ya he citado y en el artículo pertinente del Código de Justicia Militar que se refiere a la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas, en este último punto con los bandos, no veo que haya una doctrina de la cual pueda surgir la dominación de un grupo a favor de otro país por medio de la violencia.

Inclusive, de acuerdo con un artículo que he leído hace poco, se niega que durante el gobierno del general Onganía —que derrocó al presidente Illia— se haya creado un tipo de armamento destinado únicamente a lo que podría denominarse una lucha callejera. Inclusive, esos armamentos fueron insinuados o pedidos por algunas autoridades militares extranjeras, pero rechazados por las autoridades argentinas.

De todas maneras, haya existido esa doctrina y se haya aplicado o no en la Argentina, vamos a suponer durante el último gobierno, la situación no quita que la ley 16.970, odiada por esa doctrina, pueda ser aplicada correctamente a favor del país.

También vale la reflexión de que si se hubiera atrasado un poco la revolución del 24 de marzo de 1976 y se hubiera sancionado el proyecto de la señora de Perón, que era bastante parecido a la ley 16.970, todo lo que ha ocurrido hubiera sido igual y con el fundamento de esa ley.

Ocurre que no existió sólo la represión o la toma violenta del poder; evidentemente, a la represión le sucedieron medidas de gobierno en contra de la ley y perjudiciales para el país. Es lo que yo he denunciado en algunas oportunidades como, por ejemplo, el caso de la Italo, que no tuvo lamentablemente una concreción feliz en su investigación.

Todas esas medidas que se dictaron por el gobierno anterior —el del proceso de reorganización nacional—, igual se hubieran adoptado con la ley 16.970 o el proyecto justicialista o sin ellos, porque siendo una revolución el abarcamiento de todo el orden jurídico significa que no exista la ley 16.970 o ninguna ley, sino la que ellos quieren aplicar de acuerdo con sus finalidades. Y en ese sentido son directos, puesto que los movimientos revolucionarios que hubo en seguida han dictado un estatuto de la revolución que está por encima de la Constitución Nacional.

De manera que fundar el accionar militar en la represión o cualquier otra medida violenta ocurrida en el gobierno anterior, especialmente en el artículo 43 del decreto ley 16.970, que establece la intervención de las fuerzas armadas

en caso de conmoción interior causada por hechos de la naturaleza o del hombre, es tomar la cuestión en forma idealista y angelical con respecto a la política y, sobre todo, a lo que son los movimientos violentos que suelen ocurrir en nuestro país.

A la doctrina de la seguridad nacional suelen ubicársela como la de la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas, con todas las consecuencias que se enumeran, sobre todo que se suelen enumerar en los emocionales debates que se suscitan en la Cámara de Diputados.

Acerca de la inclusión de la hipótesis de conflictos internos en la ley de defensa nacional, ellas son lucubraciones de carácter técnico-político que están basadas en función de las finalidades y es estrategias del gobierno, por lo que no se pueden incluir en ninguna ley ya que esto es incorrecto. También suelen tenerse en cuenta los posibles choques que pueden ocurrir en el plano internacional en la consecución de las finalidades integrales.

Estas hipótesis son elaboradas generalmente por los estados mayores de cada una de las fuerzas y llevadas luego, siguiendo el orden jerárquico que corresponde, al presidente, que es quien les da asentimiento o no; por lo tanto, se empieza a trabajar de acuerdo con ello, es decir, estableciendo una fuerza con una determinada logística, una determinada doctrina y un cierto adiestramiento. Pero esto no puede estar en ninguna ley.

Ha ocurrido, con respecto a esto, en el proyecto de la señora de Perón, que se incluyeron las disposiciones de tres decretos del Poder Ejecutivo dictados durante la presidencia del doctor Luder. Me refiero a los decretos 2.770, 2.771 y 2.772, que establecían cómo se tenía que luchar contra la guerrilla. La guerrilla era una realidad en ese entonces, de manera que no podemos discutir: Tucumán estaba tomada en una parte.

De cualquier modo, fue errónea la inclusión de estas disposiciones en una ley de defensa nacional, porque ella debe tener disposiciones de uso permanente; en cambio, esto se basaba en una situación concreta que tenía que resolverse por ley —puesto que estábamos en un estado de derecho y fueron correctos los decretos que se dictaron—, pero por leyes especiales, teniendo en cuenta, inclusive, los casos que podrían ocurrir en el futuro.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — Usted ha citado tres decretos dictados durante el gobierno de la señora de Perón cuya presidencia provisional es

taba a cargo del doctor Luder, que se referían al aplastamiento de las fuerzas subversivas que en aquel entonces tanto daño hicieron al país.

Sr. Bravo Herrera. — Aniquilar el accionar de los elementos subversivos. Así decían.

Sr. Solari Yrigoyen. — Exactamente.

Pero yo quisiera recordarle la propia interpretación que ha dado el doctor Luder sobre esos decretos cuando le tocó declarar ante la Cámara Federal, en el juzgamiento de las tres primeras juntas del golpe de 1976. Dijo claramente que cuando dio la orden lo hacía para que su cumplimiento se efectuara ajustándose a los principios de la Constitución Nacional, y en modo alguno dejándolos de lado.

Sr. Bravo Herrera. — Así es.

Sr. Solari Yrigoyen. — Es curioso que le corresponde a un legislador de la Unión Cívica Radical precisar el concepto y el alcance de los decretos del doctor Luder en un debate donde el señor senador, como es público y notorio, debería interpretar cabalmente las opiniones de sus colegas del justicialismo. Muchas gracias, señor senador.

Sr. Bravo Herrera. — No es curioso lo que acaba de decir el señor senador porque todo eso es para nosotros muy sabido y obvio. Es decir, es conocido que durante el gobierno provisional del doctor Luder se dictaron tres decretos, cuyas copias tengo a la vista, por los cuales se estableció el sistema para luchar contra la guerrilla. Era correcto que, existiendo un hecho anómalo que asolaba al país y no disponiéndose de leyes apropiadas dentro del estado de derecho en que vivíamos, se sancionaran los métodos legales para que, dentro de un contexto normativo, se pudiera castigar a las personas que estaban delinquiriendo.

Esas disposiciones se incorporaron en el proyecto de defensa nacional del gobierno de la señora de Perón y fue aprobado inclusive por los radicales.

Ahora bien, como dije, tengo conocimiento de la declaración del doctor Luder con respecto al significado de la expresión "aniquilar el accionar de los elementos subversivos", textualmente extraída del decreto correspondiente. En consecuencia, no sé qué falta estoy cometiendo en todo esto puesto que si no he hecho referencia específica a las declaraciones en tal sentido del doctor Luder es porque simplemente no puedo mencionarlo todo; estoy desarrollando una exposición de acuerdo con mi lógica, pero acepto con todo gusto la interrupción del señor senador y digo que el tema es tal como

lo ha planteado él; pero ello no contradice de ninguna manera mis principios.

¿Está satisfecho con mi respuesta el señor senador?

Sr. Solari Yrigoyen. — Sí, muchas gracias, señor senador. Pero lo que yo quería precisar es que de ninguna manera en esos decretos se autorizaban los métodos terroristas que se aplicaron al margen de su propia voluntad y que, como lo sostuvo el propio doctor Luder, no deberían haberse apartado en su aplicación de ninguna de las normas estrictas de la Constitución nacional.

Sr. Martiarena. — ¿Me permite una interrupción el señor senador por Salta?

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor senador.

Sr. Martiarena. — Para terciar en este debate voy a recordar que en dos oportunidades anteriores he traído a este recinto el texto de un decreto que deliberadamente ha tenido poca difusión.

Lamentablemente, no lo tengo a mi vista en este momento porque no creí que se pudiera plantear esta cuestión.

Me estoy refiriendo a un decreto firmado en su oportunidad por la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, en el cual se establecía de manera concreta y terminante que todas las actuaciones que se hicieran durante las actividades militares con motivo de la subversión, cuando intervinieran personas o bienes, debían ser puestas a disposición de la Justicia. Este es un documento muy valioso en el desarrollo de los acontecimientos de esa época y repito que deliberadamente los comentaristas lo pasan por alto y no lo mencionan.

El propósito del gabinete de esa época fue que se llevaran adelante las acciones militares necesarias para aniquilar la subversión en los términos en que la expresión "aniquilar" significa dentro del concepto militar; se dejaba aclarado que las actuaciones debían ser puestas a disposición de la justicia, como acabo de precisar.

Esto es lo que quería dejar aclarado y si hubiera alguna duda podría hacer buscar la copia del decreto al que me he referido.

Sr. Berhongaray. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Presidente (Otero). — ¿El señor senador por Salta permite una interrupción del señor senador por La Pampa? Se trata de una interrupción a la interrupción...

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor presidente.

Sr. Berhongaray. — Es muy breve. En la misma línea argumental de los señores senadores preopinantes, quiero recordar que el concepto de aniquilamiento militar siempre estuvo condensado en aquel parte de la batalla de Maipú que envió el general San Martín después de su triunfo en ese combate. Dijo San Martín, entonces: "Las tropas del enemigo fueron diezmadas. Sus jefes, hechos prisioneros. No quedó resistencia alguna. Hemos capturado toda su artillería y su caballería. Su poder de resistencia fue aniquilado". Este es el famoso parte de guerra que envió al Consejo Supremo el general San Martín, y en el cual definió para siempre el concepto de aniquilamiento, es decir, en términos militares, quitarle al enemigo la capacidad de reacción, y nada más que eso.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Presidente (Otero). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Efectivamente, aniquilar el accionar del elemento subversivo significa en última instancia destruir su vocación de lucha. Si en virtud de ello se producen necesariamente destrucciones o muertes, se tratará simplemente de episodios determinados por la necesidad de cumplir con esa finalidad. Pero también puede ocurrir, por ejemplo, que una fuerza rodee a la otra y la supere ampliamente, convenciénola, inclusive, por medios psicológicos, de que no tiene sentido luchar; en este caso el enfrentamiento termina sin que haya bajas.

Nos hemos ido un poco de la cuestión, aunque no estaba mal hacer estas aclaraciones. Quisiera ahora referirme a los antecedentes en materia de intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas, asunto que no tendría que atemorizar a nadie, porque no se trata de una facultad de las fuerzas armadas sino de una obligación que puede imponerles el poder político, que es el único habilitado a tal efecto.

(Lee) "Había copiado algunas disposiciones que después fui tachando parcialmente para evitar demasiadas citas. Tenemos, por lo pronto, el artículo 6º de la Constitución: "El gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantizar la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores; y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otra provincia". Tenemos entonces aquí un caso en el que podría ocurrir que las fuerzas armadas tuvieran que intervenir en una provincia. Como dijo un diputado radical de cuyo nombre no me acuerdo, que habla mucho, durante la interpelación

a los ministros de Defensa y del Interior con respecto a los lamentables sucesos de enero último, frente a la cuestión de por qué se había ido a reprimir con las fuerzas armadas; no los vamos a reprimir con los bomberos. En síntesis, pues, en el caso de la hipótesis constitucional amplia del artículo 6º se plantea la posibilidad de que tengan que intervenir las fuerzas armadas en una cuestión interna.

Tenemos también el artículo 21 de la Constitución, sobre el servicio de defensa, que establece en su primera parte: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional". Vemos que esta no es una cláusula operativa sino que se tiene que reglamentar: tiene que establecerse en qué consiste el servicio militar, a qué edad se lo debe cumplir, qué requisitos deben satisfacer los soldados y cuáles son sus derechos y obligaciones. Además, en las leyes militares se establecen no sólo derechos para los soldados sino también para la gente de las zonas ocupadas y para los prisioneros.

El artículo 23 de la Constitución se refiere al estado de sitio: "En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales...". Este es otro caso en el que las fuerzas armadas intervienen. Esto ha ocurrido siempre y lo autoriza el Senado, salvo lo sucedido en el gobierno radical éste, que aprovecha que nosotros no estamos para moverse declarando el estado de sitio, por ejemplo, y deteniendo a personas sobre las cuales la justicia declara después que no andan en actividades subversivas ni en cuestiones de drogas.

De todas maneras, nosotros tenemos el artículo 67 de la Constitución Nacional, que establece en su inciso 28 la facultad que tiene el Congreso de: "Hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes". Además, este artículo reviste mucha importancia por cuanto se refiere también a las atribuciones del Congreso en el ámbito militar. Por cierto, nuestra Constitución tiene un esquema amplio, razón por la cual perdura mucho tiempo; y luego están las reglamentaciones.

He consultado muchos libros sobre derecho constitucional, pero citaré sólo a Linares Quintana. Dice este tratadista que "resulta natural

la existencia de las fuerzas armadas en toda comunidad, a la par que su necesidad se vuelve manifiesta, si se para mientes en sus funciones exterior e interior; asegurar y mantener la personalidad internacional en lo externo, como hecho, y resguardar la seguridad jurídica en la vida interna de cada colectividad”.

Continúa diciendo más adelante que “Así como, dentro del ordenamiento institucional argentino, el poder judicial, con la Corte Suprema a la cabeza es el guardián jurídico de la Constitución, las fuerzas armadas, mediante el empleo de la fuerza organizada jurídicamente, empuñan las armas también para la defensa del orden jurídico establecido por la ley suprema de la Nación y, cuando las circunstancias lo imponen, para defender la soberanía de la Patria en el ámbito internacional”.

Desgraciadamente, dentro de los cambios efectuados en el seno de la Mesa del Consenso Democrático, fueron eliminadas disposiciones relacionadas con la defensa de la Constitución y de la libertad —seguramente después haga una moción muy especial al respecto—, pensando quizás que el hecho de que figurara la defensa de la Constitución en una ley de este tipo incitaría a las fuerzas armadas a actuar en cuestiones internas.

Dice también Linares Quintana que: “Dentro del Estado constitucional, a las fuerzas armadas les compete el trascendental papel de defensoras de la Constitución y la soberanía de la Nación, pero bajo el control y sujeto a la decisión de las autoridades civiles”, y agrega luego: “Por eso, asimismo, es que nuestra ley fundamental, en su artículo 21, establece que todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional. O sea, que tan sagrado deber de empuñar las armas para defender la Patria y la Constitución, debe cumplirse conforme a la ley”.

Y más adelante dice que “la institución militar es el brazo armado de la Constitución”, y que: “Entre aquellas responsabilidades de defensa de la Patria y de la Constitución ocupa el lugar primero... El deber militar no se agota, pues, en la defensa heroica contra quienes pretenden violentar nuestras fronteras. La Patria y la Constitución pueden ser destruidas desde adentro, como lo demuestra dolorosamente la experiencia casi universal en los últimos quince años”.

En la interpelación llevada a cabo en la Cámara de Diputados con motivo de los sucesos de enero a la que concurrieron los ministros del Interior y de Defensa, un diputado manifestó

cómo era posible que hubieran usado las fuerzas para reprimir la rebelión cuando todavía no se había sancionado definitivamente el proyecto de ley pertinente. Es aquí cuando surge la afirmación del otro diputado que expresa: “No, si vamos a usar los bomberos”. Y el ministro de Defensa dice: “Estimo que sí, señor diputado”, estoy citando la contestación textual del ministro Jaunarena. “¿Por qué razones?”, le preguntan, “Las razones se encuentran en el artículo 86 de la Constitución Nacional, en virtud del cual el presidente de la Nación puede disponer de las fuerzas armadas en caso de conmoción interior”.

Luego el diputado le dice: “Lamentablemente, advierto que el señor ministro no ha leído el proyecto”; dice eso porque el proyecto, al prohibir la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas, hacía que ellas no pudieran actuar en una represión. Pero el señor ministro dice “quizás el señor diputado no haya leído la Constitución que consagra la supremacía de ésta sobre la ley”. Esto es lo que a mí, señores senadores, me ha angustiado en todo este tiempo durante el cual se consideró este proyecto; porque yo, como hombre de derecho —digamos, ya envejecido en el ejercicio de las leyes—, viendo más bien el lado de la injusticia que el de la justicia, habiendo soportado todos los gobiernos militares, a veces desde lejos y otras sufriendo sus consecuencias, y ahora con la delicada tarea de legislar, pienso que esta tarea se tiene que hacer con sumo cuidado, de manera que las leyes respondan a la libertad y a las necesidades del país y estén de acuerdo con la Constitución.

Pero ésta no es la primera vez que escucho de parte de dirigentes radicales que la ley no puede establecer la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas porque esto significaría volver a la ominosa época anterior y, en ese caso, los tanques estarían apuntando para adentro.

Pero cuando la vida diaria, la vida concreta, la realidad obliga a que las fuerzas armadas intervengan, entonces se dice ¿cómo? ¿Esto no es doctrina de seguridad nacional? ¿No se está refiriendo al pueblo contra el que se interviene? Esta es otra situación, contestan. Se trata de una aplicación de la Constitución Nacional. Desde chicos nos enseñan que la Constitución es la ley suprema de la Nación y que deben subordinarse a ella las leyes nacionales y tratados celebrados con potencias extranjeras.

Entonces, ¿cómo puede ser que no se legisle respecto de este punto aunque sea sosteniendo que no se legisla porque son cláusulas operati-

vas constitucionales, concepto con el cual disiento. Que se diga eso, pero que no se promueva por ley; se lo prohíbe porque es doctrina de seguridad nacional y se lo aplica siempre que sea necesario porque se trata de la Constitución Nacional.

Y así termina la frase feliz del ministro, que salvó la situación. Esta no es una cuestión de habilidades dialécticas sino de un trabajo serio con el que nosotros debemos solucionar el problema de la defensa nacional y de los militares, de manera que ellos sepan a qué atenerse.

He tenido la curiosidad de hablar con diplomáticos, representantes militares de muchas naciones —no de todas— y al plantearles este problema se mostraron sorprendidos y pensaban que algo raro me sucedía. Luego de terminar la discusión me seguían mirando con extrañeza. Porque ésta es una cuestión que ocurre en todos los países, en los socialistas y en los capitalistas. Las fuerzas armadas, que son una estructura muy costosa, son utilizadas en el lugar que es necesario de acuerdo al poder político —y no a ellas porque, evidentemente, tienen que estar subordinadas al poder político— y de acuerdo a la reglamentación anterior para que las fuerzas armadas ya tengan conciencia de que no se las utiliza arbitrariamente en defensa de nuestra sociedad.

Entonces, éste es el pensamiento que me suscita ese incidente —dicho con un sentido amable— ocurrido en el transcurso de esa sesión.

Por otra parte, al terminar su exposición el señor ministro de Defensa dijo lo siguiente: “Desde el punto de visto doctrinario creo que es aconsejable mantener la distinción que señala el proyecto de ley de defensa que, por otra parte, desde mi punto de vista no podrá constituirse en un obstáculo para el ejercicio de las facultades constitucionales que el presidente de la Nación tiene respecto de la hipótesis de conmoción interior, como la que ya hemos analizado en este debate.

Lo que yo señalo, entonces, es que pongamos el debate en este punto y que expresemos que puede ser necesario que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones internas en favor de la Patria, de la sociedad, de la democracia y de la Constitución, que el Poder Ejecutivo va a ser el único en aplicarlo y directamente, porque la cláusula de la Constitución es operativa y así terminamos con la cuestión. De esta manera, tendremos una ley honrada y la gente nos va a respetar más a nosotros, incluyendo los propios militares. Lo que no se debe hacer es aprobar una ley de modo que cuando se

está sancionando, los argumentos son insuflados y luego cuando se tenga que aplicar se dirá que esto es una cosa y otra es la Constitución.

Observen lo que piensa el señor ministro sobre este particular a continuación: “Si el señor diputado quiere una síntesis de mi pensamiento le diré que la actuación de las fuerzas armadas tiene que estar enmarcada en el ámbito de la defensa nacional con una ley de defensa y en el ámbito de la defensa de las instituciones de la República por una ley que se refiere específicamente”.

Es decir que dentro del oficialismo no hay acuerdo sobre cómo vamos a terminar esta cuestión que ha sido embarullada, por el gobierno que comenzó a fines de 1983, sobre la base de la doctrina de la seguridad nacional en lugar de estudiar directamente una ley con la ayuda de toda la sociedad política y de las fuerzas armadas, a las que no se tenía que dejar a un lado, para obtener una disposición legal que contemplara la defensa de la República.

Por una cuestión cronológica, no se puede expresar que la Constitución esté adscripta a la doctrina de la seguridad nacional pero, sin embargo, autoriza sospechosamente la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas.

Dejo así expresado este pensamiento sobre esta cuestión que hasta podríamos denominar procelosa pero es evidente que la legislación argentina, uniformemente partiendo de la Constitución Nacional, establece la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones internas.

Por ejemplo, se encuentra vigente todavía, increíblemente, una antigua ley que data de 1891, la que establece en sus artículos 19, 20 y 21 el uso de los ferrocarriles en caso de situaciones especiales. Así, el Poder Ejecutivo o las autoridades que él determine tienen derecho preferente para transportar las fuerzas militares y los materiales de guerra suficientes, y para exigir el despacho extraordinario y, en caso de conmoción interior o invasión extranjera, el Poder Ejecutivo podrá disponer por su cuenta el uso de los ferrocarriles.

Esta, simplemente, es una cuestión nunca discutida; se trata del uso de los ferrocarriles, como ocurre en todos los países del mundo cuando hay guerra o una conmoción determinada. Sucedió, por ejemplo, cuando cayó un avión japonés en el Japón e intervinieron las fuerzas armadas. Porque, en realidad, no sólo debe tratarse de guerrilla para que intervengan las fuerzas armadas.

Tengamos en cuenta que la valoración o fijar la pauta sobre esta cuestión es, simplemente, caer en un tembladeral, ya que nunca se podrá tener idea de los diferentes hechos que plantea la realidad y de lo que ocurrirá en el futuro.

Se trata de una cuestión de apreciación, de sentido común, que haga mover al poder político para ordenar a las fuerzas armadas que intervengan en determinado momento en una circunstancia en que su organización, su logística, lo haga necesario.

Y tenemos un decreto de nuestro gobierno que curiosamente sigue rigiendo, y con toda seguridad ustedes lo van a incluir en la cláusula para que se derogue; en realidad, se trata de una colaboración de mi parte para que se pueda tomar nota de ello.

El decreto 15.385 de 1944, ratificado por la ley 12.913 se refiere a las zonas de seguridad de frontera, y también del interior. En cuanto a estas últimas, se trata de ciertos lugares que deben ser protegidos en el orden militar o sitios donde se fabrican armamentos o se realiza investigación. La custodia corresponde a Gendarmería Nacional o a Prefectura Naval Argentina.

Por otra parte, estas dos fuerzas de seguridad, que dependen del Ministerio de Defensa Nacional cumplen misiones de policía de frontera como, por ejemplo, ocuparse de la entrada ilegal de gente a la frontera, del contrabando —específicamente el de drogas—, etcétera.

Es extensa la lista de hechos en que deben intervenir en carácter de servicio de policía estas fuerzas que honran verdaderamente su uniforme.

Hay un artículo que dice que en caso necesario, el servicio de policía a cargo de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina deberá ser reforzado con personal o elementos del Ministerio de Guerra o Marina y por contingentes de la Policía Federal.

Teniendo en cuenta lo que ocurre en la práctica, no se puede entender que por un inciso o disposición teórica, cuando están entrando maleantes armados, con mejores armamentos que los de la Gendarmería, y están cometiendo crímenes, y hay allí un cuerpo del Ejército o de Prefectura Naval, evitemos que actúen, porque sería un crimen verdadero, y que incluso lo hagan por una ley que los ampare, porque, de lo contrario, todavía serían sujetos de un proceso.

Quiero que todo esto, que es tan grave porque la defensa nacional incluye la situación de

tro de lo posible, con toda honradez y total espíritu de realismo. Deseo también que el cuidado de nuestras fronteras, que es donde comienza nuestra soberanía y que está a cargo de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval Argentina, tenga establecida su cobertura de defensa y que un poder más fuerte en caso necesario los protegiera en su sacrificada tarea. Que exista la ley para que ellos lo sepan y también aquellos que delinquen y, a su vez, para que la población se encuentre protegida.

Después viene —no voy a decir nada sobre él sino que simplemente voy a mencionarlo en honor a la paciencia que los señores senadores están teniendo al escucharme— el proyecto del doctor Illia. Este proyecto, que fue presentado en mil novecientos sesenta y tantos —no recuerdo con certeza el año— tiene, como cosa rara, dos fundamentaciones. He visto una fundamentación del proyecto y otra del trabajo.

El proyecto del doctor Illia desarrolla una tarea doctrinaria, yo diría enjundiosa, sobre lo que son las fuerzas armadas, su necesidad de utilizarlas, los peligros que acechan al mundo, la situación de las fuerzas internacionales, cómo éstas desarrollan en la actualidad sus luchas en aquellos países de un grado menor de poderío, etcétera.

Lamentablemente, este proyecto del presidente Illia no fue aprobado porque, como ustedes saben, cayó por medio de una revolución. Pero debemos destacar que fue el antecedente del decreto ley 16.970.

No quise entrar en esta oportunidad en la misma trabajosa acción que hice la otra vez, de fotocopiar uno y otro, entregando luego dichas copias a cada senador pidiéndoles que lean tales y cuales artículos, porque en muchos aspectos se transcriben en forma textual varios conceptos del decreto ley 16.970. Incluso creo que en el aspecto que a nosotros nos interesa el decreto ley 16.970 es más suave, dado que el otro era más duro respecto de las situaciones planteadas.

De todas maneras, con ley 16.970 o sin ella, con ley Illia o con ley justicialista, se habrían producido igualmente los hechos que ocurrieron entre 1976 y 1983, porque se estaba legislando fuera de la ley.

No es el artículo 43 del decreto ley 16.970 el que provoca la revolución del 24 de marzo de 1976. Los militares no han recurrido a un artículo de una ley para decir que ello los autorizaba; no han pedido asesoramiento para saber si podían actuar de acuerdo con dicha norma legal.

(Lee) "Luego está el proyecto de la señora Isabel Perón. En este sentido, quiero leer brevemente —no quisiera ser extenso aunque hay mucho material— las expresiones del diputado Suárez en la sesión del 20/21 de noviembre de 1975.

En primer lugar, él se lamenta de que no se haya escogido el artículo 60 del proyecto del doctor Illia, que se intitulaba "glosario de términos" y que constituía una especie de pequeño diccionario de muchas palabras. O sea que este artículo 60 era atípico.

El diputado Suárez daba algunas definiciones y explicaba situaciones que hacían más aplicable la ley, después de expresar que la norma estaba bien pero lamentándose de que no hubieran cubierto esa falencia.

Luego expresa lo siguiente: "A los efectos de la interpretación de aquella ley —se está refiriendo a la ley Illia— se entendía por seguridad nacional —hace mención al glosario de términos del artículo 60— la situación en virtud de la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de cualquier tipo de ataque o agresión externa, conmoción interior, causas de emergencia grave o catástrofe".

"Definíamos como objetivos e intereses nacionales, los fines básicos y permanentes contenidos en la Constitución Nacional en virtud de los cuales el Estado actúa con miras a la consecución del bienestar y seguridad nacionales."

"Decíamos que política de defensa es la parte de la política nacional tendiente a lograr y mantener en la Nación un índice adecuado de seguridad." No le tenemos que tener miedo a las palabras tales como seguridad porque el país tiene que gozar de ella. Para eso, por ejemplo, tenemos Policía Federal a la que muchas veces se la critica porque la seguridad no es total. Entiendo que somos hombres de trabajo, hombres de paz y, por lo tanto, queremos que la gente pueda andar con toda tranquilidad por las calles sin que le ocurra nada. Esto, en último término, es lo que se busca de un Estado organizado en este aspecto.

"Yo he querido hacer estas observaciones —decía el diputado Suárez—; mis compañeros de sector señalarán algunas otras. Esto es fundamental con respecto a la guerra general, a la guerra convencional. Pero no nos podemos engañar sobre lo otro. Aquí y ahora el problema de la guerrilla se ha hecho más patente que antes y que en otros lugares; pero éste es un problema que existe —y le faltó decirlo al diputado Sandler— por ser un poco la consecuencia de este nuevo tipo de política internacional y de

manera de actuar de las grandes potencias a fin de tratar de imponer a los países que pretenden sean sus satélites, su gravitación y su nacionalismo.

"Señalo que este problema, con la gravedad con que lo tenemos ahora, no lo teníamos en 1964; pero ya se vislumbraba en el mundo y por eso en el mensaje que acompañó al proyecto de ley, en el que no se especificaban capítulos sobre zonas de subversión y todo esto que trae el proyecto que consideramos, ya expresábamos el temor sobre el problema. Por eso, decíamos que 'el bienestar y la seguridad son los dos objetivos permanentes del Estado. Para llevar a feliz término toda política de desarrollo tendiente a incrementar el bienestar nacional se deben crear las condiciones de seguridad adecuadas y es responsabilidad del Estado el proporcionar esa seguridad a la Nación, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional...'"

Bien; no quiero cansarlos con estas lecturas pero debo hacer una mención que me parece conveniente. Les anticipo que trato de ser lo más liviano posible. He hecho una síntesis del tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto de la señora Isabel Perón. Me voy a referir a un sólo artículo, el 30, del dictamen en minoría.

En la sesión del 20/21 de noviembre de 1975 el diputado Fernando Mauhum hace saber que el bloque de la Unión Cívica Radical da el voto favorable a la redacción propuesta para los artículos 20 y 30 en el dictamen en minoría. Además, adelanta que el bloque ha propuesto modificaciones para determinados artículos.

¿Qué proponen los radicales en este artículo 30 y en qué consistía? Justamente en el artículo 43 —que tanto se discute— de la ley 16.970, cuya eliminación fue propuesta por el proyecto del Poder Ejecutivo en febrero de 1984. La propuesta radical en la Cámara de Diputados decía así: "En caso de conmoción interior, sea ésta originada por personas o agentes de la naturaleza cuya gravedad implique o pueda implicar la alteración del orden público y de las actividades y servicios públicos esenciales, el presidente de la Nación podrá, con previa autorización del Congreso de la Nación en el período ordinario de sesiones, declarar zona de emergencia a parte o partes del territorio nacional para preservar, mantener o restablecer el orden, asegurar las actividades y servicios públicos esenciales y prestar los auxilios necesarios mediante el empleo inclusive de las fuerzas armadas. Durante el receso del Congreso el Poder

Ejecutivo nacional podrá proceder a dicha declaración por sí solo, debiendo someterla y convocar simultáneamente a sesiones extraordinarias al Congreso nacional para que se reúna en el término de cuarenta y ocho horas. La falta de convocatoria en la forma y plazo establecidos hará cesar automáticamente la medida dispuesta”.

Es decir que la diferencia entre la propuesta del bloque radical y la del justicialismo era que la declaración de zona de emergencia debía ser comunicada al Congreso nacional. A su vez, la posición radical sostenía —a través del entonces diputado Mauhum— que debía pedirse el asentimiento al Congreso si es que se encontraba reunido y, en caso de no estarlo, se debía llamar a una sesión extraordinaria para que lo aprobara, perdiendo su vigencia si pasaba un determinado tiempo.”

Esto es todo. La cuestión sustancial estaba muy bien planteada tanto de un lado como del otro y adviertan que yo encuentro razonable la posición del bloque radical de ese entonces, la que también podría haber tenido aceptación general si se la hubiera analizado un poco más.

De todas maneras, entiendo que es una posición razonable, atendiendo a la posibilidad de una situación que hiciera necesaria la intervención de las fuerzas armadas dentro del país, establecer previamente por medio de una ley cuál es el procedimiento que se debe cumplir. Esta forma permitiría, inclusive, que los militares no actuaran si el procedimiento no quedase claramente indicado; esto importa una protección para ellos y también para la sociedad porque habrá una ley que dirá lo que debe hacerse. Pueden faltarnos médicos, por ejemplo, o cualquier otro tipo de gente aplicada a las ciencias o a las artes, pero lo que no puede faltarnos nunca es la ley porque, de lo contrario, desaparecería la sociedad; cada actividad tiene que estar reglada.

Voy a pasar ahora a un proyecto presentado en su momento por los senadores Gass y Mauhum, sobre lucha contra el tráfico de drogas. Prefiero esta expresión en lugar de “narcotráfico” porque esta última me parece que tiene una raíz del idioma inglés.

En el título X de ese proyecto se establecía perfectamente la reducción de penas para aquellas personas incurso en cualesquiera de los delitos previstos en esa iniciativa cuando aportaran datos o dieran información que permitiera el esclarecimiento del hecho o la condena de los imputados; inclusive, se llegaba a proponer la eximición de la pena cuando la información permitiera individualizar al autor

de determinados delitos. Es decir, se trata del caso del delincuente que se pasa al otro lado, a la policía.

El artículo 37, al referirse a los artículos 35 y 36 de ese proyecto, decía que “...cuando la seguridad personal del condenado o procesado o de su familia lo requiera, el tribunal podrá disponer el alojamiento del mismo y de su familia en una unidad militar...”. Se trata del caso de una persona que participa en una organización criminal y que, al dar información, puede ser eliminado o sufrir él y su familia consecuencias muy serias.

Todo esto que estoy mencionando no significa defender la doctrina de la seguridad nacional ni adherir a la lucha Este-Oeste; esto no implica sometimiento a ningún imperialismo. Se trata de medidas extraordinarias que se adoptan ante el flagelo de las drogas, que cada vez aparece más en nuestro país.

Recuerdo las declaraciones un tanto presuntuosas de las autoridades policiales durante la época del gobierno de Onganía cuando sostenían que la Argentina era sólo un país de tránsito de drogas y que el problema estaba totalmente dominado. Sin embargo, hoy ustedes pueden ver gente drogada hasta en las playas.

En consecuencia, ese proyecto de ley presentado por dos senadores por quienes siento el mayor respeto por todos sus atributos personales, por su seriedad y sapiencia, no sólo expresaba sus opiniones sino que también había tenido en cuenta proyectos anteriores de semejante orientación. Esa iniciativa fue muy discutida en la Cámara de Senadores en cada uno de sus puntos y se introdujeron modificaciones a muchos de sus artículos. El debate realizado en agosto de 1986 fue muy interesante, habiéndose trabajado con mucha seriedad y responsabilidad, lo cual no quita que esto también haya sucedido en otros debates. Esto acentuaba más todavía la noción que se tenía de la importancia del caso que se estaba tratando, de la gravedad de los momentos que vivía el país. Y este artículo no se la quitó.

Quizá no les guste mucho a las fuerzas armadas la intervención en cuestiones internas. En Estados Unidos, por ejemplo, se sancionó hace cuatro años una ley que aumentaba las facultades de las fuerzas armadas para actuar en la represión del tráfico de drogas y de los adictos a la droga —no drogadictos, aprovecho la oportunidad para decir—. Y las autoridades militares de ese país expresaron su desacuerdo porque se las sacaba de sus funciones específicas.

Es claro que, en situaciones normales, cualquier militar prefiere estar ocupado en cuestio-

nes específicamente militares. Pero la situación era tan grave en los Estados Unidos que allí se está acentuando cada vez más la actuación de las fuerzas armadas en la lucha contra la droga.

Puedo citar además la práctica nacional, muy rápidamente porque se trata de una cuestión muy conocida por todos ustedes. Tenemos en primer lugar la conquista del desierto, iniciada por Rosás, continuada por Alsina y terminada victoriosamente por Roca, quien luego fue presidente de la Nación. Y quiero citar también dos casos, lo que quizás no agrada a algún sector político, pero lo hago sin ningún sentido de ataque, porque considero que se trató de cuestiones del momento que le tocó asumir al presidente de aquel entonces.

Me refiero a la Semana Trágica y a la represión en la Patagonia.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Defensa Nacional, senador Antonio T. Berhongaray.

Sr. Bravo Herrera. — Nunca, ni siquiera en conversaciones privadas, he hecho mención de estos hechos. Comprendo que deben haber sido acontecimientos que obligaron a tomar ciertas decisiones a un presidente tan democrático, un hombre tan honrado como Hipólito Yrigoyen, cuya vida es de lo mejor que se puede concebir como noción ética. Pienso que si él intervino es porque tenía que intervenir. Así fue que encargó al general Dellepiane reprimir con tropas a cuatro mil sediciosos que estaban en los talleres de Vasena. También había bandas que estaban asolando extensas zonas de Buenos Aires. El 20 de junio una huelga general anarquista se extiende por la Patagonia. Se nombra a un teniente coronel Varela, quien no reprime sino que persuade. No dispara. Pero cuando vuelve se inician de nuevo los acontecimientos, con muchos actos de terrorismo. Con doscientos efectivos derrotó a seiscientos subversivos que estaban atrincherados en Paso Ibáñez, haciendo rendir además a otros setecientos que retenían rehenes en un lugar que se llamaba "La Anita". La gente que estaba en rebelión —no sé, en realidad, cómo podría ser calificado esto dentro del Código Penal— había llegado a asesinar a un conscripto cuyo nombre ha olvidado, con toda seguridad, la posteridad: se llamaba Fernando Fischer.

Estos son acontecimientos que, de pronto, la vida le plantea a un gobierno, que tiene que resolver el problema. Y son hechos por los cuales nunca se atacó al gobierno; ni siquiera he

hablado de ello. El gobierno actuó en función de acontecimientos propios de la época. Porque, como se recordará, hubo en ese entonces, sobre todo por parte de un grupo de anarquistas, actos de violencia. Yo he estado siempre en contra de la violencia, tanto de aquella de quienes dicen que luchan por la libertad como también de la del gobierno. Con lo único que estoy de acuerdo es con la ley. Por supuesto que considero que sí es necesario a veces aplicarla duramente para curar la enfermedad del momento. Luego de agotados los medios terapéuticos, habrá que aplicar la cirugía, según la expresión utilizada en medicina. Eso lo hacen todos los gobiernos que quieren ser tales y todos los Estados que quieren seguir siéndolo.

Desde jóvenes, todos nosotros hemos participado en elecciones. Podemos recordar cómo estaban custodiadas por los soldados del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Marina. ¿Por qué? Porque en cada provincia, si bien se contaba con la policía provincial, la gente, lógicamente, desconfiaba de su imparcialidad. De manera que todos estaban contentos de que fueran los soldaditos quienes custodiaran la normalidad del acto comicial.

Esto no queda comprendido en el concepto general de la seguridad nacional. No es encasillarse en ninguno de los bloques en que está dividido el mundo ni en la guerra fría.

Por ejemplo, también podemos tener en cuenta un caso que no es de conmoción interior sino una circunstancia pacífica, porque el concepto tiene que ser amplio. Me refiero al de la custodia presidencial.

Desde épocas lejanas, cuyo origen uno ya no recuerda, los granaderos custodian al presidente de la Nación. Esto constituye un honor incluso para el primer mandatario: ser custodiado por los granaderos a caballo de San Martín. Al menos, yo opino en esa forma.

Evidentemente, las fuerzas armadas intervienen en una cuestión interna, que es la custodia de una persona que es el primer magistrado, el máximo representante del país.

Si lleváramos al extremo la posición de los diversos proyectos que han sido presentados y, sobre todo, los conceptos incluidos en esos terribles discursos manifestados en la Cámara de Diputados —sería bueno que los leyera quienes aún no lo hayan hecho—, tendríamos que sacar inmediatamente a los granaderos del lugar que hoy ocupan y trasladarlos a la frontera; en su lugar, debería quedar la Policía Federal o la Gendarmería.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — Estoy de acuerdo con lo que usted ha manifestado en cuanto a que es un honor para los presidentes de la República estar custodiados por el Regimiento de Granaderos a Caballo.

El señor senador lo señala como un aporte a la tesis que viene sosteniendo referida a la necesidad de la intervención de las fuerzas armadas en determinados momentos de la vida del país.

Sr. Bravo Herrera. — Así es.

Sr. Solari Yrigoyen. — Pero si señalamos ese honor, también debemos mencionar el deshonra vivido cuando en numerosas oportunidades ese mismo regimiento, que ha tenido la obligación de custodiar y defender a su presidente, lo ha entregado.

Recuerdo perfectamente el golpe de Estado del 28 de junio de 1966, cuando tuve la honra y el privilegio de acompañar durante toda la noche —hasta las siete de la mañana—, al presidente Illia, quien fue expulsado por la violencia de la Casa de Gobierno.

¿Cómo el Regimiento de Granaderos a Caballo, con la excepción de un solo joven oficial al que tengo bien presente, no fue fiel con el presidente Illia? No sólo no fue leal sino que estando aún en su despacho el entonces presidente constitucional se puso a las órdenes de las fuerzas golpistas. Inclusive, fueron quienes abrieron las puertas de la Casa de Gobierno para que entraran esos elementos subversivos y arrinconaran al presidente y a quienes lo acompañábamos en aquel momento en el despacho presidencial.

Voy a referir una anécdota que a mí, siendo joven en aquel entonces, me impactó como un caso inverosímil de infidelidad de un jefe militar que tenía la obligación de ser leal con el presidente Illia.

Estábamos, como le decía, arrinconados en el despacho presidencial. El presidente contó cuántos éramos los que lo rodeábamos y llamó al ordenanza pidiéndole que trajera aproximadamente veinte cafés. El servidor era un español noble que había acompañado al presidente Illia durante los años de su gobierno ejemplar.

En ese momento yo me encontraba en la puerta, en el límite entre la zona leal y constitucional, es decir el despacho y la antesala donde ya estaban los oficiales golpistas.

En el momento en que el ordenanza traía los cafés, un jefe militar colaborador estrecho hasta el momento del presidente constitucional, le preguntó —y yo escuché ese diálogo—: “¿A dónde va usted con esos cafés?”, a lo que el ordenanza respondió: “Los llevo a pedido del señor presidente”. El jefe militar infiel replicó entonces: “No hay más café para el ex presidente”.

Ese diálogo me quedó grabado a fuego no sólo como ejemplo de deslealtad sino porque todavía estaba el presidente legítimo en su despacho y fue la primera vez que oí que se lo desconociera como tal.

En síntesis, señor senador, para no abusar de su gentileza, quiero decir que si señalamos el honor que significa que el presidente esté custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, debemos precisar que ese honor se pone de manifiesto si el regimiento es leal. Pero cuando esos militares han contribuido a derrocar, y a veces hasta a tomar prisionero o echar por la fuerza, a quien tenían la obligación de custodiar, el honor queda hecho trizas y se convierte precisamente en todo lo contrario.

Sr. Bravo Herrera. — ¿Terminó, señor senador?

Sr. Solari Yrigoyen. — Sí, muchas gracias.

Sr. Bravo Herrera. — Estoy completamente de acuerdo con lo que el señor senador acaba de manifestar, aunque es un comentario un poco marginal respecto de lo que se estaba tratando. No obstante ello, lo acepto con agrado y participo completamente de ese razonamiento.

Aunque quizá les sorprenda que sea tema de mis meditaciones y de conversación con muchos amigos el papel que a veces han llegado a cumplir los granaderos, les digo que cuando ellos, que deben ser el paradigma del honor, incurren en ese quebrantamiento, hacen que recaiga sobre ese cuerpo un deshonor todavía peor.

Ese episodio que el señor senador rememora puede ser robustecido con otro. Me refiero al momento en que se saca al general Onganía. Justamente, quien mandaba ese movimiento es un general que luego lo sucede como presidente...

Sr. Solari Yrigoyen. — También ocurrió cuando la sacaron a la señora de Perón.

Sra. Malharro de Torres. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Berhongaray). — Está en el uso de la palabra el señor senador por Salta. Si él le concede la interrupción...

Sr. Bravo Herrera. — No me la ha pedido.

Sra. Malharro de Torres. — Le pido una interrupción, señor senador.

Sr. Bravo Herrera. — Ahora sí.

Sra. Malharro de Torres. — No sé si he llegado a comprender bien lo que quiso decir; usted se ha expresado bien, pero posiblemente yo no lo he entendido.

Creo que esta función de los granaderos va en mérito a lo que ese cuerpo ha significado para el país. Se debe al honor y al recuerdo de lo que simboliza que custodie la figura y la imagen del presidente de la Nación. Prueba de ello es que los granaderos no se encuentran armados; tienen el sable tradicional. Y aparecen, como el Cuerpo de Patricios, en todo acto de significación patriótica.

En realidad, la custodia del presidente está reservada a cuerpos especiales de otra índole y naturaleza. De manera que poco importa qué sucedió con el general Onganía porque no era el presidente de la Nación sino un usurpador del poder.

Sr. Bravo Herrera. — Creo que nos hemos alejado demasiado de la cuestión.

Muy brevemente, de acuerdo con lo que señaló la señora senadora por Mendoza, voy a manifestar con respecto al origen de la custodia de los granaderos que generalmente no están armados porque es una guardia de honor, pero en determinado momento se ponen ropa de fajina con el armamento correspondiente. No tiene importancia hacer una cuestión respecto de este tema; lo damos por terminado para seguir con la exposición del proyecto.

Otro hecho que quiero mencionar, como una comparación en el plano internacional —existen muchísimos supuestos, pero son tantos que su enumeración sería imposible—, es el caso de la lucha en Irlanda, donde se ha creado un ejército o fuerza de oposición denominada Ejército Republicano del Pueblo.

Para Gran Bretaña, este es un problema interno puro, y no solamente tiene este carácter sino que también es policial. Y a pesar de ello lo reprimen con las fuerzas armadas.

Creo que no cabe agregar nada más respecto de este caso citado teniendo en cuenta la antigüedad y la cultura de un país como Gran Bretaña, con todos sus antecedentes, independientemente de los problemas que nosotros podemos tener con él. Pero no podemos negar datos objetivos.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — El ejemplo de Irlanda no es, precisamente, apropiado para citar en este debate.

Previo a todo, quiero señalarle al señor senador por Salta que desde nuestro punto de vista repudiamos la violencia del IRA y de los grupos norteros del Ulster.

Pero Irlanda constituye una sola nación y no dos. Es una isla cuya nacionalidad la comparten los irlandeses del sur y del norte, que poseen hasta un idioma y una cultura propios, y que prefieren en su inmensa mayoría la religión católica, factores que definen el concepto jurídico y sociológico de nación. La división practicada en el norte, que tiene por capital a Belfast, es artificial y colonialista y fue impuesta por la fuerza por Inglaterra, que también durante siglos sojuzgó a la República de Irlanda la que proclamó su independencia absoluta recién en 1949.

Este es un problema muy complejo; tal vez podamos tratarlo con mayor profundidad en otro momento a través de un proyecto de declaración. Quería dejar a salvo que existe un fondo colonial que no podemos negar, especialmente cuando quien lo practica resulta también el usurpador de nuestros archipiélagos australes, y lo hace contra el pueblo irlandés que nada tiene que ver con el inglés. Se trata de dos pueblos de orígenes distintos: unos son sajones y otro celtas. Dejo aclarada esta diferenciación ante la mención del señor senador por Salta porque se trata de una lucha colonial muy especial aun cuando nosotros no aprobemos los métodos terroristas que se aplican tanto de uno como de otro lado en Irlanda del Norte.

Sr. Presidente (Berhongaray). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Bravo Herrera. — Hago mío todo lo dicho por el señor senador por el Chubut respecto de este punto. Estoy completamente de acuerdo con él pero no cambia el enfoque de la situación que estoy haciendo. Cito un caso pero no quiero decir si es justo o injusto; no analizo quién tiene razón.

Lo que quería expresar es que existe una verdadera lucha por parte de los irlandeses, que tienen que recuperar su libertad y unirse al resto del país, pero para los ingleses constituye un problema interno, que es lo que acaba de señalar el señor senador por el Chubut. Evidentemente tienen un problema interno y ellos lo atacan con las fuerzas armadas. Los ingleses, desde su concepción legal, tienen un problema interno de violencia y lo atacan con el ejército.

Menciono otra circunstancia: es necesario que se cambie el carácter de delinquentes comunes que le asigna la señora Thatcher a los que cumplieron huelgas de hambre, que llegaron a concretarse hasta el final porque murieron; no obstante, no se ha cambiado esa denominación.

Paso a otro ejemplo: las depredaciones ocurridas con motivo del asesinato de Martin Luther King, un gran luchador por los derechos humanos, un negro que se movió en Estados Unidos en contra de todos los condicionamientos que lo asediaban, y que sin embargo mantuvo el espíritu de lucha hasta el momento de su muerte. Con motivo de ello, ocurrieron hechos de violencia que "La Nación" del 4 de abril de 1988 relata de la siguiente manera: "En la tarde del 5 de abril, Johnson ordenó la intervención de las tropas federales. Unidades de la 82ª división de paracaidistas, veterana del desembarco aliado de 1944 en Normandía y de la batalla de las Ardenas, ocuparon los puntos estratégicos de Washington, cuyo alcalde, Walter Washington, decretó el toque de queda desde las cinco de la tarde hasta las seis y media de la mañana". Este es un caso de disturbio que no se origina por una cuestión social o religiosa sino racial, que hizo necesaria la intervención de las fuerzas armadas dentro del país.

En muchos países del mundo el grave problema de las drogas va obligando a que el poder político ponga la gran estructura de las fuerzas armadas al servicio de la lucha contra dicho tráfico. Digamos que ésta es una cuestión fatal porque todos los países —me estoy refiriendo a los más adelantados—, lógicamente tienen estructuras muy grandes para luchar contra el delito y dentro de esas estructuras algunas especializadas para ciertas formas de delito, entre las que se encuentra el tráfico de drogas. Pero han sido sobrepasados; no pueden hacer nada.

De manera que si el asunto de las drogas se pone más grave en la Argentina, va a faltar un proyecto que propugne que las fuerzas armadas se unan en la lucha contra ese tráfico. A lo mejor no lo voy a presentar yo pero lo hará cualquier otro.

Tenemos que colocarnos en la realidad concreta, que es la que nos golpea y en la que a mí me gusta moverme. Un artículo publicado el 3 de marzo de 1988 en el diario "La Prensa" señala: "El secretario de Educación, William Bennett, expresó hoy que Estados Unidos debe considerar un mayor uso militar si quiere ganar la guerra internacional contra el tráfico de drogas".

rios' para recuperar a las comunidades que han caído bajo el control de los narcotraficantes".

Hay otro artículo en donde se habla de varias operaciones que tienen un nombre determinado. Para tranquilidad de ustedes aviso que no citaré a todas. Están, por ejemplo, la operación Rueda de Carreta, para interceptar el embarque de drogas. Con la Guardia Costera y la Marina norteamericana, y la Operación Trueno, que involucró a la DEA —que no sé qué quiere decir—, a la Guardia Costera, al ejército de los Estados Unidos y a funcionarios de las Bahamas. Después dice lo que se secuestró, etcétera. Como les digo, esto no gusta a los militares norteamericanos.

Se cita después un audaz operativo, en Bogotá, en la primera operación en el aire para combatir el narcotráfico, en donde las fuerzas armadas colombianas atacaron una avioneta y la obligaron a aterrizar.

En la sesión anterior se hizo referencia a la estructura militar de los Estados Unidos. En realidad, quizás la referencia ha sido de carácter expositivo, porque no he podido ver qué relación tiene en cuanto a nuestra legislación, la situación de las fuerzas armadas norteamericanas frente a nuestra posición. De todas maneras, fueron datos muy interesantes.

En este sentido, entiendo que comparar fuerzas armadas de un país con las de otro, cuando la diferencia es desmesurada, es peligroso. Tengo un informe al respecto y daré algunos datos.

El Ejército norteamericano tiene 785 mil hombres —dejo de lado las fracciones—; la Armada, 561 mil; la Infantería de Marina que es una superfuerza, 195 mil; la Fuerza Aérea, 597 mil. Así la cifra correspondiente a Infantería de Marina, sumada a la de la Armada asciende a 756 mil; y, como dijimos, en Ejército hay 785 mil hombres y, en la Fuerza Aérea, 597 mil.

Por otra parte, existen comandos unificados o específicos permanentes. El número de comandos unificados o específicos no está establecido por la ley pero actualmente existen los siguientes. Seis comandos unificados: Europa, Pacífico, Atlántico, Sur, Central y el de Disponibilidad, o sea uno que está destinado a cualquier lugar, y hay tres específicos: Aéreo Estratégico, de Defensa Aéreo Espacial y Puente Aéreo Militar.

Para desempeñar su misión, tales comandos disponen de un poderío integrado por 1.034 misiles balísticos intercontinentales, 35 submarinos de misiles balísticos, con un total de 592 misiles, 21 bombarderos estratégicos, 24 divisiones de Ejército, 4 divisiones de marines, 13

portaaviones, 202 buques de guerra de superficie, 97 submarinos de ataque de la Armada, 175 embarcaciones de patrulla, lanzaminas, anfibios, de apoyo logístico y auxilio, 24 barcos en la reserva nacional, 40 buques de carga y 40 barcos supertanques. Esto es lo que tiene cada comando. Y estos comandos, como digo, no están establecidos por la ley, sino que por las necesidades del momento; asimismo, están distribuidos en todas partes del mundo.

Como vemos, no se pueden comparar las fuerzas armadas que nosotros tenemos con las de Estados Unidos.

Aparte, ellos tienen la guardia costera, que es sumamente poderosa y responde al Departamento de Transporte, y en caso de guerra, a la Marina.

Y tienen, como ustedes saben —esto lo consideran como tema de discusión para comparar, diciendo que los países grandes tienen tal cosa y, por lo tanto, nosotros debemos llegar a eso— el servicio militar pagado.

Al servicio militar pagado se ha llegado después de la guerra de Vietnam. Los soldados no eran tan efectivos como ellos creían. Pero el gobierno norteamericano tiene la suficiente fuerza como para contar con esta enorme cantidad de soldados: alrededor de dos millones cien mil, sin contar los servicios pagados. Su sueldo es de 500 dólares por mes, y se aumenta cada dos años. Estos soldados permanecen cuatro años en sus cargos y son ascendidos; viven en el regimiento donde tiene grandes facilidades, y cuentan con muy buenos servicios sociales.

Sr. Presidente (Berhongaray). — Señor senador: voy a abandonar la Presidencia para solicitarle una pequeña interrupción.

—Así se hace.

—Ocupa la Presidencia la señora presidenta de la Comisión de Educación, senadora Margarita Malharro de Torres.

Sra. Presidenta (Malharro de Torres). — Para una interrupción tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Es simplemente para hacer una pequeña aclaración.

Escuchaba atentamente al señor senador cuando se refería al caso Johnson. Efectivamente, el presidente de los Estados Unidos envió a la Guardia Nacional para solucionar problemas internos.

Pretendí ser claro en la exposición que hice ayer. La Guardia Nacional no pertenece a las fuerzas armadas: está constituida por milicias que dependen de cada uno de los Estados: y

están pagadas por ellos. No integran las fuerzas armadas y tienen por función, precisamente, la de actuar ante graves perturbaciones internas.

Sr. Sánchez. — Exactamente lo mismo ocurría en algunas provincias. Estaba puntualizado en la Constitución que cada provincia debía tener su Guardia Nacional.

Sr. Berhongaray. — Sí.

En 1963 ocurrió otro caso similar, cuando Kennedy envió la Guardia Nacional a Misisipí por desórdenes provocados por problemas que hubo entre blancos y negros.

Respetuosamente le hice esta aclaración al señor senador Bravo Herrera porque creo que el ejemplo que él ha dado no es exactamente así o, por lo menos, contradice lo que habíamos dicho ayer.

Sr. Bravo Herrera. — Le voy a contestar que verdaderamente eran fuerzas combatientes. Dice acá que eran unidades de la 82ª División de Paracaidistas, veterana del desembarco aliado en 1944 en Normandía y de la Batalla de las Ardenas.

Sr. Berhongaray. — Johnson envió a la Guardia Nacional.

Sr. Bravo Herrera. — Lo que yo digo está en "La Nación".

Sr. Berhongaray. — Debe estar equivocado porque la información oficial es que fue la Guardia Nacional la que actuó en el caso que usted citó del presidente Johnson.

Sr. Bravo Herrera. — Está en el diario "La Nación". En caso de duda, por lo menos hasta que se compruebe que esto es equivocado, los señores senadores, incluso los no justicialistas, deben estar a favor mío en esta discusión.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edilson Otero.

Sr. Berhongaray. — Respeto su argumento. Simplemente le digo que un columnista de un diario puede incurrir también en errores.

Sr. Bravo Herrera. — Naturalmente.

Sr. Sánchez. — Muy a menudo.

Sr. Bravo Herrera. — Pero la publicación es muy clara, ya que dice que fueron enviadas unidades de la 82ª División de Paracaidistas, veterana del desembarco aliado en 1944 en Normandía y de la Batalla de las Ardenas.

En cualquier momento, señor senador, continuamos la conversación sobre este punto, pero me quedo en esta posición. Voy a hablar a alguien de la embajada norteamericana para pre-

guntarle acerca de la cuestión o consultaré en algún libro, ya que tengo mucha bibliografía al respecto. Reitero que mantengo mi posición.

¿Tiene algo más que decir, señor senador?

Sr. Berhongaray. — No, señor senador. Le agradezco.

Sr. Bravo Herrera. — Al contrario.

Este es un país de una organización que no tiene nada que ver con lo que nosotros podíamos querer, con algún sueño de fuerzas armadas que queramos tener. Pero ésta es una cosa diferente. Fíjense ustedes que este país tan poderoso, con una fuerza tan grande, con toda seguridad —sobre esto no tengo ningún dato sino que simplemente me lo imagino— debe tener fuerzas policiales, servicios de inteligencia, etcétera, muy grandes. Sin embargo, esas fuerzas policiales que tienen que estar acordes con las fuerzas militares, con la riqueza, la cultura y el poderío del país, no han podido reprimir el tráfico de drogas. Así, se ve cada vez más agudamente la utilización de estas poderosas fuerzas armadas. No pienso ni quiero pensar que esto sea así simplemente como consecuencia de una lucha que se dice ideológica o que sea fruto del sometimiento de Estados Unidos a alguna nación; yo no veo la doctrina de la seguridad nacional. Veo el cumplimiento por parte del Gobierno de una tarea en favor de la seguridad de su país.

Luego tenemos la lucha contra la delincuencia y el terrorismo y aquí parece que el señor senador Berhongaray y yo hemos usado diferentes lentes. Posiblemente el señor senador Berhongaray ha tenido otras publicaciones. Yo me he movido con la del Servicio de Información y Prensa de la Embajada de Francia, es decir que tiene carácter oficial.

El señor senador por La Pampa —pido disculpas por haber hecho referencia a su nombre; recién ahora recuerdo que no se puede nombrar...

Sr. Berhongaray. — Usted sabe que lo considero un amigo; no precisa pedir disculpas.

Sr. Bravo Herrera. — Bien.

El señor senador por La Pampa hizo una mención muy ilustrativa y que para mí fue verdaderamente un gozo intelectual escuchar, con respecto a cómo toman algunos países la defensa nacional y la represión interna y cómo dividen estos aspectos con diferentes fuerzas y legislaciones. Después llegó a lo último, es decir, al Consejo de Seguridad Interior en Francia.

Este informe que pienso que debe ser verídico en cuanto a su origen dice: "Fiel a los com-

promisos asumidos ante el país, el gobierno ha decidido librar una lucha implacable contra la delincuencia organizada y el terrorismo."

De pronto allí, en medio de toda la libertad que tienen y que es una gran cosa por la que nosotros tenemos que luchar para que también sea así en nuestra Argentina, surgen grupúsculos de delincuentes y muchos de ellos constituyen lo que se denomina la delincuencia organizada y el terrorismo. Son ramalazos que vienen de lejos, de los vascos, de los árabes, de las luchas de los judíos, etcétera.

Aquí tengo el discurso del ministro del Interior de Francia. No lo quiero leer íntegramente; estoy dispuesto a entregar una fotocopia a los señores senadores.

Sr. Berhongaray. — Tengo aquí ese discurso, señor senador.

Sr. Bravo Herrera. — Estoy dispuesto a entregarlo no sólo al señor senador por La Pampa sino a todos los señores senadores.

Sr. Berhongaray. — ¿Se trata del discurso del señor ministro del Interior de Francia?

Sr. Bravo Herrera. — Sí.

Sr. Berhongaray. — Lo tengo aquí y coincide con lo que dijimos ayer.

Sr. Bravo Herrera. — Figura al pie de la primera página y se señala que el objetivo es aterrorizar a los terroristas y que eso será perseguido sin la menor flaqueza.

Sr. Berhongaray. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Bravo Herrera. — Sí.

Sr. Berhongaray. — El discurso del ministro Charles Pasqua efectivamente dice eso. Coincide con usted. En Francia existe el Consejo de Seguridad Interior.

Sr. Bravo Herrera. — Así es. Por eso dije que usted hizo mención a ese discurso.

Sr. Berhongaray. — Es lo que he señalado ayer. Es que el tema de la lucha contra el terrorismo se maneja por canales distintos, como el de la defensa nacional, a través del Consejo de Seguridad Interior, que preside el ministro del Interior y no el de Defensa.

Sr. Bravo Herrera. — No digo que esto lo haya expresado el señor senador. Lo que sucede es que debemos haber realizado una lectura con diferentes lentes. En base a distintos razonamientos, llegaré a conclusiones distintas, si se me permite, por cierto.

Puede leerse que el señor ministro del Interior y el de Justicia presentaron ante el Consejo de Ministros un plan de lucha contra la inse-

guridad y el terrorismo. Asimismo, se menciona la determinación de tomar medidas muy severas para reforzar la seguridad de las personas y de los bienes, frente a los actos de terrorismo y para preservar la identidad de la comunidad nacional.

Entre otras medidas se expresa que quienes prestan el servicio militar pueden optar por ingresar a la Gendarmería, y que se está pensando que ocurra lo mismo respecto de la Policía.

Pero detrás de todo esto, que es una cuestión distinta, se crea lo que el señor senador por La Pampa señaló ayer, que es el Consejo de Seguridad Interior. En tal sentido, mencionó que para poder enfrentar el problema del terrorismo se ha creado un Consejo de Seguridad Interior.

Todo esto lo ha leído el señor senador por La Pampa, pero quiero hacer una reflexión. Este organismo está formado por cinco ministros: Charles Pasqua, ministro del Interior; Robert Pandraud, ministro delegado a cargo de la seguridad; Albin Chalandon, Guardián del Sello, ministro de Justicia; André Giraud, ministro de Defensa y Jean-Bernard Raimond, ministro de Relaciones Exteriores.

Pienso que es obvio que si se cita al ministro de Defensa quedan comprendidas las fuerzas armadas. Pero incluso, para que no haya sólo un razonamiento en contra, puedo agregar que este consejo colocado bajo la autoridad del primer ministro, se reunirá periódicamente; se ocupará de todos los problemas vinculados con el terrorismo, incluyendo sus implicaciones internacionales, aun las militares.

Entonces, en síntesis, existe un problema interno que es el terrorismo, y se crea un ente especial en el cual está, entre otros altos funcionarios, el ministro de Defensa y se dice que si es necesario se va a llegar a la solución militar.

Pienso que la solución militar se va a dar de acuerdo con la idea que ellos tengan sobre la necesidad de utilizarla, con prescindencia de que ese terrorismo tenga una ligazón internacional o no, en razón de la virulencia del caso.

Sr. Berhongaray. — Estamos de acuerdo; es nuestra posición.

Sr. Bravo Herrera. — No estamos en contra de la posición anterior de la ley francesa, que sólo se ocupaba de la defensa nacional como defensa de las armas hacia afuera. Pero resulta que después, los hechos obligaron al país a dictar una disposición —no se especifica si es ley— que establece entre otras cosas la solución mi-

litar, si es necesaria para el terrorismo y también para la alta delincuencia.

El hecho de que esté en una ley aparte no importa, porque podría ser una modificación dentro de la ley vieja o una norma especial, pero a los efectos de nuestra posición de que las fuerzas armadas, en determinadas circunstancias, deben estar obligadas a actuar en cuestiones internas, aquí está claro.

Sr. Solari Yrigoyen. — ¿Me permite una interrupción?

Sr. Bravo Herrera. — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen. — Creo que no hay ninguna contradicción entre lo que usted está señalando y la posición que ayer, con tanta claridad y enjundia, señaló el miembro informante, senador por La Pampa.

En lo que respecta a Francia, es bien sabido que sufre el flagelo del terrorismo a través de un grupo alienado que se llama de Acción Directa.

Este grupo siempre ha sido reprimido, y diría eficazmente, por la policía y no ha actuado ningún otro medio.

Para finalizar, con respecto a la cita que usted hizo, quisiera decirles que el ministro del Interior, Charles Pasqua no podría ser considerado un vocero oficial del gobierno. Es un hombre de perfil muy conservador dentro de un gobierno conservador, pero no está en nosotros adentrarnos ni hacer disquisiciones sobre la política francesa.

El hecho real es que en Francia el grupo terrorista de Acción Directa es combatido exclusivamente por las fuerzas de seguridad.

Muchas gracias, señor senador.

Sr. Berhongaray. — ¿Me permite una pequeña interrupción?

Sr. Bravo Herrera. — Voy a conceder otra interrupción al señor senador por La Pampa y luego, señor presidente, si no tiene inconveniente voy a seguir en el uso de la palabra.

Sr. Berhongaray. — Es la última interrupción.

Quiero decir que los antecedentes que estaba citando el señor senador por Salta fueron entregados personalmente por mí a todos los partidos integrantes de la Mesa del Consenso. En esa carpeta incluimos con toda lealtad todos los puntos sobre los cuales estuvimos hablando allí. Efectivamente, lo que él ha leído es parte de lo que nosotros hicimos llegar.

Lo que simplemente quisimos explicitar en nuestra intervención de ayer es que el tema de la defensa nacional, que tiene como primera línea de fuego a las fuerzas armadas, es trata-

do por un camino distinto al de la seguridad interior, que no tiene como primera línea de fuego a las fuerzas armadas.

Sr. Bravo Herrera. — Estoy completamente de acuerdo. Las cuestiones internas deben ser solucionadas primero por los vecinos, luego por el juez de paz, después por el agente de tránsito, posteriormente por el agente de policía, y así sucesivamente. Eso es lógico.

No es como se decía en un diario de esos que estaban moviendo el ambiente hace unos años, en la época de la virulencia por el tema de la doctrina de la seguridad nacional, que cuando suena un tiro salga el Ejército a reprimir al pueblo. No; esas son palabras excesivas.

En cuanto al hecho de que el ministro del Interior de Francia es de derecha y no merece suficiente crédito, a través de una publicación oficial de la embajada —y por eso le doy la mayor credibilidad— se está indicando objetivamente la formación de un Consejo con cinco funcionarios, el ministro del Interior, el ministro Delegado, el ministro de Justicia, Guardián del Sello, el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores.

No se está diciendo aquí una cosa que sería dudosa. Se está hablando de la instalación de un ente represor del terrorismo y de la alta delincuencia, del que forma parte el ministro de Defensa y donde se tienen en cuenta las implicaciones internacionales, aun las militares.

Por último, y muy rápidamente, voy a citar el caso de la sublevación de los presos cubanos en Atlanta. Como ustedes recordarán, fueron amenazados con ser llevados a su país de origen, se sublevaron y tomaron la cárcel. El gobierno envió fuerzas especiales; vio después que no era necesario y estableció que aquellos que conseguían la libertad eran llevados a los regimientos. Se trata de un caso en que el país mayormente no corría peligro, pero por la entidad del hecho el gobierno nacional dispuso esta medida. Observen que el pueblo norteamericano, que posiblemente no está sensibilizado como nosotros, tomó esto como algo natural y no hubo comentario alguno en contra.

Ahora bien, ¿cuáles serán las pautas para que las fuerzas armadas intervengan en cuestiones internas? No en conflictos internos ni tampoco en hipótesis de conflicto porque éstos no pueden estar contemplados en ninguna ley. Pienso que es una cuestión bastante difícil de establecer y que no puede haber una norma de carácter taxativo. Lo único que puede caracterizarla es el buen criterio del gobernante, su

patriotismo y la existencia de un procedimiento que indique el modo en que lo va a aplicar el Poder Ejecutivo, con el conocimiento y consentimiento del Congreso.

¿Cuál es la necesidad y conveniencia de la previsión legislativa? Que las fuerzas armadas sepan que tienen esa obligación, que puede ocurrir o no, es decir, pasar de potencia a acto. Consecuentemente, la sociedad sabrá a qué atenerse y las fuerzas armadas tendrán prevista su actuación al máximo, con la organización, el despliegue, el adiestramiento, los armamentos, la logística y la doctrina.

Disiento también con lo expuesto por el señor senador por La Pampa con respecto al artículo de la Constitución Nacional que autoriza al presidente a actuar en cuestiones internas y que tiene carácter operativo. Lamentablemente, nuestro presidente ha ido otorgando carácter operativo a muchísimas disposiciones, y si bien envió algunas iniciativas como proyectos para la creación de las secretarías, luego, cuando vio que había oposición, les dio carácter operativo y las está creando por medio de decretos. Estoy seguro de que ninguno de ustedes conoce la gran cantidad de secretarías que existen.

Otórgo carácter operativo a un organismo que no se encuentra ni en la Constitución ni en la ley, denominado Consejo para la Consolidación de la Democracia, y estableció públicamente que es a él a quien iba a consultar si tiene que cambiarse la Capital, por encima de los ministros. También dio carácter operativo a la reforma monetaria por encima del Congreso.

Pienso que los artículos de la Constitución tienen que ser reglamentados; para eso estamos nosotros porque, de lo contrario, estaríamos de más. Si nos manejáramos únicamente con la Constitución, observaríamos que los artículos importantes respecto de la actuación de las fuerzas armadas hacen referencia, todos, a la necesidad de su reglamentación o a la ley o decreto que se dicte en cada caso.

Estamos creando un antecedente peligroso. Se ha hecho un cambio inconstitucional porque se ha enviado un nuevo proyecto sin tener en cuenta que existía uno en la Cámara de Diputados que fue enmendado por nosotros y cuyas reformas deberían haber sido aprobadas o rechazadas por dicha Cámara.

Nosotros somos quienes más debemos observar la ley por fuerza de la Constitución. En este proyecto nuevo que han enviado algunos diputados se dice que las fuerzas armadas no pueden actuar en cuestiones internas. Se dictó el

artículo 4º nuevo que es más firme todavía para dilucidar situaciones atinentes a la defensa nacional pero se deberá tener permanentemente en cuenta la diferencia fundamental que separa la defensa nacional de la seguridad interior. Esta última se regirá por una ley especial.

¿Por qué tiene que estar este cuadro en una ley de defensa nacional, en donde se crean pautas ajenas a la realidad y en donde se establece cuándo las fuerzas de seguridad y civiles tienen que actuar? Esto yo lo arranco, no sirve, no tiene que estar; esto tiene que ser materia de la ley de seguridad. Si se dice que no se tiene que actuar, ¿por qué se pone esto que dice que tiene que actuar en determinadas cuestiones?

Lo que ocurre es que al país se lo ha dejado indefenso en esta cuestión cuando en febrero de 1984 se reformó el Código de Justicia Militar, con motivo de la modificación del procedimiento para los militares que se habían extralimitado en la lucha antisubversiva. El proyecto del Poder Ejecutivo en ese momento no tenía esas reformas pero aquí en el Senado se reformó el artículo 133 del Código de Justicia Militar y el artículo 43 de la ley 16.970 y dio la casualidad de que las cinco comisiones que actuaron y el justicialismo estuvieron en contra de todas esas reformas; se produjo esa eliminación y entonces quedó en el vacío la protección que las fuerzas armadas tienen que prestar ineludiblemente en casos de inundación y fenómenos naturales. Quedó todo afuera, tanto lo relativo a los hechos del hombre como a la naturaleza.

El proyecto de Illia o el de Isabel Perón, o la misma ley 16.970, tenían una denominación general y de raíz constitucional, por la cual podían actuar. Si actuaban mal, estaban los otros poderes para cortar ese mal accionar. Pero acá yo no encuentro una palabra que sea apropiada para calificar esto; tengo varias pero no las quiero utilizar. Es algo increíble porque no puede ser que actúen en inundaciones, terremotos, epidemias, incendios y hambre y no se citen otros fenómenos naturales. Ello va a tener que ser por implicancia. Esto se pone nada más que por comparación, porque no se puede hacer una tabla de esta forma. Entonces, ocurrirá que por implicancia puede actuar y por implicancia en otros casos no puede hacerlo.

¿Qué hay de los accidentes humanos graves, de los incidentes graves como puede ser la pelea que se produjo entre el público italiano y los ingleses, en el que tuvieron que intervenir las fuerzas del país en el que se produjo, que era Bélgica y la Fuerza Aérea Italiana? Aquí

no se mencionan esos disturbios, no están en ninguna parte; no están los disturbios graves. Coloca inundación, terremoto, epidemia, incendio y hambre, como si ahí se terminara la vida.

¿Cómo se les puede ocurrir que las fuerzas armadas o el poder asesor tomen esto como si fuera la cuestión de un juego? ¿Se cree que es como un abogado, que está viendo el Código Penal, que sí tiene figuras separadas y entonces puede decir: "No, vos estás en medio de estas dos figuras, por lo tanto no te pasa nada, te podés ir". Digo esto porque el Código Penal tiene figuras separadas.

En el derecho occidental son completamente separadas, pero no sucede lo mismo en el derecho socialista.

Entonces, ¿qué tipo de figura es? ¿Son separadas? No es necesaria, entonces, la interpretación; habrá que ir y ver lo que hagan los asesores.

Hay un cuerpo de asesores, que es un "elefante blanco", que nunca va a funcionar, en el que está involucrado el vicepresidente. ¿Ustedes se lo imaginan al vicepresidente legislando, con un conjunto de veinte o treinta personas tratando de hacer siete proyectos de ley? Están todos los ministros. ¿Se lo imaginan a Terragno o a cualquier otro ministro actuando en eso? Están los presidentes de las comisiones, los senadores. Es algo que no va a funcionar.

Se dice que hay que crear siete leyes en el término de un año. ¿Cómo puede ser que por una ley se determine que se van a crear leyes? Ello debe surgir espontáneamente, como lo establecen la Constitución y los reglamentos, ya sea iniciadora la Cámara de Diputados o la de Senadores, a través de los proyectos correspondientes.

Informalmente sí se pueden armar grupos, pero no institucionalmente. Esto no va a andar; dará origen a una falsedad. Se nombrarán a cuatro o cinco personas que van a hacer las leyes, y las llevarán a gente que no las conocerá. Se quiso nombrar al secretario general de la CGT, quien, estoy seguro, no hubiera ido.

No entiendo por qué en la modificación que se realizó en el proyecto cuando dice: "Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de determinación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes", se ha sacado la expresión que habla de proteger los bienes de los habitantes, así como el patrimonio, los intereses argentinos y la plena vigencia del sistema democrático e institucional.

¿Por qué causa, por qué motivo, en determinados casos no tendrán que proteger nuestro sistema de vida democrático e institucional? Si es un honor que nos toca a todos y a ellos se les ha obligado a jurar por la Constitución.

Entonces, en este proyecto de ley sectario se ha pensado que eso era incluirlos en cuestiones internas, en la doctrina de la seguridad nacional, y que tenía por lo tanto el huevito de la adhesión de los Estados Unidos, o algo así.

Señores, les agradezco la paciencia que han tenido al escuchar mi exposición. Sé, por cierto, que no es perfecta ni ha llegado a la versación de la anterior; pero yo, con toda honradez, he querido exponer mis ideas.

Si bien habría otras observaciones que realizar, debo decir que he formulado un dictamen en disidencia por el rechazo del proyecto que se considera. Muy posiblemente el proyecto será aprobado; y deseo aclarar que no voy a participar en la discusión en particular porque —si bien no se me ocurre en este momento la expresión adecuada— me parece que es como pintar a un muerto. Esto es algo que no tiene arreglo.

De manera que he venido a cumplir con mi deber, a deslindar mi responsabilidad y a decir lo que pienso. Les agradezco la cortesía con que me han escuchado.

Sr. Presidente (Otero). — El señor senador Martiarena había pedido la palabra en razón de que debía ausentarse, pero observo que no está presente en este momento en el recinto.

Sr. Amoedo. — Yo estoy en la lista de oradores.

Sr. Presidente (Otero). — De acuerdo, pero le corresponde hacer uso de la palabra al señor senador por Jujuy y luego a los señores senadores por Corrientes Romero Feris y Aguirre Lanari, después al señor senador por Catamarca, Amoedo; posteriormente el señor senador por La Rioja, Sánchez; siguiéndole el señor senador por San Juan, Leopoldo Bravo; el señor senador por el Chubut, Solari Yrigoyen y el señor senador Salim, por Santiago del Estero.

Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: dadas las circunstancias en que se ha desenvuelto el tratamiento de este tema, que no es día de tablas y que algunos señores senadores han viajado, he de ser muy breve. Voy a procurar, inclusive, ser totalmente concreto con respecto a las cuestiones que se han planteado, las que me ocasionan interés para intervenir en el debate.

He de referirme a algunas expresiones del informante, solamente a aquellas

que son fundamentales. Ha sido muy ilustrativa la referencia histórica al desenvolvimiento de los ejércitos y las luchas y las ubicaciones de las fuerzas a lo largo de los siglos. Pero él ha hecho una pregunta muy importante: ¿qué es una ley de defensa?

El señor senador se ha referido al tiempo actual y ha descartado desde dos puntos de vista la teoría de la Nación en armas, como una referencia sobrepasada por los tiempos en el orden mundial y también haciendo una mención incidental a la conferencia que el general Perón, entonces presidente de la República, había pronunciado en la Universidad de La Plata hace muchos años.

Allí está la definición de defensa nacional, por lo menos en mi concepto. Está en la última página de este folleto que recogió la conferencia del general Perón que, en una síntesis extrema que llama "Conclusiones" dice: "1º) La guerra es un fenómeno social inevitable".

El señor senador Berhongaray ha entendido que la inevitabilidad de la guerra no es cierta, sobre todo en estos tiempos en que el avance de la civilización y una conciencia general está indicando que no se debe recurrir a la guerra porque ella es devastación, es muerte, es rompimiento de factores y de órdenes morales materiales y personales.

Desde luego, cuando el general Perón dijo que la guerra es un fenómeno social inevitable se refirió al desenvolvimiento histórico de los conflictos bélicos y a la inevitabilidad, toda vez que existen potencias que quieren imponer sus condiciones a grupos nacionales más débiles o de los cuales quieren obtener aprovechamientos.

Dijo también Perón que las naciones llamadas pacifistas —como lo es eminentemente la nuestra—, si quieren la paz deben prepararse para la guerra. Esta es la traducción de la famosa frase "si vis pacem para bellum", que ha sido enunciada en tiempos de Roma y que ha resultado una realidad a lo largo de los tiempos. Naciones que se definen solamente pacifistas se ven agredidas por cualquier circunstancia ambiciosa de potencias o ideologías.

Pero Perón ha terminado de hacer la síntesis de su pensamiento en un punto tercero que dice: "La defensa nacional de la Patria es un problema integral que abarca totalmente sus diferentes actividades, que no puede ser improvisada en el momento en que la guerra viene a llamar a sus puertas sino que es obra de largos años de constante y concienzuda tarea, que no puede ser encarada en forma unilateral como es su solo enfoque por las fuerzas armadas, sino que debe ser establecida mediante el trabajo ar-

mónico y entrelazado de los diversos organismos del Gobierno, instituciones particulares y de todos los argentinos, cualquiera que fuera esfera de acción; que los problemas que abarca son tan diversificados y requieren conocimientos profesionales tan acabados que ninguna capacidad ni intelecto pueden ser ahorrados."

Finalmente dice que sus exigencias sólo contribuyen al engrandecimiento de la patria y a la felicidad de sus hijos.

Esto es la defensa nacional en la concepción del general Perón, que nosotros hemos recogido y aprendido y que mantenemos.

La guerra puede ser inevitable o no. La afirmación de que es evitable por el desenvolvimiento de la civilización y por el avance de la tecnología es desmentida y desvirtuada permanentemente por la historia más reciente de la humanidad. Ahora mismo, si entramos a tratar un proyecto de ley de defensa nacional en este recinto excluyendo, como están excluidos, los conflictos de orden interno y articulando una ley para dar organicidad a la presencia de las fuerzas armadas en sus relaciones derivadas de la Constitución Nacional y en sus relaciones eventuales con acontecimientos que puedan producirse, es porque estamos pensando en la guerra. De lo contrario, no tendría sentido esta ley de defensa nacional.

Más aún, la inevitabilidad de la guerra se demuestra constantemente porque desde que terminó la Segunda Guerra Mundial hasta ahora no ha habido en el mundo un día de paz. ¿Y para qué nos vamos a referir cronológicamente a los episodios si en este instante sigue siendo efectivo el conflicto entre Irán e Irak, que extiende sus efectos bélicos al Golfo involucrando no solamente a los dos contendientes sino a otras naciones? ¿Para qué vamos a hacer referencia al apoderamiento por parte de la Unión Soviética de sectores en donde quiere imponer sus propias políticas y su poderío? ¿Para qué vamos a decir algo sobre la guerra de las Malvinas, que han sido transformadas en una fortaleza por el imperio británico para asegurar la posibilidad de una dilatación en su avance no solamente en su afán imperialista desde el punto de vista de su propia nación sino también en el que une al imperialismo británico con las aspiraciones de la NATO, con la colaboración de los propios Estados Unidos, que quieren crear en el extremo austral del mundo una manera de dominación que sea excluyente de las pretensiones de otras potencias?

Es decir que la guerra está latente o físicamente promovida y realizada en este momento en muchos puntos del mundo.

Perón dice que la guerra es inevitable. Si la considerásemos evitable ¿tendríamos que prescindir de las fuerzas armadas? Entiendo que no. El propio señor senador miembro informante ha hecho la historia de las fuerzas armadas argentinas y ha marcado, aunque sin decirlo, el hecho de que nuestro propio país a lo largo de los años se encontró con la necesidad inexcusable de tener y mantener fuerzas armadas para proteger la soberanía del territorio y procurar, aunque tengamos menos medios técnicos, la conjuración del avance pretencioso de algún vecino y de otros no vecinos que ven en nuestro territorio la posibilidad de aumentar la esfera de su dominación. De manera que estimo que ésta es la ley de defensa y que ella debe ser una norma integral. Esto nos enseñó el general Perón. Ya lo discutimos en el anterior tratamiento de esta ley: si debía o no ser un estatuto que considerara en su integridad la necesidad de la defensa nacional.

En su oportunidad había votado favorablemente el proyecto presentado por la señora senadora por Santa Fe, que después fue modificado aun con su consentimiento. Y lo hice porque entendí que sus fundamentos habían expresado con mayor claridad que ningún otro hasta ese momento el concepto de la integridad de la defensa nacional.

Incidentalmente diré, por ejemplo, que el señor senador Berhongaray ha mencionado la ley de vialidad y no consideró que ella deba ser cumplida estimando realizaciones con miras a la posibilidad de su utilización por parte de las fuerzas armadas.

Esto contradice en cierto sentido lo que yo he manifestado como una experiencia en mi provincia. Allí, las fuerzas armadas contribuyeron —las fuerzas armadas y no Vialidad— a la construcción de un difícil camino que está en la zona que nosotros llamamos Abra de Pives y Huachichocana, para los fines de táctica y estrategia en supuestos militares.

De manera, entonces, que esta pregunta que se ha formulado, quiero dejarla perfectamente aclarada. He dicho que no voy a realizar disquisiciones generales, aunque no puedo evitar aludir a la referencia que se ha hecho sobre Napoleón y Clausewitz.

De Napoleón se ha dicho que fue un genio intuitivo. Es una digresión de información literaria e histórica. Para mí, fue más que un genio intuitivo: un hombre razonador, con una inteligencia razonadora fundada en conocimientos. Era general de artillería y contaba además con una dosis enorme de visión —sí intuitiva y muy audaz— que le permitió formar el imperio francés de la época.

En cuanto a Clausewitz puntualizaré que es popular por aquella frase que sentenciaba que la guerra es la continuación de la política por otros medios. A veces se define toda una vida por una sola frase; y esto no debe ser así.

Clausewitz no sólo ha dicho esto sino otros conceptos de importancia. Pero creo que su figura no tiene un verdadero valor contemporáneo. Tampoco lo tuvo mientras vivió porque no fue un militar actuante —redundantemente diría que no fue un militar militante—, no tuvo comando, no tuvo mando, no participó de la guerra y lucubró teorías de las cuales la historia ha recogido la famosa frase que acabo de mencionar.

Por otra parte, esta frase ha sido superada, porque la continuación de la política no se realiza ya solamente por medio de la guerra sino por otros y, dentro de la guerra, no sólo por la actuación de las fuerzas armadas sino por la necesaria intervención de muchos otros elementos que forman el conjunto de la nacionalidad.

En tanto y en cuanto el general Perón adhirió al principio de que la defensa nacional debe considerar el postulado de la Nación en armas, yo creo que está vigente y que sigue estando presente en las determinaciones de los pueblos en este momento.

Voy a entrar a considerar ahora —aunque en general ya he hecho referencia— el articulado del proyecto. Solamente manifestaré mis opiniones acerca de algunas cláusulas relacionadas con esta consideración en general.

En cuanto a la supresión que se hizo en el artículo 1º de todo aquello de que se cumple con los propósitos expresados en la Constitución, estoy de acuerdo porque era redundante. Está de más decirlo porque todas las leyes que nosotros dictemos deben estar encuadradas dentro de la letra, los fines, el espíritu y los propósitos de la Constitución Nacional. Por eso, no haré otra referencia al respecto.

Pero el artículo 2º sí me conduce a formular una propuesta. Voy a pasar por alto las imperfecciones de lenguaje —habla de “fuerzas” y lo repite—, pero me voy a detener en la definición de la defensa nacional.

Dice que: “La defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

Creo que la defensa nacional no es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para el empleo de las fuerzas armadas, sino que la defensa nacional se reali-

za con la integración y acción coordinada de todos los elementos y recursos humanos, materiales y morales —lo que fue suprimido con respecto a la anterior sanción— de la Nación para la solución de los conflictos que lo requieran, especialmente con la actuación de las fuerzas armadas, en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo —y digo esto puesto que es la filosofía de esta ley, que voy a discutir en otra oportunidad—.

De modo que así este artículo es imperfecto. La defensa nacional no es la integración para el empleo de las fuerzas armadas. Es la integración de todos los elementos materiales y morales para la solución de los conflictos.

Pido que a su tiempo, en el momento de la consideración en particular, se tenga como propuesta de mi parte esta redacción: “La defensa nacional debe realizarse —ya decimos en otras partes cuáles son las finalidades— por la integración y acción coordinada de todos los elementos y recursos humanos, materiales y morales de la Nación, para la solución de aquellos conflictos que lo requieran y especialmente con la actuación de las fuerzas armadas en forma disuasiva o efectiva, para enfrentar las agresiones de origen externo”.

No se trata de un simple prurito correctivo sino de una cuestión esencial que hace a lo que venía manifestando. No son las fuerzas armadas solas las que deben integrar el cuadro de la defensa nacional sino la totalidad de los elementos y recursos humanos, materiales y morales. Este es el concepto de una ley de defensa nacional. Y yo lo deduzco no sólo de lo que tengo visto y leído sino de lo que propiamente ha expresado en algunas de sus manifestaciones el señor miembro informante.

Debo referirme también especialmente al artículo 5º. Creo que debe ser modificado fundamentalmente por una razón que hace a las necesidades de la política internacional permanente en nuestro país.

Se dice aquí que: “La defensa nacional abarca los espacios continentales, islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y además espacios insulares, marítimos y aéreos de la República Argentina, así como el Sector Antártico Argentino...”.

Hasta aquí estamos de acuerdo, pero sigue diciendo el artículo “...con los alcances asignados por las normas internacionales y los tratados suscritos o a suscribir por la Nación...”. Con este párrafo estoy totalmente en desacuerdo. Porque no son las normas internacionales y los tratados

que puedan suscribirse los que deben marcar el ámbito de aplicación de la ley de defensa nacional.

Me permito recordar que hay una institución de derecho internacional denominada "estoppel", según la cual cuando un país cede o expresa posiciones que después pueden resultarle perjudiciales, no puede volver atrás.

No podemos decir que el alcance de la ley de defensa se da en todos nuestros territorios, pero de acuerdo con las normas internacionales. Estas constituyen la ley internacional a la que unas veces contribuimos y otras no, pero que se impone a la comunidad internacional por decisión de las Naciones Unidas o por coincidencia de las potencias.

Sr. Berhongaray. — ¿Me permite una pequeña interrupción, señor senador?

Sr. Martiarena. — Sí, señor senador.

Sr. Berhongaray. — La referencia en este artículo a los tratados y las normas internacionales se limita exclusivamente al Sector Antártico.

Sr. Martiarena. — Precisamente, me iba a referir a ese tema.

Existe el Tratado Antártico que habla de un lapso determinado y no indefinido, como alguna gente quiere hacer creer defendiendo intereses que no son los nacionales. El Tratado Antártico, en cuanto reserva la Antártida en general colocando como prioridad la investigación científica, no ha significado, ni significa, ni deberá significar de manera alguna una renuncia de los derechos de soberanía sobre el sector que tiene establecido.

Sr. Berhongaray. — No dice eso.

Sr. Martiarena. — No lo dice, pero formulo la aclaración.

Y cuando se reúnan nuevamente los países signatarios y los invitados —se pretende que sean todos los países del mundo— para resolver qué va a pasar respecto de la Antártida, nosotros no podremos aceptar un tratado que desdibuje o que elimine el Sector Antártico Argentino por otras consideraciones distintas de las que nos interesan, que son las de mantener nuestra soberanía.

De manera que la expresión genérica de decir que el ámbito de aplicación de esta ley será la de todo su territorio con los alcances asignados por normas internacionales es equívoca y puede constituir un caso de "estoppel". Y si, como en algunos casos, se encuentra en una ley sancionada por el Congreso argentino, puede decirse que nosotros decidimos sujetar la extensión de los territorios nacionales a lo que se establezca en los tratados internacionales.

Los tratados internacionales no tienen para nosotros la preeminencia de la Constitución Nacional y de las leyes de la Nación. Recuerdo que el artículo 31 de la Carta Magna fija el orden de prioridad; establece: "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación...".

Este orden de prioridad ha sido recogido por la ley 48 que todavía subsiste y está vigente. Su artículo 21 dispone: "Los tribunales y jueces nacionales en el ejercicio de sus funciones procederán aplicando la Constitución como ley suprema de la Nación, las leyes que haya sancionado o sancione el Congreso, los tratados con naciones extranjeras, las leyes particulares de las provincias, las leyes generales que han regido anteriormente a la Nación y los principios del derecho de gentes...". Es decir que establece los principios del derecho de gentes en el último lugar de su enunciación.

No quebrems lo que es el orden, la necesidad y la conveniencia del país en materia de determinación de los territorios continentales, insulares, inclusive de sus mares.

Esto me conduce a mí a proponer de la manera más formal que cuando se trate el artículo 5º, desde el párrafo que comienza en "con los alcances..." se diga: "con los alcances que resultan de sus derechos derivados de los antecedentes históricos, del reconocimiento de las naciones, de la soberanía, jurisdicción y posesión que ejerce y/o le pertenecen, así como de las normas internacionales y tratados suscritos o que se suscriban en concordancia con ello".

Este es el principio de la defensa de nuestra soberanía territorial. Tenemos derechos y cuando mencionamos los alcances de la ley en cuanto al territorio argentino, ésta tendrá que regir con alcances que resulten de esos derechos y éstos son los que derivan de sus antecedentes históricos, del reconocimiento que hacen las naciones —y lo han hecho, por ejemplo, últimamente en forma permanente, las naciones latinoamericanas con relación a nuestras Malvinas—, de la soberanía, de la jurisdicción y de la posesión que ejercemos y/o los que nos pertenecen.

Porque el concepto de soberanía no cede frente al hecho innoble y abusivo de la ocupación de nuestro territorio, sino que la soberanía argentina, como sucede en los casos de guerra cuando una potencia ocupa una parte del territorio de su enemigo, no termina en la zona usurpada. La soberanía se mantiene y esa es la soberanía que nosotros tenemos respecto de la

do nuestro territorio, y también tenemos derecho a ejercerla sobre los territorios ocupados indebidamente. Pienso que esto debemos reafirmarlo en todas las oportunidades y en todas las ocasiones.

Esta redacción es difusa y puede prestarse a que en el futuro se haga de ella alguna utilización que no es la que corresponde a la defensa de lo nuestro.

En cuanto al artículo 7º, éste dice: "El funcionamiento ordenado del sistema de defensa nacional estará orientado a determinar la política de defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país, así como a su permanente actualización".

Aunque este proyecto de ley se llama de defensa nacional y hay algunos artículos que procuran dar la impresión de integrar a todos los factores, es, fundamentalmente, una norma de defensa nacional dirigida a la situación de las fuerzas armadas de la Nación.

No creo, de ninguna manera, que debemos decir que el funcionamiento ordenado de este sistema estará orientado a determinar la política de la defensa nacional que mejor se ajuste a las necesidades del país. No es así; estaríamos, si lo relacionamos con el contexto general de la ley, declinando las facultades que tienen los poderes del Estado para fijar las políticas internacionales de la República, sometiéndola al funcionamiento ordenado —según dice el artículo— de este sistema.

El término "ordenado" merecería reparo, porque no se sabe si es porque está ordenado en la ley o porque el sistema debe funcionar ordenadamente; pero tal vez es una cuestión secundaria.

Sobre este particular propongo como cláusula expresa —y pido que se tome nota— la siguiente: "Los responsables de la conducción del sistema ordenado por esta ley actuarán en toda circunstancia de modo de asegurar las mejores soluciones para los fines establecidos teniendo en mira las necesidades y conveniencias superiores del país y de sus habitantes".

Las políticas sobre defensa nacional tienen que fijarlas los responsables de la conducción es decir, los poderes del Estado. Y ésta es una cuestión que no puede ser distraída a otros ámbitos.

El artículo 8º dice, entre otras cosas, que el sistema de defensa nacional tendrá por finalidad determinar las hipótesis de conflicto, elaborar las hipótesis de guerra, dirigir la guerra, etcétera. Yo creo que este concepto también está equivocado. Estas no son las finalidades de una ley de defensa; éstos son los medios de actua-

ción que la ley de defensa indica para lograr las finalidades expuestas en los textos anteriores.

A mí me parece que habría que cambiar esto de las finalidades y decir, sencillamente: el sistema de defensa nacional establecido por esta ley para lograr las finalidades propuestas deberá... Es decir, hay que darle un orden y un mandato al sistema que estamos creando, de decir qué es lo que puede hacer el sistema. O sea, determinar y elaborar hipótesis, formular planes, etcétera.

Entonces, no debemos decir que el sistema "tendrá por finalidad" sino que "el sistema establecido por esta ley para lograr las finalidades deberá tales cosas". Y en este "deberá", creo que también hay una omisión. Y dicha omisión se refiere a algo que yo destaqué en mi intervención cuando tratamos el proyecto de ley anterior, que es intervenir en la organización, ejecución y control para la producción para la defensa. Es de fundamental importancia intervenir en la organización, ejecución y control del sistema nacional de ciencia y técnica existente o que deba ser establecido. Esto también es inexcusable en el sistema de la ley de defensa.

El progreso de las tecnologías hace que los responsables de la aplicación de esta ley deban poner el acento en la organización, ejecución, desarrollo y control del sistema de ciencia y técnica. Nosotros no podemos ser un país en donde la actividad científica se convierta en un simple cientificismo más o menos artificioso sobre cualquier materia, sino que debe estar fundamentalmente orientado en esta ley a la necesidad de crear circunstancias y condiciones de ciencia y técnica que hagan posible la actuación conveniente del sistema.

El artículo 13 se refiere al cuadro que censuró y criticó duramente el señor senador Bravo Herrera. En cuanto a este cuadro, que figuraba en el proyecto originario de la señora senadora Gurdulich de Correa y que después fue modificado —inclusive con su firma— en la sanción del Senado —que ahora se repite en Diputados—, hice la observación al respecto —y la reitero aquí— de que la supresión que se ha hecho en él de la posible intervención de las fuerzas armadas en los casos de agresión de tipo social cuando procede de las cuestiones internas-internacionales es importante.

Y quiero recordar a Perón otra vez. Cuando él encontró este país subvertido por lo que después fue la guerrilla aclaró muy bien que conocía eso; que lo había visto en Europa; que muchos de esos grupos subversivos y terroristas procedían de incitaciones, de maniobras y

de intervenciones de poderes extranacionales que, en gran proporción, venían de otras partes.

Entonces, si nosotros tenemos que advertir que algún grupo internacional de algún signo ideológico, en algún momento desata desde afuera de nosotros agresiones para romper el orden institucional argentino, ¿serán o no suficientes 175 mil agentes de seguridad que ha mencionado el señor senador Berhongaray? Ya no será una cuestión de número; será una cuestión de concepto porque estará en juego la necesidad de la defensa de la integridad nacional, de la totalidad de los intereses no solamente humanos sino también nacionales, en el sentido del patrimonio de la República, de su propio territorio y de todas las consecuencias que de ello se pueden derivar.

Lamentablemente, esto fue suprimido; lo menciono a título de reiteración de una opinión que ya había formulado y que sigo creyendo que es buena, aunque descarto que no va a tener ningún éxito frente a la redacción que tiene el artículo, en el que se dice que "...el Consejo de Defensa Nacional tendrá en cuenta un programa de mecanismos de alerta, que contemple las situaciones de conflicto previsibles y las respuestas consiguientes y ajustadas para cada situación, conforme con el cuadro aclaratorio..."

Es decir, "tener en cuenta" no es precisamente el concepto con que yo entendía esa inclusión en el proyecto justicialista que firmaba la señora senadora Gurdulich.

Me referiré al artículo 20, en el que se dice que en toda circunstancia sus miembros —se refiere a la reunión de las fuerzas armadas— se encuadrarán bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados. Yo propongo formalmente que se suprima este párrafo o que se modifique diciendo: "De la conducta, durante el tiempo de guerra, de sus subordinados".

Esto, en cierto modo, en una interpretación viene a tomar presencia con relación a la discusión que todavía existe sobre la obediencia debida.

Aquí nos estamos entrometiendo en lo que debe ser materia de una legislación especial, respecto de la que se quiere aclarar lo que ya está puesto en el Código de Justicia Militar. Esto ha sido discutido ampliamente en todos los ámbitos de la República, en el sentido de que la obediencia no es la obediencia ciega y que en cuanto al superior, no siempre puede considerarse que ampara a los inferiores, sobre todo cuando las acciones no constituyen actos de servicio.

Alguna vez he manifestado esta opinión en el recinto, cuando tratamos la modificación del Código de Justicia Militar. El núcleo del problema lo constituyen los actos de servicio definidos en dicho Código, respecto de los cuales siempre interpreté que son los actos que hacen a la organización y regulación interna de las fuerzas armadas. Es decir, no es acto de servicio cuando un jefe manda a un subordinado a secuestrar, a atormentar e, inclusive, a matar a un civil. Esto está fuera del acto de servicio ya que dicho acto se refiere al orden reglamentario interno y de las fuerzas armadas.

Si en una ley decimos que "Sus miembros se encuadrarán en toda circunstancia —en toda circunstancia— bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados", en primer lugar le estamos permitiendo a todo jefe que ampare aun los excesos que se puedan cometer por los inferiores, ya que dice "en toda circunstancia".

Así, este proyecto contradice lo que ha sido la tesis del Poder Ejecutivo desde el primer momento en esta materia, en el sentido de dividir a los responsables de los que cumplieron órdenes y de los que se excedieron.

Pero aquí no vamos a referirnos a esos detalles, sino a los términos generales. Se dice "en toda circunstancia, bajo un mando responsable de la conducta de sus subordinados". Es decir, es responsable el jefe de un regimiento porque alguien bajo su área ha entrado en una casa de familia y robó un televisor. Bajo toda circunstancia es responsable.

No caigamos en esto, que trastorna el orden de las fuerzas armadas y se presta, a mi modo de ver, a la suspicacia de que con esto estamos queriendo tapar aquello que yo he censurado, que sigo censurando y que creo ha sido malo, que fue hacer de la obediencia debida una especie de amnistía.

En este punto pido esa supresión.

El artículo 27 establece: "El servicio civil de defensa es la obligación de prestar servicios no militares, que deben cumplir los habitantes del país, a fin de satisfacer necesidades de preparación del potencial nacional para la eventualidad de una guerra, o para sostener el esfuerzo bélico ante el conflicto ya declarado". Creo que en este artículo debería darse más precisión al servicio civil de defensa porque, en primer lugar, éste deberá prestarse individual y colectivamente por los habitantes del país para satisfacer necesidades de preparación del potencial nacional para la eventualidad de una guerra o

para sostener el esfuerzo bélico en caso de conflicto ya declarado. La ley fijará qué autoridad, en qué circunstancia particular y con qué extensión efectuará la convocatoria para la prestación del servicio.

Este es el seguro que debemos establecer para evitar los abusos de poder a través de una convocatoria a sectores civiles —pudiendo llegar inclusive a trabajadores, estudiantes, maestros, profesionales, empresarios— de una manera tan indefinida. Tiene que existir una ley, y si bien es cierto que este proyecto habla después del servicio de movilización para la defensa, incluyendo el servicio militar y civil, esto será de acá a 365 días y, por ende, no podemos hacer un anticipo que deje el blanco sino que esté indicando que esa ley deberá fijar qué autoridad, en qué circunstancias particular y con qué extensión efectuará la convocatoria para la prestación del servicio.

Estamos haciendo una ley de previsiones para el caso de guerra y yo descarto y admito que un comandante de sector en un momento dado, sin necesidad de otra autorización que la que le da su actuación en ese momento, podrá llamar a civiles a que presten un servicio. Estará bien que los llame, pero si vamos a ajustar esto a lo que debe ser un orden razonable y lógico, la ley deberá decir quiénes, en qué circunstancias y para qué se va a autorizar la convocatoria civil, y no en estos términos generales, que son tan imprecisos.

El artículo 34 dice en el segundo párrafo que los habitantes de la Nación y las personas de existencia ideal tienen la obligación, limitada a las necesidades de la defensa, de proporcionar la información, facilitar los bienes y prestar los servicios que les sean requeridos por autoridad competente. Finaliza este párrafo expresando que la información obtenida tendrá carácter de reservada y no podrá tener otro destino ni otro uso que el de satisfacer esas necesidades.

Este último párrafo es el que objeto porque no establece qué pasa cuando quien ha recibido la información no guarda la reserva o no le da el destino para el cual fue solicitada la información.

En tiempos de guerra, cualquier autoridad debidamente autorizada por la ley, en función de una necesidad bélica puede pedir a cualquiera una información, y es importante que la tenga. Pero la información puede ser de tal naturaleza que la violación del principio de reserva, de orientación, puede crear situaciones

muy graves, sobre lo que alguien tiene que responder. Entonces, a mi entender, hay que agregar que el Estado nacional responderá por las consecuencias perjudiciales que se produzcan por la violación en que se incurra de la reserva o del destino previsto de la información, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que correspondiere al autor de la violación. Esta es la manera de asegurar en la ley que, cuando la necesidad militar o genérica de defensa obligue a proporcionar una información de tipo reservado o secreto, no se tenga una desviación o se ocasione un perjuicio a quien la dio o a un tercero.

Voy a terminar haciendo una mención al artículo 29, que me había quedado pendiente. Este artículo dice: "En los casos previstos en el artículo anterior, las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones, situación que sólo hallará excepción en la aplicación del artículo 6º de la Constitución Nacional en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable..." Se está haciendo referencia a la intervención en los gobiernos provinciales. Desde luego, habría que hacer una modificación porque el artículo 6º de la Constitución Nacional que se refiere a las causas por las cuales el poder de la autoridad federal interviene una provincia es muy preciso. Este artículo dice que la intervención se determinará para garantizar la forma republicana de gobierno, repeler invasiones exteriores y a requisición de sus propias autoridades. Es decir, nosotros no podemos hacer una modificación invocando el texto de la Constitución y diciendo: "...en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable". No hay circunstancias estrictamente indispensables para intervenir los gobiernos de provincia más que las que señala el artículo 6º de la Constitución. O sea que basta con decir que podrá intervenir en el supuesto de los casos del artículo 6º de la Constitución Nacional. Las circunstancias están invocadas por ella al hacer referencia a la alteración de la forma republicana de gobierno a los casos de tener que repeler invasiones exteriores y de requisición de sus autoridades.

Se me dirá que con esto vamos a limitar en tiempo de guerra una facultad que puede ser importante circunstancialmente. Pero es que si hay un estado de guerra las provincias argentinas no son entes separados de la totalidad de la República, sino que forman parte de la República Argentina. Sus gobiernos, entonces, estarán sometidos al cumplimiento de los planes

y de los programas de lucha que son indispensables para conducir a nuestro país a la victoria frente al enemigo.

—Ocupa la Presidencia la señora presidente de la Comisión de Educación, senadora Margarita Malharro de Torres.

Sr. Martiarena. — Entonces, si no se cumpliera con esto, se estaría afectando fundamentalmente la garantía de la forma republicana de gobierno. No podemos sustituir lo que dice la Constitución por una expresión que es bastante vaga como decir “en aquellos supuestos en los que las circunstancias lo hicieran estrictamente indispensable”.

No quiero ni pensar en un comandante de sector que estimara que por la aplicación de esta ley está en condiciones de decir que hay que intervenir el gobierno de una provincia manteniendo el Poder Judicial, ni mucho menos puede hacerlo el propio presidente de la República por una circunstancia accidental.

Hay muchos casos en los que el artículo 69 de la Constitución, para un caso de guerra, podría tener perfecta aplicación sin necesidad de que nosotros lo diluyamos con la redacción de un artículo de la ley.

En general sé que la suerte del proyecto está echada, puesto que se ha arbitrado el procedimiento de dejar en un cajón lo que el esfuerzo y la concepción de diputados y senadores había hecho en el tratamiento de los proyectos anteriores y violar nuevamente el artículo 71 de la Constitución Nacional con el artilugio de decir que estando esto en comisión, podemos hacer un proyecto de ley nuevo, alternativo.

Con esto —reitero lo dicho en otra oportunidad— estamos creando un grave precedente, porque lo que correspondía era que la Cámara de Diputados insistiera en su sanción o aprobara la nuestra y no que nos remitiera un proyecto de ley nuevo —en el que sigue siendo Cámara iniciadora— y en el que introduce modificaciones, algunas de poca importancia; por ejemplo, podemos mencionar el cambio de “fundamentos” por “doctrina” y el agregado de “señor” antes de “presidente”, expresión que se había omitido aquí. Como podrá apreciarse, se trata de minucias sin importancia, carentes de significación.

Para terminar, quiero referirme al informe realizado por el señor senador Berhongaray. Destaco la insistencia puesta en el inciso 17 del artículo 86 de la Constitución Argentina. Para incurrir en error alguno me voy a permitir decir expresamente que el presidente **Dispone de las fuerzas mili-**

tares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación”. Y disponer no quiere decir hacerlo en forma arbitraria. Lo dije en el anterior tratamiento de esta ley y lo quiero repetir ahora, porque así lo establece la Constitución Nacional; y éste es el librito que nosotros no podemos dejar de cumplir en sus preceptos en ninguna oportunidad.

Mientras tanto, el inciso 28 del artículo 67 marca el rumbo porque faculta al Congreso de la Nación para “hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes, y todos los otros concedidos por la presente Constitución al gobierno de la Nación Argentina”.

Es decir que no corresponde que utilicemos el argumento de que el presidente de la República va a poder disponer de las fuerzas armadas en cualquier circunstancia que estime conveniente y que ésta es una facultad operativa —como se ha dicho—, de manera que basta que esté inserto en el inciso 17 del artículo 86 para que ya pueda tener efectividad.

No es así, ya que los poderes consagrados por el texto de la Constitución requieren una ley que reglamente su forma de actuación. De manera que si aquí ocurriera una situación, por imprevista que sea, sin que exista la ley que marque cómo puede disponer el presidente de la República de las fuerzas armadas, se vería obligado a cometer un abuso o actuar a la inversa. En consecuencia, debe dictarse una norma a tales efectos. Está previsto que así sea, pero me alarma que después de cuatro años en que hemos estado trajinando con estos conceptos y decimos cosas que ya son lugares comunes, se hayan fijado 365 días para que entre en vigencia la ley prevista.

Se trata de un año entero en el que el Parlamento argentino va a estar a la expectativa. No veo la necesidad de fijar esos 365 días cuando es obvio que el año próximo cambiará el gobierno. No aprecio la necesidad de la demora cuando el señor senador Berhongaray ha dicho, y yo le doy crédito, porque me merece crédito no sólo esta vez sino todas, que está avanzando el estudio de leyes como la de seguridad interior.

Hago votos en nombre de mi bloque para que esta sanción que se dicte hoy supere estos escollos que se presentan en nuestro tratamiento y sirva realmente a los intereses de la defensa integral de la República y para que colaborem todos los sectores, los factores y los elementos humanos, materiales y morales preparándonos —como decía el general Perón—

para la eventualidad de una guerra, no creyendo que nunca puede llegar sino creyendo que siempre debe estar presente.

Formula también votos en nombre de mi sector, para que el desmantelamiento que se ha hecho de las fuerzas armadas, lo que las ha reducido de tal manera que han dejado de ser factor fundamental para la defensa de la República por las carencias que padecen, pueda ser superado y para que nosotros tengamos la participación y la decisión de salir al frente a decir que "fuerzas armadas" no significa eso que se ha baqueteado tanto de la "doctrina de la seguridad nacional" sino la defensa de las instituciones argentinas. Y precisamente para defender a las instituciones argentinas las fuerzas armadas deben ser dotadas, respetadas y ubicadas de tal manera que se constituyan en el elemento fundamental de la cimentación de la democracia.

Sra. Presidente (Malharro de Torres). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Romero Feris. — Señora presidente: hemos escuchado con atención las palabras de los señores senadores, tanto las del miembro informante de la comisión, senador por La Pampa, en el día de ayer, como las de los senadores Bravo Herrera y Martiarena.

Quiero decir en ese aspecto que se han dado datos precisos y han sido enjundiosos sus discursos, a pesar de algunos olvidos en que incurrió el señor miembro informante de la comisión quien, al referirse a la mesa del consenso, omitió mencionar el Pacto Autonomista-Liberal, que participó de ella. Yo sé que lo hizo porque es humano y falible y comprendo perfectamente esa circunstancia.

Pero quiero manifestar, y más adelante me referiré extensamente al tema, que nosotros no coincidimos con este proyecto de ley de defensa y no lo aceptamos en su momento. Quizá hayamos estado de acuerdo en algunos de los puntos que allí se analizaron pero no precisamente en este proyecto que viene del Poder Ejecutivo nacional.

Quiero, además, en homenaje a los colegas y al cuerpo, ser lo más concreto y conciso posible en el tratamiento de este trascendente proyecto, que sin duda tiene gran importancia para la República.

Después de cuatro años de gobierno democrático se pone a consideración del Senado de la Nación un nuevo proyecto de ley de defensa, enviado —como dije recién— por el Poder Ejecutivo a la Cámara baja, fruto del acuerdo interparlamentario efectuado por los dos parti-

dos mayoritarios del país. Atrás han quedado las deliberaciones que este alto cuerpo efectuará sobre tan relevante tema como es la defensa nacional en oportunidad de tratarse el proyecto anterior del Poder Ejecutivo, el cual —modificado tanto en la Cámara baja como en este recinto— yace actualmente enterrado en la Cámara de Diputados.

Mucho se ha dicho estos años acerca de este tema esencial para la Nación, como es esta ley marco específico para la defensa nacional. Y en tan dilatado lapso debemos rescatar al menos el hecho de que en este tema las fuerzas políticas del país tenemos claramente definidos los aspectos sustanciales de nuestras diferencias sobre la materia, las que hoy, frente a este nuevo proyecto de ley, delinearé en sus aspectos sobresalientes.

Este proyecto de ley, señora presidente, fruto del acuerdo político, es también fruto de una fusión —por cierto poco feliz— del anterior proyecto del partido gobernante, de 1985, con el presentado ese mismo año en la Cámara de Diputados por el Partido Justicialista, advirtiéndose claramente en el texto en debate la diferencia de vertientes de pensamiento que, sin duda, ha conspirado contra la precisión, armonía y coherencia de su articulado.

Nuestra postura es bien conocida, por lo que me limitaré a señalar los aspectos centrales con los cuales disentimos, cosa que ya hicimos en ocasión de tratarse el primer proyecto, como también en oportunidad de acercarse a la Comisión de Defensa de la llamada Mesa del Consenso Democrático un proyecto casi idéntico al que hoy analizamos.

En primer lugar, señora presidente, no compartimos el estrecho concepto que de la defensa nacional adopta el proyecto en su artículo 2º, que restringe la misma a las agresiones de origen externo. Al respecto, resulta ilustrativo señalar que en la segunda reunión de la Comisión de Defensa de la citada Mesa, tanto el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de este cuerpo como el asesor ad hoc del Partido Justicialista dejaron bien en claro que el hecho de no mencionarse la utilización de las fuerzas armadas en el marco interno en el texto de ese proyecto no implicaba una limitación a las facultades que la Constitución Nacional otorga al presidente de la República en el artículo 86, incisos 15 a 17, ya que la limitación del uso de las fuerzas armadas sólo al caso de agresión externa se sustentaría en la necesidad de no contemplar dicha hipótesis excepcional como rol específico de las fuerzas armadas, cuyo rol en

casos graves de orden interno no le está vedado al Poder Ejecutivo por ninguna previsión de la Carta Magna.

Quienes sustentan este nuevo proyecto, dejaron establecido que la separación del concepto de defensa nacional del de seguridad interior, responde sólo a un problema metodológico, sin que ello implique el rechazo de otros sistemas que podrían haberse utilizado para abordar el tema. Lo expuesto fue sintetizado cuando se afirmó: "...no nos olvidamos de las agresiones internas; sólo las tratamos en otra ley".

Aclarado el fundamento doctrinario expuesto, y obligados por la pobreza del mensaje que acompaña al proyecto, conviene hacer algunas precisiones.

En primer lugar, discrepamos con la separación de los conceptos de defensa nacional y de seguridad interior que adopta la ley. En segundo término, si las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad —Gendarmería y Prefectura— son parte componente del sistema de defensa nacional, estas últimas en los términos que prescribe la ley en su artículo 9º inciso g), teniendo en cuenta que según el artículo 31 los dos cuerpos de seguridad citados, en caso de guerra, "podrán ser asignados a comandos estratégicos operacionales y comandos territoriales, según se derive del planeamiento correspondiente", siguiendo igual metodología, resulta a todas luces necesario que el proyecto prevea expresamente que en caso de excepción grave, como es la guerra, para las fuerzas de seguridad, o grave conmoción interior, para las fuerzas armadas, estas últimas puedan ser utilizadas cuando la índole y extensión del conflicto interno aconsejen su empleo en virtud de lo expuesto por la normativa constitucional citada, sin que ello implique alterar el rol primario y específico que a las fuerzas armadas se les asigna en este proyecto.

(Lee) "Destacamos que a nuestro criterio resulta superior, conceptual y técnicamente, el artículo 2º de la ley española de defensa que, junto con la Constitución de 1978, en este punto inspiró fuertemente a los redactores del proyecto. Así lo manifestaba ayer el señor senador por La Pampa.

Allí la defensa nacional se encuentra dispuesta para enfrentar cualquier forma de agresión, sin limitar el concepto a sólo una especie de éste, la de origen externo, como lo hace el proyecto que tratamos.

Señora presidente: debemos mirar hacia adelante. Pero olvidamos, como lo hace el proyecto, que existen agresiones internas de origen exter-

no, olvidar como bien lo señalara premonitoriamente el señor presidente de la Nación, cuando siendo diputado nacional dijo: "La democracia representativa está permanentemente amenazada por la guerra subversiva", sería caer dentro del calificativo de "idiotas útiles", que utilizara el señalado legislador, para aquellos que no advierten la realidad de esa amenaza. (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1965, página 4135).

Hechos como los indicados, cuya reaparición no se advierte probable, deben alertarnos, deben ser prevenidos en un cuerpo normativo de las características del que hoy se debate en este recinto.

Pareciera que la vigencia del sistema democrático es, para algunos políticos argentinos, garantía suficiente de permanente paz interior y de la desaparición definitiva de cualquier rebrote, de futuros hechos subversivos. Lamentablemente, la situación que enfrentan en el marco interno las democracias de las repúblicas del Perú y Colombia debería ilustrarnos y advertirnos para no ser ingratamente sorprendidos.

En estos temas, señores senadores, no hay lugar para la ingenuidad política si, como se ha dicho, la ley no veda al presidente —es obvio que no podría hacerlo— la facultad que la Constitución Nacional le otorga para usarla en el marco interno, queremos que así se exprese.

Señora presidente, queremos que el gráfico anexo del proyecto prevea esa hipótesis, como oportunamente lo hicimos saber a los propulsores del proyecto. Y esto, señores senadores, no tiene nada que ver con la tan temida llamada doctrina de la seguridad nacional, sino con el texto expreso de la Constitución Nacional que nos rige. Y que no se nos diga que la mención no se quiere hacer por innecesaria, ya que en otras partes del articulado —como por ejemplo, los artículos 26 y 29— se hacen referencias expresas a la Carta Magna. ¿O acaso el presidente Yrigoyen no hizo uso de la facultad que señalo? ¿O es que se han olvidado las palabras del ministro de Defensa Leopoldo Suárez, cuando en la Cámara de Diputados advertía, en 1964, que para defender el país y su vida democrática estarían las fuerzas armadas, si fuera necesario, ante un proceso de tipo guerrillero? (Tomo IV, página 2883 y siguientes, del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados.)

¿Acaso los justicialistas han olvidado también a ese político y militar argentino que se llamó Juan Domingo Perón, cuando el 22 de enero de 1974 enseñaba a los diputados de la juventud peronista cómo debía enfrentarse a la delincuencia terrorista, desnudando así la impor-

tancia que otorgaba a esa amenaza cuando decía: "Vamos a proceder de acuerdo con la necesidad, cualesquiera sean los medios. Si no hay ley, también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente, porque a la violencia no se puede oponer otra cosa que la violencia" (página 14, cuaderno "Perón y el imperativo nacional", Prensa y Difusión de la Presidencia, año 1974). Me cuesta aceptar que este justicialismo renovado desconozca el pensamiento del presidente mencionado, cuando definía a la agresión moderna como de tipo integral, la cual se procesa en los campos político, económico, sociológico y militar y por ello dicha agresión debe ser enfrentada también en forma integral (discurso del Colegio Militar del 25 de mayo de 1974).

Lo destaco nuevamente, la palabra utilizada es "integral". Aquí no se advierten las tajantes y académicas divisiones que incluye el proyecto, por cierto tan ajenas a la realidad.

Nosotros, señor presidente, creemos que nuestro deber nos impone legislar firmemente asentados en la Constitución Nacional, afirmados en la experiencia nacional e internacional a la luz de las realidades concretas y no de las elaboraciones teóricas, fruto del prejuicio y del escrúpulo ideológico, que cuando se ponen al servicio de temas tan permanentes y esenciales de la República, denotan una confusión de jerarquía de normas y valores cuya peligrosidad es mi deber señalar hoy en este recinto.

Seré más breve con el resto del articulado. Discrepamos con el artículo 4º cuya supresión del texto proponemos. En el mismo se impone una labor de dilucidación permanente entre los problemas referentes a la defensa nacional —que señala el artículo 2º— y los atinentes a la "seguridad interior", la cual no se define, por lo que dicha labor de dilucidación de conceptos que el texto llama "diferencias fundamentales" vuelve el debate puramente abstracto y subjetivo. Se nos anuncia en este artículo 4º que la seguridad interior será regida por una ley especial. Hubiera sido interesante que la misma se hubiera incluido dentro del plazo de 365 días que fija el artículo 46 para el dictado de otras nueve leyes afines.

Entendemos que tanto esta ley como la de seguridad interior, para seguir la metodología de los redactores del proyecto —y con la cual ya señalamos nuestra discrepancia— deberían haberse tratado en forma simultánea en este Parlamento.

Cuatro años para una ley de defensa ¿Demoraremos cuatro más para la de seguridad interior?

Con respecto al programa "mecanismos de

fluctos previsibles que el presidente de la Nación y el Consejo de Defensa Nacional deben tener en cuenta, establecidos en el artículo 13 del proyecto y cuyo estudio debe ser hecho a la luz del gráfico anexo que incluye el proyecto en debate, resulta rescatable como esfuerzo intelectual complejo, pero aquí nuevamente la realidad y la teoría siguen caminos diferentes. Al menos si el texto hubiera definido las cuatro situaciones de conflicto como lo hacía el proyecto justicialista de 1985, hubiera sido más fácil la exégesis que con el complejo sistema referido.

Pero no, señora presidente. No sólo no se define el contenido del tipo de agresión, sino que se omite deliberadamente la inclusión en el marco de situación interior de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo nacional de utilizar las fuerzas armadas, en el marco interno, cuando así lo aconsejen graves circunstancias de conmoción interior. Y sabemos que esto puede hacerse y lo sabemos todos, señores senadores, porque como ya lo expresara, lo dice la Constitución, siendo un claro ejemplo de dicha facultad el decreto 2772 del 6 de octubre de 1975, en donde el titular del Poder Ejecutivo ordenó a las fuerzas armadas las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias para "aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país" —decreto suscrito, entre otros, por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la presidencia de la República—.

En cuanto a la integración del Consejo de Defensa Nacional —CODENA— discrepamos con la inclusión de todo el gabinete como miembros permanentes ya que resulta innecesaria, siendo suficiente la presencia de los cuatro ministros que establecía el proyecto anterior del Poder Ejecutivo con la versión final que le dió esta Cámara.

Cuestionamos también la ausencia en este organismo asesor como miembros plenos y permanentes de los jefes de los estados mayores generales de las fuerzas armadas y del Estado Mayor Conjunto, ya que sólo se prevé su asistencia acompañados por el señor ministro de Defensa de la Nación.

La ley española, dilecta inspiradora de párrafos enteros de este proyecto, no teme afirmar que las fuerzas armadas son el pivote sobre el cual gira la defensa nacional; y esto es así señor presidente, aunque se adopten todos los disfraces legislativos imaginables.

Téngase en cuenta que la ley peninsular es posterior al invocado pacto de La Moncloa, inspirador de nuestra Mesa del Consenso Dem

crático, cuyo interés motivó el envío en viaje de estudios a España de un importante funcionario del área del Ejecutivo, pacto que derivó en la Constitución del Reino de 1978 y en la ley de defensa creada cuatro años después, y aún vigente.

Sin duda, el Partido Socialista Obrero Español ha demostrado un criterio y adaptación a la realidad de los tiempos que, en comparación con posturas ideológicas de algunas fuerzas políticas del país, resulta altamente envidiable. Lamentablemente, algunos sectores de pensamiento al servicio de la ideología y no de la realidad, asumen actitudes que bien pueden calificarse a contrapelo del tiempo y de la historia.

Los jefes militares no serán incluidos como miembros del consejo asesor. Esto es lo que quieren los sostenedores del proyecto. Esta es la realidad de hoy, señora presidente, ante la cual las vacías declaraciones de terminar con la división y los prejuicios entre la sociedad civil y militar, que venimos escuchando desde hace cuatro años, pierden toda credibilidad.

Hasta aquí, las objeciones principales. Habría más cosas para decir, pero soy consciente de la inutilidad de mi esfuerzo, como lo soy también de mi deber de expresar lo señalado, más allá de los resultados buscados por las fuerzas políticas que pactaron este proyecto de ley.

Para terminar, no puedo dejar de señalar, con referencia a lo sucedido en la Mesa del Consenso, que el Pacto Autonomista-Liberal señaló con claridad y por escrito sus objeciones a un proyecto prácticamente idéntico al que después ingresó a la Cámara baja. Tengo aquí un recorte del diario "La Nación" que, solicito, sea insertado en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento. 1

Sr. Romero Feris. — Cabe agregar también que el declamado consenso alcanzado en dicha comisión respecto del texto de este proyecto de ley o de su casi idéntica versión primigenia es inexacto. En dichas reuniones fueron muchos los partidos que objetaron los principios que sustentan este proyecto.

Por ello es necesario dejar definitivamente aclarado que la declaración de diez puntos que efectuó la comisión, como surge de la simple lectura, no es más que una vaga y general declaración de principios a ser considerados cuando se encaren en general temas vinculados a la defensa nacional.

En cuanto al texto concreto de este proyecto de ley, dicha declaración no dijo nada limitándose a expresar en su punto 1º que resultaba conveniente el dictado de una ley de defensa, lo que lejos está de avalar el presente proyecto, con el cual no sólo discreparon el Pacto Autonomista Liberal sino también otras fuerzas políticas del país.

El texto de este proyecto, que contiene imperceptibles reformas de maquillaje, presentado en oportunidad de reunirse la comisión respectiva en la Mesa del Consenso, sigue generando nuestra oposición por todos los motivos ya señalados.

Señora presidente: nuestra misión es legislar para el porvenir a la luz de las claras disposiciones de la Carta Magna, teniendo en cuenta el bien común general de la República, que no puede subordinarse a acuerdos ni transacciones de coyuntura que rebajan la función que debe cumplir el Parlamento argentino.

Por lo expuesto, reitero que el bloque autonomista no ha de avalar con su voto la sanción de este cuestionado proyecto de ley de defensa nacional que hoy está considerando esta Honorable Cámara."

Sra. Presidente (Malharro de Torres). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Señora presidenta: el debate prácticamente está definido. Como bien lo expresaran el señor senador Martiarena y recientemente el señor senador Romero Feris, no es imprevisible el resultado; pero a todos nos toca dejar sentada nuestra opinión.

No voy a hacer un discurso excesivamente extenso porque creo que casi todos los puntos han sido debatidos, por lo menos los de mayor importancia. Pero sí voy a insistir en algunos enfoques para dejar a salvo mi opinión que, por otra parte, coincide con lo recientemente expuesto por el señor senador Romero Feris.

El proyecto que estamos considerando versa sobre facultades que la Constitución atribuye al presidente de la República. En ese sentido debemos redoblar nuestra atención porque ningún poder —esto es ni el presidente ni nosotros— puede arrogarse más facultades que las que la Constitución le otorga. Pero al mismo tiempo tampoco es posible que vayamos a cercenar las atribuciones que nuestra Ley Suprema confiere al presidente de la Nación.

Es de buena práctica que el primer requisito que un proyecto legislativo como el que consideramos debe tener sea dejar suficiente campo de acción, porque si así no fuera vulneráramos las facultades constitucionales del pre

sidente de la República. El presidente debe disponer de las fuerzas armadas porque eso es lo que establece específica y taxativamente la Constitución de la Nación en su artículo 86, inciso 17, y debe tomar sus decisiones al respecto libremente, lo que implica también responsabilizarlo del buen o mal desempeño en las situaciones que se presenten, por los buenos o malos asesoramientos que haya aceptado, los cuales no le pueden ser impuestos exclusivamente por la ley.

Con este pequeño ejemplo del asesoramiento señalo que el presidente puede asesorarse con los personajes que este proyecto le impone; pero no hay duda alguna de que si prefiere escuchar otras opiniones o desoir las que el texto pretende ordenarle, la Constitución lo autoriza para proceder con este criterio.

(Lee). "Tengamos en cuenta que la misma ley hasta ahora vigente, la 16.970, si bien creó el CONASE —Consejo Nacional de Seguridad— y el Comité Militar, expresa que el presidente adoptará en todos los casos las decisiones.

El artículo 10 del proyecto que consideramos diluye esa claridad dado que siempre se establece el necesario asesoramiento —y recalco necesario— de otros funcionarios, lo que en cierta manera parece cercenar las atribuciones presidenciales conferidas sin retaceos por la Constitución Nacional.

Cuando la Constitución quiere limitar o reglar tales facultades lo establece expresamente, como ocurre con la provisión de empleos o grados de oficiales superiores del Ejército y de la Armada, exigiendo, en tal caso, el acuerdo del Senado, conforme al artículo 86, inciso 16, de la Constitución Nacional.

Al leer el proyecto hay dos observaciones que saltan a la vista inmediatamente. La primera es la cantidad de definiciones, de directivas y de finalidades. La segunda es la separación constante para legislar entre este proyecto que se declara referido a la defensa exterior y una eventual ley sobre defensa interior.

En cuanto al primer aspecto —las muchas definiciones— es un asunto siempre criticable y, en última instancia, mejor fuera colocarlo en un artículo sobre significación de términos.

En cuanto al segundo aspecto que señalo, el de las directivas y las finalidades, recuérdese que nuestra Constitución reservó al Preámbulo para ello, porque en ese entonces se sabía que las leyes deben contener disposiciones imperativas y no preceptos de otra índole.

Mi colega de representación por Corrientes, el senador Romero Feris, ha destacado con minuciosidad una serie de defectos técnicos y la, a

nuestro juicio, equivocada percepción política que subyace en el espíritu del proyecto de ley que consideramos. También expresó diversas críticas, todo lo cual traduce nuestro pensamiento común, adelantado por los señores senadores a quienes sucedimos, como bien acaba de señalarse, lo que también fue expuesto en la Mesa del Consenso.

No voy a entrar en el análisis de ciertas situaciones particulares ya examinadas en su exposición y que doy por reproducidas.

Centraré entonces mi exposición en un mayor abundamiento sobre el tema ya debatido antes y también ahora, referente a la diferencia constante que el proyecto establece entre la defensa o la seguridad exterior y la defensa o seguridad interior, asunto éste que sin duda constituye la médula que inspira filosófica y políticamente el proyecto en debate.

Sé que la seguridad o defensa exterior es diferente de la seguridad o defensa interior; sé que son conceptos distintos. Son cosas diferentes pero deben ser consideradas al mismo tiempo, porque eso surge de la lógica y de la propia Constitución.

En la vida hay muchas cosas que son distintas pero que debemos sincronizar, armar, tratar en conjunto. Por ejemplo, nunca habremos escuchado hablar de un preparador físico que enseñe a correr con la pierna izquierda, dejando pendiente la cuestión de la pierna derecha para dentro de un par de años, de trescientos sesenta y cinco días para un término indefinido, como acaba de referirlo precisamente el señor senador Romero Feris."

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Juan Trilla.

Sr. Aguirre Lanari. — Y esto sea dicho sin perjuicio de que en el mundo actual a veces tengamos problemas internos motivados por situaciones que provienen del extranjero. Esto es así a punto tal de que en muchas oportunidades es difícil o casi imposible calificar las situaciones como internas o externas solamente.

El ejemplo de la sincronización o tratamiento integral de los problemas que pueden emerger del campo que examinamos es un asunto que surge de una lógica irrefutable. Es evidente que en ejercicios de sus poderes de guerra el presidente de la República puede apelar a la Gendarmería Nacional, a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía Federal Argentina para la realización y apoyo de tareas bélicas que hagan a la defensa exterior.

Es evidente también —supongo— que en caso de conmoción interior, si la situación así lo urge, no podría prescindirse de la actuación de las fuerzas armadas.

La defensa de la sociedad y del orden constitucional deben ejercerse con todos los recursos con los que cuenta el Estado, siendo el presidente de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y sin limitaciones legales como las que aquí se quieren imponer, el encargado de dirigir las operaciones y de apelar al concurso de la o las fuerzas que estime necesarias y convenientes. Son las circunstancias de hecho, imposibles de prever exactamente a priori en una ley, las que aconsejarán en cada caso la conducta a seguir.

Sobre este asunto de la división que se quiere hacer entre la defensa para el exterior y la seguridad interior, mantiene actualidad la crítica que en este mismo recinto realizara el entonces senador Leconte respecto de una cuestión a la que también hizo referencia ayer el miembro informante de la comisión, senador Berhongaray. Así, se mencionaba que el modelo inspirador del proyecto entonces considerado en la definición de la defensa nacional era el artículo 2º de la ley de defensa de España.

A continuación, leo lo que esta ley expresa textualmente: "La defensa nacional es la disposición, integración y acción coordinada de todas las energías y fuerzas morales y materiales de la Nación ante cualquier forma de agresión".

Y bien, señor presidente, aunque con ciertas correcciones en su fraseología, el artículo 2º del proyecto que consideramos seguramente mantiene igual filiación.

El proyecto en examen limita el concepto de defensa nacional al enfrentamiento de las agresiones de origen externo. No obstante ocurre que el propio proyecto, después de afirmar una tajante separación mediante el artículo 4º, se encarga de sentar algunas reglas específicas sobre temas de orden interno a cuyo efecto utiliza un cuadro anexo que contempla la hipótesis de la existencia de ciertas situaciones internas, admitiendo así la actuación de las fuerzas armadas en unos casos, mientras la prohíbe en otros; esto, no obstante ser también aquéllos internos.

¿Cuál es el criterio que rige para esta diferenciación? Me pregunto: ¿por qué el proyecto, que afirma no referirse a cuestiones internas, dice que las fuerzas armadas pueden intervenir en casos de desastres y de otras calamidades naturales, todas ellas internas, así como en otros casos de seguridad interior como es el de la agresión militar y no pueden actuar esas fuerzas en otros supuestos internos?

Me pregunto cuál es el criterio para que una agresión armada, por ser militar, merezca a priori un tratamiento diferente para el que se estipula frente a otra agresión armada, no militar, pero que puede ser por su magnitud y fuerza tanto o más nociva y peligrosa para el orden constitucional que aquella.

En estos casos, que sabemos pueden ser impulsados con tecnología y recursos foráneos sofisticados y efectivos, es indudable que puede requerirse bastante más que los medios que se emplean en los procedimientos usuales de la seguridad policial.

Los ejemplos que acaban de citarse, de un país tan cercano a nuestro sentimiento como es la fraterna República del Perú y también la hermana República de Colombia, nos muestran que incluso las fuerzas armadas resultan a veces superadas en su intento de defender el orden constitucional, aunque la insurgencia no provenga de fuerzas que puedan rotularse como militares.

Y esto nos muestra también, señor presidente, que en estos casos, y yo diría que en todos los casos, debemos tener la vivencia de que los modelos extranjeros deben ser tomados, pero no como de aplicación automática ni con la fuerza de la convicción de su autoridad irrefutable, porque todos los países son distintos e incluso dentro de un mismo país las circunstancias pueden variar con el tiempo.

Es muy interesante y los abogados solemos citar jurisprudencia —y muchas veces seguramente la habremos de citar en este recinto hablando de modelos extranjeros—, pero como focos orientadores, no de aplicación automática porque lo que es bueno en un país puede no serlo en otro o puede no serlo en la misma medida y lo que es bueno en una circunstancia, dentro de un mismo país puede ser inaplicable en circunstancias sobrevinientes y no previstas originalmente por el legislador común.

De modo que la diferencia entre agresión de origen militar o no militar no puede ser cualitativa, sino que a veces es también cuantitativa. Cuando la potencia de la agresión, provenga o no cualitativa o formalmente de una agresión militar, exija la actuación de las fuerzas militares, éstas deben ser puestas en acción sin trabas legales de ninguna naturaleza.

En realidad, perderíamos el rumbo si olvidamos, al buscar soluciones, cuál es la norma superior que rige en todos los asuntos, la cual por ser ley fundamental no puede ser contradicha ni alterada por la legislación ordinaria. Es la Constitución Nacional la que nos da el rumbo preciso y la que muestra, a través de distintas disposiciones, que la defensa es una sin que

puedan hacerse compartimientos estancos entre lo interior y lo exterior. La Constitución trata el tema conjuntamente y con ello nos da el rumbo acertado.

Ya el Preámbulo nos habla del objeto de "proveer a la defensa común". No expresa diferencias en cuanto a lo externo y lo interno.

El artículo 5º dispone la garantía del gobierno federal a las provincias. Y en seguida veremos que las garantiza contra peligros de adentro y de afuera. Pero, me pregunto: ¿con qué las garantiza? ¿No las debe garantizar con todo lo que esté a su alcance?

El artículo 6º de la Constitución ordena la intervención del gobierno federal en provincias, a saber: para garantizar la forma republicana de gobierno —que es materia interna—; para repeler invasiones exteriores —que es cuestión de origen externo—; para sostener a las autoridades constitucionales —cuestión interna que también puede ser externa—; para restablecer las autoridades constitucionales en dos casos internos, cuando hubieran sido depuestas por sedición, lo que según la misma Constitución significa por una fuerza armada o reunión de personas —artículo 22—, o cuando fueran depuestas por invasión de otra provincia.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, senador Luis Rubeo.

Sr. Aguirre Lanari. — (Lee). "El artículo 21 de la Constitución Nacional impone a todo ciudadano la obligación de armarse en defensa de la patria y de esta Constitución. Otra vez aparece lo interno y lo externo, pero además para ambos casos hay que armarse, es decir, adoptar un estado militar.

El artículo 23, sobre estado de sitio, nos muestra que toma en cuenta las dos posibilidades, o sea, el caso de conmoción interior y el de ataque exterior, que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella.

El artículo 67, inciso 2) permite al Congreso imponer contribuciones siempre que la defensa, seguridad común y el bien general lo exijan y, por supuesto, vemos que trata conjuntamente la defensa y la seguridad.

El mismo artículo 67, en su inciso 23 nos da a nosotros, es decir, al Congreso, la facultad de fijar la fuerza de línea de tierra y de mar, en tiempos de paz y de guerra, y formar reglamentos y ordenanzas para el gobierno de dichos ejércitos. Una vez más trata conjuntamente lo

El artículo 67, inciso 24 dispone autorizar por parte del Congreso la reunión de las milicias de todas las provincias o parte de ellas, cuando lo exija la ejecución de las leyes de la Nación y sea necesario contener las insurrecciones o repeler las invasiones. Otra vez, lo interior y exterior van unidos.

De igual modo, los poderes del presidente de la República no se diferencian en cuanto a su magnitud y ejercicio según se trate de situaciones internas o externas, salvo los casos en que específicamente la Constitución lo determine. Conforme al inciso 15 del artículo 86, el presidente es el comandante en jefe de todas las fuerzas armadas, y lo es siempre —haya paz o guerra, disturbios o invasiones—, es decir, en circunstancias internas o externas a la vez.

De acuerdo con el artículo 86, inciso 16, de nuestra Carta Magna el Presidente provee los empleos militares de la Nación. Lo hace con acuerdo del Senado en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores del Ejército y la Armada; y por sí solo en el campo de batalla. Y conocemos muy bien que este campo de batalla puede originarse en una circunstancia externa y también interna. Con inteligencia, porque también lo sabían los constituyentes, no se hizo entonces diferenciación alguna entre las mismas en cuanto a esta atribución presidencial. La Constitución también señala en el inciso 17 del citado artículo 86 que el presidente de la República dispone de las fuerzas militares, marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución de acuerdo con las necesidades de la Nación. Vuelvo a recalcar que estas necesidades, por supuesto, pueden ser internas o externas.

Comprendo que todas estas cosas puedan pasar desapercibidas porque muchas veces ocurre que no vemos lo que está más cerca, lo más saliente, pero me parece que la experiencia recogida en lo que va de este año liquida esos enfoques parciales. ¿Cuál es esa experiencia? A raíz de lo ocurrido en el mes de enero resulta claro y evidente que el presidente ejerció facultades militares a través del Ministerio de Defensa y de los Estados Mayores.

Cuando las fuerzas terrestres avanzaron sobre la zona de Bella Vista, se trataba de una cuestión simplemente interna pero se prefirió que fuera resuelta directamente por las fuerzas armadas. Creo que dicha solución, e incluso la adoptada ante los acontecimientos sobrevinientes, muestra que también las fuerzas armadas deben actuar a veces en problemas internos. Y naturalmente no podía esperarse que el Congreso dictara una ley de seguridad como la que promete el artículo 4º.

Esto muestra que las facultades militares del presidente fueron ejercidas, por cierto que con legitimidad constitucional, aunque no hubiere habido ataque exterior.

Todo esto, de haberse aprobado el proyecto que consideramos, podría haber aparecido en contradicción con la letra y el espíritu del mismo, según surge del cuadro anexo al articulado.

Pero dejemos que el tiempo avance un poco más. Hace unos días volvieron a padecerse los atentados con bombas —los seguimos padeciendo todavía— que cobraron su cuota de daño a seres y cosas. Y si el problema arrecia, si el terrorismo de cualquier signo amenaza, entonces, sin duda se va a apelar a los militares. Esto no por ocurrencia mía; ya lo dijo el señor presidente de la República en su discurso del lunes próximo pasado, donde no puso límite al peso de la fuerza que opondría a estos ataques.

Expresó que se usará de toda la fuerza contra el golpismo. Se refería, sin duda, a ataques que evidentemente vienen de adentro.

Así que el presidente no solamente no puede declinar la facultad de utilizar las fuerzas armadas para temas internos, sino que las utilizó y afirma que las seguirá utilizando en la medida de lo necesario, lo que es correcto y lógico, conforme a lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Me adelanto a lo que podría objetarse respecto a lo expuesto precedentemente. Puede decirse, en efecto, que conforme al artículo 13 del proyecto y el cuadro aclaratorio anexo no le está prohibido a las fuerzas armadas actuar para reprimir una agresión militar, estando vedada su actuación sólo en los casos de conflicto social localizado o generalizado, o de agresión interna.

De entrada puede verse que la ley aparenta no referirse a cuestiones internas, pero en su cuadro implanta prohibiciones precisamente sobre ellas. Pero también en situaciones nacionales, o sea internas, permite actuar en caso de agresión militar o de desastre, según ya lo vimos.

Yo me pregunto, señor presidente, ¿en qué caso del cuadro anexo encuadramos lo que ocurrió en enero? ¿Puede afirmarse que fue una agresión militar, que justificara por ello la utilización de las fuerzas militares que avanzaron sobre Bella Vista? Me pregunto sobre el desenvolvimiento del mismo hecho: ¿estamos seguros de que hubieron solamente militares en acción o participaron también elementos civiles?

Las circunstancias de lo ocurrido en Aeroparque, episodio en que sus autores expresamente señalaron que estaban en directo apoyo del alzamiento que ocurría en Monte Caseros, de-

muestran lo complejo del problema. Demuestran también que cuando se quiere extremar el análisis racionalista que pretende, mediante una normativa legal, cubrir todos los supuestos, con el objetivo de separar la acción de las fuerzas armadas de toda actividad que no sea la específicamente militar ante lo externo, es como si se quisiera tapar el cielo con un harnero.

En lugar de estas trabajosas y forzadas lucubraciones legales, en las que la mente humana pretende imaginar los supuestos fácticos, con detallismos que ante los hechos muestran su insuficiencia, es mejor dejar la vigencia de los principios constitucionales desarrollándolos tal cual son, principios que por su concisión y generalidad abarcan todos los supuestos, como antes he sostenido. Esos principios conceden al presidente de la República y a los funcionarios que de él dependen todas las facultades necesarias para el mantenimiento del orden constitucional y a la vez, como dije antes, con las responsabilidades consiguientes para actuar dentro de los carriles que nuestra Ley Suprema establece.

Será lo que los constitucionalistas y la doctrina judicial llaman la "prudencia política", la estrella polar que oriente las rectas decisiones que a veces deben ser tomadas sin inhibiciones ni complejos, inspiradas solamente por la plena convicción de actuar en defensa del orden constitucional, dando cuenta al Congreso de las motivaciones o de las circunstancias de hecho existentes o sobrevinientes.

En resumen, el proyecto de ley tal como viene elaborado no puede artificialmente dividir lo que en la realidad va muchas veces unido de manera indisoluble, o pueden maniatarse las atribuciones y deberes constitucionales del presidente de la República, que en circunstancias de excepción, como las que prevé nuestra Constitución, tiene la facultad y el deber de tomar los recaudos que aquélla prescribe para defender su vigencia. Su buen o mal desempeño en el ejercicio de estas atribuciones y responsabilidades tienen también previstos los cauces apropiados dentro de nuestro sistema constitucional.

Acabamos de observar que pueden existir supuestos, como el ocurrido en enero, que presionan y superen la normativa legal proyectada no encontrando cabida dentro de la misma.

Pero debemos agregar que incluso algunas de las disposiciones previstas en el proyecto, que impedirían toda actuación de las fuerzas armadas en ciertos aspectos internos, son meras disquisiciones teóricas que los hechos pueden obligar a desconocer. Tal es el caso de los conflictos sociales generalizados y locales en los que, con

forme al proyecto, las fuerzas armadas no pueden intervenir. Yo me pregunto qué actitud debería tomar el Poder Ejecutivo nacional en el caso de que las fuerzas policiales y de seguridad se vieran superadas por un conflicto y, lo que es peor aún, no quisieran actuar?

Esto último no es una hipótesis fantástica. Ya hemos visto cómo el malestar en las policías ha obligado a su reemplazo por otras fuerzas de seguridad, circunstancia hoy bastante repetida en sus eventuales posibilidades.

Y esa posibilidad se puede dar también porque están subyaciendo factores económicos acuciantes, también en las fuerzas que pueden actuar como sustitutas, salvo que para asegurar su disposición se les acuerden privilegios excepcionales, lo que tampoco sería aconsejable dentro del panorama general.

Estos ejemplos que nada tienen que ver con la fantasía sino que rozan realidades conocidas muestran que si queremos defender la sociedad y el orden constitucional no debemos acudir a distorsiones artificiales como las que a mi juicio emanan del proyecto en cuestión, en el asunto que examinamos.

Ahora volvamos al ejemplo de Monte Caseros. Quien crea que no puedan repetirse episodios de este tipo, sin duda es un iluso. Siempre se pueden repetir porque siempre pueden haber descontentos con el orden imperante.

Pero no es necesario aprender la lección de principio de año ni recordar la cantidad de veces que las fuerzas armadas defendieron la situación internamente, como por ejemplo lo dispuso el presidente Yrigoyen en la oportunidad citada en este Senado y como ahora mismo ha ocurrido.

En cuanto a las principales observaciones que deseo formular al articulado en sí, algunas cosas ya dije sobre ciertas disposiciones. Quiero agregar también que participo de las prevenciones formuladas hace un momento por el señor senador Martiarena en su comentario al artículo 5º del proyecto, por lo que no abundaré sobre el particular.

Agrego ahora mi cuestionamiento al artículo 8º, puesto que no consagra finalidades, como dice, sino funciones.

Es objetable también el artículo 14 que dispone la integración del Consejo de Defensa Nacional.

Pienso que tiene algunas fallas. En primer lugar, la ausencia del jefe del Estado Mayor Conjunto y del más alto mando en cada fuerza, como ya señaló el senador Romero Feris.

En segundo lugar, destacamos que hay dos formas clásicas para formar un Consejo de Defensa: o bien es más reducido, como sucedería

si, además del presidente, ocupan lugares los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior y de Defensa, así como jefes militares, o bien está compuesto por todo el gabinete —como indica el proyecto—, más los militares, pero siempre con la posibilidad de que el presidente convoque a menos personas, según la naturaleza del tema y de la reunión.

Estos consejos más restringidos facilitan las reuniones puesto que, en muchos asuntos, no se precisa gran asistencia, sino la de quienes desempeñan funciones concernientes al asunto de que se trate.

El esquema de reuniones parciales es típico de la ley 13.234 de 1948 que, en este sentido, tiene ventaja sobre el proyecto, de acuerdo con lo que acabo de expresar.

Tales son, señor presidente, las diferencias fundamentales que explican nuestra oposición al proyecto que se considera, sin que de modo alguno discrepemos con la necesidad, naturalmente, de una ley de defensa.

El país está reclamando un sincero e impostergable reencuentro entre las fuerzas armadas y la civilidad. Creo que muchos esfuerzos se han hecho entre unos y otros, sin duda con sentido positivo. Si alguna suspicacia o duda quedaba con respecto al compromiso y a la adhesión de las fuerzas armadas al sistema constitucional, creo que los episodios ocurridos en enero demuestran lo contrario.

Es posible, sin embargo, que existan algunos cuestionamientos en el sentir de muchos de los integrantes de las fuerzas armadas que, quizás, se guarden en la intimidad. Debemos hacerles tener el convencimiento de que creemos en su leal propósito de preservar el orden constitucional y de que confiamos en que no habrán de desertar de esta tarea.

Debemos estimular su inserción en la vida nacional, sin ningún retaceo en su actuación cuando se trate no solamente de la defensa frente a un ataque exterior, sino también cuando en lo interno peligre la seguridad pública y el presidente de la Nación considere conveniente encomendarles la defensa del orden constitucional.

Ninguna ley puede limitar las eventuales decisiones del presidente, en su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. Ninguna ley tampoco podrá impedir que las fuerzas armadas infrinjan la Constitución, aunque se disponga que no pueden actuar en el ámbito interno.

Lo que impedirá que eso ocurra, lo que impedirá tan lamentable circunstancia, es el convencimiento de las propias fuerzas armadas en la necesaria vigencia de la Ley Suprema, para lo cual debemos continuar con la tarea que afir-

me su plena inserción en la vida institucional, removiendo cualquier circunstancia que pueda parecer como un obstáculo o una prevención.”

Por las razones desarrolladas precedentemente fundó mi voto negativo al proyecto que consideramos.

Sr. Presidente (Rubeo). — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

Sr. Sánchez. — Honorable Cámara: el tema que estamos tratando tiene vital importancia porque atañe a la Nación misma y creo que ningún representante del pueblo puede dejar de hacer oír su voz, aun en la reiteración, para puntualizar su opinión, sus afanes, o sus angustias.

Es por ello que desde ayer estamos tratando este tema habiendo escuchado largas disertaciones —así las califico— que han partido dando vuelta las hojas de la historia para tratar de encontrar el camino que nos muestre la luz de la verdad para dictar un instrumento que permita realizar la defensa nacional en la verdadera dimensión del término.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, señor Adolfo Gass.

Sr. Sánchez. — Se ha caminado desde mucho antes de Cristo, cuando la sociedad buscaba organizarse. Hemos pasado por los griegos, los persas, los mongoles, los turcos de Tamerlán, la invasión de los bárbaros, la Edad Media y el Renacimiento, hasta llegar hasta nuestros días, tratando de buscar la articulación de algo que permita reglar nuestra situación a todas luces conflictiva.

Creo, señor presidente, que es necesario remarcar el concepto de defensa nacional desde todas las ópticas a los efectos de lograr armonizarlo para poder adecuar la legislación vigente y la que se dictará en la búsqueda de la solución de los problemas atinentes a la Nación. Pero claro está que en modo alguno debemos tomar al país como algo aislado —sobre todo en estas épocas— sino como una comunidad inserta en un continente y con una cosmovisión precisa.

Señor presidente: voy a hablar parcializando, desde mi óptica política. He advertido con mucho agrado cómo desde los distintos sectores se ha nombrado a un argentino que aún se pretende discutir, que todavía se quiere proscribir de la historia nacional. Me refiero al general Juan Domingo Perón, quien hace muchos años puntualizaba el concepto de Nación y el de la historia.

El nos hablaba del año 2000 lanzando a la República el gran desafío de: liberación o dependencia, que no es otra cosa que elegir entre la dignidad y la indignidad.

Es claro, señor presidente, que todos estamos caminando por los senderos del derecho. Así hemos escuchado brillantes exposiciones, aun contrapuestas en los conceptos, con citas de todos los autores que los señores senadores han buscado para alimentar sus posiciones. Creo que nos hemos acercado a una juridicidad casi perfecta, a una asepsia jurídica.

Creo que esa cobertura legal que buscamos a través de nuestra Constitución y también de las necesidades de la sociedad que va reclamando reglar esas condiciones está en el espíritu mismo de la República, en donde la defensa nacional adquiere su real dimensión.

Me voy a permitir leer, señor presidente, la definición que hiciera el entonces coronel Perón cuando pronunció una conferencia en el Colegio Nacional de la Universidad de La Plata el 10 de julio de 1944.

En esa ocasión Perón dijo: “Defensa nacional puede hacer pensar a algunos espíritus que se trata de un problema cuyo planteo y solución interesa o le incumbe únicamente a las fuerzas armadas de una nación. La realidad es bien distinta. En su solución entran en juego todos sus habitantes, todas las energías, todas las riquezas, todas las industrias y producciones más diversas, todos los medios de transporte, vías de comunicación, etcétera, siendo las fuerzas armadas únicamente —como luego veremos en el curso de mi exposición— el instrumento de lucha de ese gran conjunto que constituye la nación en armas”.

Esta definición pone de manifiesto el gran espectro que hay que tener en cuenta para que ello sea posible y en eso juegan factores externos e internos íntimamente ligados.

Juegan los factores externos originados en países que por múltiples razones lograron un desarrollo formidable y que tienen necesidad de seguir incrementando la riqueza a través de otros caminos que antes habían transitado cuando ocupaban militarmente los territorios.

Comenzó por los sutiles caminos de la economía, la ocupación de aquellos países que por una u otra razón no pudieron desarrollar sus aptitudes en el momento determinado.

Señor presidente: esto que muchas veces se trata de minimizar cuando hablamos de las multinacionales o de los monopolios lo sabemos perfectamente, porque nosotros, los argentinos, sentimos en carne propia el efecto de ese tra-

jinar económico a través de las subsidiarias de los grandes monopolios que manejan los mercados mundiales.

Señor presidente: esto es necesario destacarlo de una vez por todas para que terminemos con la falacia y la mentira de una educación enciclopedista como la que tenemos en la Argentina; para que el argentino sepa cómo es su país geográfica, económica y estratégicamente; para que conozca el valor de cada una de sus posibilidades de producción y para que también sepa de la historia que arranca con el aborigen y que, aún en nuestros días, no termina. Y no terminó todavía porque poco a poco se va plasmando el perfil del hombre argentino por la afluencia de razas de distintos lugares del mundo.

Es necesario conocer la geografía y sus consecuencias económicas, como también lo es saber de la historia para determinar el perfil de la Nación real y que podamos ir estructurando todo lo que en este momento nos desvela.

Debemos llamar a las cosas por su nombre, porque los hechos ocurridos en el pasado y que se vienen precipitando en el presente —con sus derivaciones para el futuro— son de tal magnitud que clausuran definitivamente el porvenir de la Argentina o exigen que entre todos podamos pelear por la dignidad de la Nación para hacerla políticamente soberana y económicamente justa.

Nosotros ya no podemos seguir con la mentira de todos los días, hablando de la crisis que nos aqueja por la suba desmedida de los artículos y por lo bajo de los salarios. Digo esto —y lo hago con todas las palabras—, porque el salario, la especulación y la usura son la consecuencia, el efecto de una situación que nosotros no le decimos al pueblo, especialmente los hombres a quienes transitoriamente nos toca ocupar cargos de conducción en la sociedad argentina.

La docencia política tiene que comenzar con la verdad y mostrar que nuestros próceres fueron hombres con virtudes y con defectos y no seres asexuados, de una blancura nivea. Muy por el contrario, fueron hombres como nosotros, con bondades y defectos, que se pusieron al servicio de la Nación. Sólo entonces comprendemos los episodios del pasado.

No adopto —repito— posiciones revisionistas que considero ridículas y absurdas. Simplemente, me anima un estricto espíritu de justicia para valorar a los hombres por lo que han hecho, y por la huella que han dejado en su tránsito por la vida de la República.

También es necesario que, como acabo de decir, los argentinos conozcan cómo es el territorio nacional, que terminemos con la ilustración

de otras partes del mundo mientras a nuestra población no se le enseña que tiene tres mil kilómetros de costa, que multiplicadas por las 200 millas significan una tremenda superficie de territorio que pertenece al país y cuya capacidad productiva los argentinos no sabemos.

En ocasión de discutir el problema limítrofe con Chile dejé sentado aquí —y dije que mis palabras iban a despertar más de una sonrisa— que nadie podía negar la existencia de petróleo en nuestra plataforma y en la Antártida, tanto en el mar de Weddell cuanto en el mar de Ross. Y ahora, a muy pocos años de ese debate que la historia juzgará, tenemos el anuncio oficial sobre la presencia de yacimientos al este de la Tierra del Fuego. Además por los convenios que los piratas ingleses han firmado, y que también nosotros hemos formalizado con potencias extranjeras, nos damos cuenta de la tremenda capacidad alimentaria de la fauna ictícola del Atlántico Sur.

Se tratan de minimizar también las condiciones estratégicas del sector austral, pretendiendo trasladarnos hacia el polo Norte, y yo pregunto, reiterando lo que alguna vez dije, cuál es la ruta posible y más segura para los grandes barcos en el transporte de cualquier tipo de material, incluso de hidrocarburos, si no son los pasos del sur. Nosotros los defendíamos para que sirviesen a la humanidad, cumpliendo el mandato sanmartiniano. Pero hemos sido atrapados nuevamente por las redes sutiles de la piratería internacional.

Pretenden darnos explicaciones para bobos cuando nos dicen que las maniobras aeronavales tienen por objeto disuadir, con el fin de que nosotros no volvamos a enojarnos con “nuestros patrones” ni a rebelarnos. Pero utilizan armamentos totalmente sofisticados, que sólo tienen las potencias que se están disputando el globo. Frente a nuestro propio territorio han circulado aviones y submarinos atómicos, y tienen emplazamientos misilísticos en esa gran base que son las Malvinas.

Y nosotros pretendemos restarles la importancia que realmente tienen en la estructuración del mundo del futuro, en esta controversia tan absurda como cruel entre dos colosos con ideologías distintas. No sólo se da aquí el choque ideológico sino que es un choque de intereses. Debemos advertir a los argentinos, en vista de que el Tratado Antártico vencerá en 1990, que éste puede ser un paso más para desplazarnos del continente blanco, donde tenemos legítimos derechos por tradición, por estructuras geológicas y por proyección de país.

Esto es lo que debemos determinar en una ley de defensa. Pese a considerarla totalmente in-

completa, voy a votarla nuevamente porque aspiro a que comencemos a tener algo del andamiaje que necesita la Nación para presentarse con real dignidad, y que los argentinos entendamos de una buena vez, la valoración que debemos tener de nuestro suelo.

No quiero encerrarme en el estrecho marco de los ámbitos geográficos porque nosotros pertenecemos a un continente, o a un subcontinente, y ése era el espíritu que animó a los hombres de la Independencia.

Por eso, reclamo a los docentes y al Ministerio de Educación para que alguna vez enseñemos y destaquemos la Declaración de la Independencia de 1816, que comienza diciendo: "Nos, las Provincias Unidas en Sudamérica", porque existía el concepto de la patria continental; para que enseñemos de una vez que la flota inglesa en 1806-1807 no se perdió y vino por casualidad a recalar en las playas de Quilmes; para que determinemos que el bloqueo anglo-francés fue nada más y nada menos que la amenaza por resistirnos al sometimiento; de modo que algún día rindamos el homenaje real y sincero a aquellos que defendieron la dignidad de la Nación en el Paso de Obligado, y a que, aun instituido como Día de la Soberanía, no damos al hecho la relevancia que realmente tiene.

Todas estas cosas, señor presidente, convergen hacia un punto donde realmente entra en juego esta libertad que debe articularse en todos los campos para determinar el proyecto de país que nosotros queremos; el proyecto de país para los hombres argentinos y también para nuestros hermanos americanos y para todos los hombres del mundo que a través de diversas gestas en nuestra historia han puesto de manifiesto el respeto y la solidaridad.

Ese proyecto de país no es privativo de una agrupación política o de algún ciudadano; lo tenemos que diagramar entre todos porque la Nación es de todos. De esta manera, podemos volcar todas nuestras inquietudes y realizar un aporte sincero para lograr el país que queremos para servir a la humanidad toda.

No está de más recordar todos estos aspectos que fueron ocultados en un cono de sombra en la historia que escribieron los vencedores. El viejo Virreinato del Río de la Plata, el más pobre de la corona de España, ganó guerras desde los albores de la Independencia pero siempre perdió generosamente los territorios, porque lo que ganamos en el campo de batalla a costa de nuestra sangre fue entregado al imperio por los doctores en las tras-

tiendas de las negociaciones espurias. Esto se produjo por la incomprensión, tal vez la inmadurez, de los pueblos y trajo como consecuencia la atomización de América.

Tenemos que determinar en ese proyecto de país que queremos, señor presidente, leyes como la que estamos considerando y que comprendan todos los aspectos que hacen a la República. No nos vengan con el cuento de Occidente y de Oriente; no nos vengan con más cuentos que no hacen sino confundir y engañar al hombre argentino. No existe nada más, señores senadores, que el Norte y el Sur, o países industrializados, colonialistas, monopólicos que viven a costillas de los pueblos a los que no han dejado desarrollar sus aptitudes y a los que denominan de acuerdo con la jerga técnica "países en vías de desarrollo", entre los que estamos nosotros.

Sentimos la humillación de dicha situación. Nosotros, los hombres que estamos en la función pública, no hemos explicado concretamente todavía desde las esferas gubernamentales o aun desde la oposición por qué motivo existe en nuestro país la crisis actual, donde los salarios conducen a una subalimentación, y no pueden absorber los gastos para atender la salud y educar a los hijos.

¿Cómo le vamos a explicar al hombre de campo, al hombre que trabaja todos los días y que confía en quienes eligió, que mientras alguna vez tuvimos sesenta y tres millones de cabezas de ganado vacuno —sumado al ovino, equino, caprino, etcétera y todo aquello que conforma el espectro alimentario—, cómo le vamos a explicar, repito, por qué no puede acceder a comer la carne, que es la base de nuestra dieta? ¿Cómo le vamos a explicar al hombre argentino que alguna vez llegamos a producir cuarenta y cinco millones de toneladas de cereales y ahora no tiene el acceso fluido para adquirir los alimentos mínimos requeridos para una dieta diaria?

Sr. Solari Yrigoyen — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Sánchez — Sí, señor senador.

Sr. Solari Yrigoyen — Quisiera preguntarle en qué año llegamos a tener sesenta y tres millones de cabezas de ganado vacuno.

Sr. Sánchez — Hace varios años.

Sr. Solari Yrigoyen — Porque en las estadísticas que tengo nunca superan los cincuenta millones de cabezas.

Sr. Sánchez — Con el permiso de la Presidencia, admito que quizá esta cifra que he dado puede ser errónea, pero entre cincuenta y pico y sesenta y dos no hay mucha diferencia. Atribúyalas a la no declaración en censos o para l

D. G. I. De manera que estamos siempre dentro del conjunto de cabezas de ganado, que si las dividimos por el número de habitantes, arrojarían una cifra de dos cabezas por habitante.

Tal vez se pueda decir que me estoy apartando de la cuestión. No creo que sea así; quería llegar a esto porque hace a la defensa nacional, hace a que un país pueda caminar o no y, fundamentalmente, señor presidente, que pueda caminar como un país libre y soberano, que pueda plantarse —como muchas veces lo hizo— frente a los poderosos para exponer sus razones y no doblar la cabeza frente a los inspectores que vienen cada tres meses a certificar si hicimos buena letra o no con el manejo de nuestra economía conforme a lo que nos exigieron.

Por eso necesitamos un proyecto para el país, porque a mi juicio —reitero, a mi juicio— aquí caducó un proyecto de país que tiene sólo dos chispas en la historia: la presidencia popular de Hipólito Yrigoyen y el gobierno de Juan Perón; más allá de todos los errores que ya los hemos asumido, tendrán que reconocernos el sentido nacional y popular.

Digo estas cosas, no para los señores senadores, porque todos los hombres públicos las conocen, sino que quiero dejar impresas estas modestas palabras de advertencia para los jóvenes de mi patria, sin el menor ánimo de hacer proselitismo político. Porque en esa época, señor presidente, durante ese gobierno se cometieron sin lugar a dudas muchos errores, pero fundamentalmente —reitero— hubo un proyecto serio de país concretado en el primero y segundo plan quinquenal. Se creó por primera vez en el país la Secretaría de Planeamiento que luego da lugar al Ministerio de Desarrollo, el Consejo Federal de Inversiones (CFI), etcétera, y mal o bien existió un plan con fines determinados; y pregunto aquí, señor presidente, si en esa época no tuvimos que traer técnicos de Europa, porque aquí no había para que pudiesen prospectar el territorio nacional porque las carreras de geología y de ingeniería de minas, por ejemplo, estaban prácticamente en sus comienzos; aún quedan muchos técnicos extranjeros que formaron sus hogares y se afincaron en la Argentina.

Quizás esa fue una de las tareas más importantes que realizó el gobierno, que trajo como consecuencia saber que tenemos una industria extractiva para poder montar realmente la industrialización del país, no sólo para hacer buenos trajes sino para la industria pesada, que nos permita tener entre nuestras manos la herramienta liberadora para no depender de nadie. En la amplitud de nuestra geografía tenemos todas las formaciones geológicas y todos los ma-

teriales que necesitamos para hacer esa efectiva industrialización en mayor o en menor volumen.

Tampoco pretendo encerrarme dentro de los límites geográficos. Quiero complementarme con las otras naciones americanas, con los hermanos que padecen exactamente lo mismo que nosotros, con aquellos que tampoco tienen una explicación para la monstruosa deuda externa que ha hipotecado nuestro futuro, por la usura y los cipayos que actúan desde adentro.

Sueño con que alguna vez sea realidad la canalización del Orinoco y del Amazonas, para que se puedan enlazar con el Paraná y así desde el Caribe hasta el río de la Plata podamos transportar nuestros hombres y las riquezas que podamos intercambiar.

No quiero sólo comprar el gas boliviano como un acto de confraternidad hacia esa nación sino que quiero complementarme con ellos para el desarrollo siderúrgico a través de El Mutón; quiero complementarme con los chilenos para tener el cobre que América necesita y con los peruanos y los ecuatorianos, etcétera, para que no nos falte absolutamente nada, ya que tenemos grandes reservas de hidrocarburos y gasíferas y todo tipo de material que permiten el desarrollo de una gran nación.

Vuelvo entonces al principio. Tenemos que terminar con la mentira; tenemos que hablar de una buena vez y discutir sin entrar en sectarismos. En alguna oportunidad expresé aquí que tenemos que levantar las barricadas de los cementerios para hablar sinceramente entre nosotros, para no dividirnos entre peronistas, radicales o socialistas sino para que en esa tarea podamos estar todos juntos.

De esa manera, con el objetivo claro, podremos comenzar a marchar y allí determinar, como lo estamos haciendo, el rol que le caben a las fuerzas armadas; como fuerza de disuasión y defensa porque nadie podrá imputarnos a través de nuestra historia que tuvimos actitudes agresoras, o porque siempre tenemos que estar esperando el golpe artero de intereses ideológicos o fundamentalmente económicos, que son los que generan las ideologías.

Nosotros sabemos que hemos sido agredidos ideológica y económicamente a través de los tiempos y es así como se crean situaciones de conmoción interna que pueden prosperar, porque las condiciones socioeconómicas lo permiten frente a la injusticia social. ¿Cómo no van a prosperar ciertas ideas, por más descabelladas que sean, cuando son planteadas a un hombre con hambre, a un hombre que ve que no puede sostener a sus hijos y que a veces o casi siempre busca la salida en el alcohol? ¿Quién

paga al final toda su irritación? Su mujer y sus hijos cuando vuelve borracho a su casa.

Pensemos, ¿qué ocurrirá si en lugar de eso, dotamos a la comunidad toda de medios concretos, de la habitación en donde se pueda proteger a la familia, en donde se pueden concebir dignamente a los hijos y donde haya seguridad para el futuro; cuando, rompiendo los lazos de los monopolios de la farmacopea, podamos brindar la medicina que necesita la salud de la población; cuando podamos, por fin, señor presidente, realizar concretamente —no tan trabajosamente, como se viene haciendo— la educación en todos los niveles, para todos los argentinos, porque entonces con la cultura libran desaparecido los esclavos, ya que un hombre ilustrado, culto, no puede ser manejado por otro hombre.

Tenemos, señor presidente, que entregar la tierra al labriego para que sea propietario y se realice.

Fíjese, señor presidente, cómo tan simplemente podemos destruir toda esta maquinaria de falacias y de mentiras con los hechos concretos de toda la vida, de todos los días que vive el país.

Es hora de terminar con la declamación, de ir a los hechos, de administrar la pobreza, de definir si vamos a pagar la usura o vamos a comer.

Porque eso también es tan simple. De este lado, está nuestra familia, con todas sus necesidades y, de este otro lado, nuestros acreedores.

Debemos guardar el prestigio de la República, el que se ganó a través de todos los tiempos. Pero también debemos decidir si pagamos la usura y no comemos o, si por lo menos, sostenemos nuestras necesidades y buscamos alguna solución para estas deudas que faltamente tendremos que pagar, y que quienes las pagan son los que no tuvieron la culpa de la hipoteca del país, y quienes nos cobran son los mismos que nos endeudaron.

Esto, señor presidente, que parece una digresión en el tema específico, no queda nada más que en eso. Así parece. Este es el fondo de la cuestión; hemos llegado al final de un proyecto de país, como dije y remarco.

Debemos buscar y articular los medios para remozar las instituciones, liquidar otras que son caldo de zánganos, terminar con la burocracia y volver al sendero del trabajo. A la vez, para que ese trabajo fructifique en los salarios adecuados al esfuerzo que se realice.

Entonces, debemos denunciar a todos aquellos que nos hablan de libertad, de democracia y de derechos humanos, para ocultarnos la realidad del país.

Yo pregunto a todas las potencias coloniatistas que subsidian su producción si no están atentando contra todos los países que producen y que no pueden vender.

Hemos tenido ocasión de hablar varias veces con los directivos del Mercado Común Europeo; al respecto el señor presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el señor senador Mazzucco, es testigo de estas conversaciones, en las que nos han mirado con gran indiferencia y hasta con una insolencia insoportable y en donde, en síntesis, nos han dicho: "Arréglese como puedan; si quieren que les compremos, les compraremos a tanto. Si les conviene bien y si no, también.

Esta es la realidad que tenemos que desnudar a través de todos estos proyectos que vamos a ir debatiendo; pero tendremos que ir desnudando este escarnio escudado detrás del consabido cuento de la democracia. La democracia será efectiva en la Argentina cuando todos los resortes del Estado no permitan que haya hambrientos, indigentes, niños abandonados; argentinos que no pueden curarse ni educarse.

Por eso debemos valorar este momento. Y debemos valorarlo por todo lo que nos costó. La democracia, que estamos tratando de consolidar y de que surta su efecto totalizador, no es sino el esfuerzo, la sangre y el sacrificio de un pueblo.

A veces me causa irritación cuando digo que desde el partido gobernante, algunos funcionarios hablan como si fuesen los dueños de la democracia. Ellos tienen la obligación de cuidar la institucionalización del país como primer paso para desarrollar sus aptitudes y para que todos pongamos nuestro esfuerzo y nuestras ideas.

Acá no podemos hablar de clase trabajadora, empresaria o de otro tipo. Nosotros, los peronistas, sostenemos que hay una sola clase: los hombres que trabajan. Y al hacer referencia a ellos nos referimos a la actividad productiva, ya sea primaria, industrial o profesional.

Sólo así podremos recuperar al país y creo que en muy poco tiempo lo haremos porque tenemos condiciones; sólo nos falta armar la legislación que permita el desarrollo de toda nuestra capacidad productiva.

Ruego a mis colegas que me disculpen por la vehemencia con que me he expresado. Pero más que vehemencia es la pasión argentina que me anima luego de muchos años de pelear por esto y de ser consecuente con los que se fueron. Y cuando yo también me vaya quisiera llevar grabada en mis pupilas la visión de la

posibilidad cierta de la gran Nación Argentina inserta en la gran nación americana.

Las fuerzas armadas son la síntesis del pueblo para profesionalizarse en el uso —desgraciadamente— de las armas, para evitar cualquier ataque desde adentro o desde afuera. Pero reitero que los ataques desde adentro no son sino alimentados desde distintos focos exteriores.

Todo esto se produce porque nos quieren manejar haciéndonos el cuento del país joven. Pero precisamente, por ser un país joven tenemos nuestras posibilidades intactas.

Si nosotros caemos en la trampa dialéctica del malabarismo de palabras y de conceptos huecos, no tendremos la menor posibilidad de consolidarnos como nación libre y soberana. Porque hasta esto es producto de la insidia de los medios de comunicación, que nos venden imágenes distorsionadas y desvían nuestra atención.

Digo esto porque cuando fuimos agredidos por Inglaterra en una cruel guerra, aunque sea subrepticamente tratábamos de mirar la boda del príncipe heredero del trono, en esa otra expresión de la más tremenda estupidez humana, que es tener monarcas; porque yo, señor presidente, no puedo concebir a mi Argentina con un rey.

En fin, allá ellos. Pero quiero señalar hasta dónde llega la sutileza del imperialismo, de los monopolios, que también se traduce en las noticias, en la moda, en todos los actos de nuestra vida. Tratamos de imitar a aquellos que se han erigido, porque se les dio la gana, en los conductores o en los zares de la moda. Y así es, señor presidente, que no nos queda más recurso que comprar estas cosas, con estas leyendas del dueño de la casa.

Hemos caído en un estado de tilingüería que se contradice totalmente con el espíritu argentino que campea a través de todas las épocas, con sus errores y sus aciertos. Salimos orgullosos a lucir las camisas, los zapatos, las medias o lo que fuera, que tienen la marca de tal o cual casa. Hasta esta ocupación se ha realizado en nuestro país. Esto es lo que tenemos que decir, y coincidimos con el señor presidente de la República en que es necesario reformular todas las propuestas posibles para recuperar la dignidad que han entregado, y para mentalizarnos nacional y popularmente, conscientes de nuestro destino de continente. Y esto no implica transformarnos en potencias con apetitos o afanes colonialistas, ya que la misión argentina es servir al hombre, como tan bien lo señalara San Martín desde el Perú.

En función de todo esto es que tenemos que estar en defensa. Se trata de una

cosa muy importante: determinar la función de las fuerzas armadas. Yo creo que todas las discusiones sobre su participación en los conflictos internos están de más. Hemos tenido la desgracia de que algunas veces se haya abierto en nuestro territorio en lo que va del siglo un frente de guerra, frente que fue conjurado por las fuerzas armadas. Yo me pregunto qué habría ocurrido si ese frente de guerra se hubiese expandido y hubiese sido reconocido desde el exterior.

Sabemos que detrás de eso está la mano de potencias extranjeras. Sabemos que nuestra América tiene conflictos en varios países hermanos, producto de un proceso histórico distorsionado y de privilegios. Y la reacción es explicable, aunque de ninguna manera justificable.

Tenemos que caminar, reitero, hacia el proyecto grande de país. Tenemos que tratar de recuperar el tiempo perdido, sin vanagloriarnos porque ahora produzcamos un par de aviones de distinto tipo, siendo que tenemos en el aeroparque dos prototipos de aviones a reacción cuya construcción se cortó en 1955.

Y todavía andan allí, tirados en el campo porque ya no sirven, los viejos tractores Pampa, y todavía caminan por las rutas del país las viejas motos Puma. Así se empezó a montar la industria automotriz y felizmente se pudieron superar los escollos para seguir la marcha hacia adelante, aunque algunos, como la Magirus-Deutz y la Mercedes Benz, se fueron al Brasil para venderlos desde allí los chasis de camiones y de ómnibus.

Se habían unido esos esfuerzos al afán de desarrollo tecnológico que experimentaba nuestro país. Así tuvimos los primeros cohetes que, si bien no eran teledirigidos, se lanzaron en mi provincia desde la base área del CELPA. Como otras naciones, también nosotros empezamos con el desarrollo de una política atómica y mi provincia, La Rioja, es la primera que entrega materiales nucleares al país.

¿Dónde quedó todo aquello? ¿O acaso debemos resignarnos a que el avance logrado gracias a nuestros técnicos, con sentido nacional sea puesto a la cola del desarrollo de otras naciones? No nos olvidemos de que arrancamos todos juntos en ese proceso, exceptuando a los Estados Unidos y a Rusia.

Cuando vemos todo este panorama, señor presidente, creo que tengo razón cuando digo que ha caducado ese proyecto de país y que el odio, que es más que el resentimiento, puesto al servicio de la Internacional económica o ideológica, fue el causante del freno impuesto al desarrollo

de la Argentina. Y así estamos ahora, señor presidente, después de treinta años.

Para terminar con estas ideas no del todo bien hilvanadas que he pronunciado, que espero sirvan a los señores senadores, entiendo que es necesario predicar estos conceptos en todos los lugares de la patria para tratar de rescatar a una juventud desalentada y presa de la incertidumbre. Es necesario decirle que nos quedan sólo dos caminos: el del sacrificio y la lucha para tratar de ser una nación real o el de la resignación por el cual seremos sirvientes y satélites. Este es el fondo y el espíritu que, a mi juicio, debe tener una ley de defensa nacional.

Sr. Presidente (Cass). — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Amoedo. — Hemos escuchado con atención, señor presidente, los discursos de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Tomando en cuenta dichas expresiones, voy a tratar de situar la discusión del proyecto en la parte referida a la materia que estamos considerando.

Es para mí una gran emoción poder presenciar el desarrollo de este debate que tiende a la modificación de una ley de defensa nacional autoritaria realizada, con recientes modificaciones, por los distintos regímenes militares que ha padecido la República.

No estamos de acuerdo, y así lo han señalado los distintos oradores que han intervenido en este debate, con determinados artículos ya sea en forma total o parcial. Pero lo cierto, lo importante, es que la Argentina tendrá una nueva ley de defensa que es el producto del consenso de quienes representan la voluntad popular y no solamente la de los uniformados de turno que consideraron a la defensa nacional su patrimonio exclusivo.

Señor presidente: a las objeciones formuladas por los señores senadores por Salta y por Corrientes sumaré la mía en el momento de la discusión en particular, con respecto a los artículos 4º, 5º, 15 y, especialmente, al artículo 46.

Luego de haber expresado mi conformidad con el esfuerzo realizado por la Comisión de Defensa Nacional para vertebrar este dictamen de comisión, debo expresar que como toda obra humana no es perfecta sino perfectible. No hay ninguna disposición o doctrina que permita que una ley no tenga un carácter imperativo. No se puede decir en el articulado de la ley que en el futuro se dictarán tales y cuales leyes, pues —repite— la ley es coactiva. En este caso del proyecto en debate se dice que en el futuro se crearán las leyes que enumera el artículo que acabo de mencionar. No pueden enumerarse leyes a

dictarse porque ninguno de nosotros sabe si los integrantes del futuro Congreso, luego de las elecciones, coincidirán, o no, con los propósitos que nos han guiado a cada uno de nosotros cuando aprobamos este proyecto de ley que hoy consideramos.

Otra de las cosas que me ha preocupado una vez más es la invasión del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones legislativas del Congreso.

En la Comisión de Defensa Nacional existe hace un año un proyecto de creación de la Central Nacional de Inteligencia, presentado por quien habla y aprobado en las conferencias mantenidas con los señores jefes de las fuerzas armadas, quienes señalaron su expreso consentimiento en este sentido. Pero cuál no sería mi sorpresa cuando el Poder Ejecutivo el 3 de noviembre de 1987 dicta un decreto por el que se crea la Comisión de Inteligencia, igual al dictado por el general Jorge Rafael Videla.

Por otra parte, países que han mantenido guerras y que han triunfado o han sido derrotados cuentan con estructuras constituidas por organismos de seguridad, denominadas comisiones nacionales de inteligencia o consejos de seguridad, como en los casos de Francia, Italia y Estados Unidos.

Tal como lo sostuve en mi proyecto y como lo ha reconocido el señor senador por La Pampa, doctor Berhongaray, afortunadamente el proyecto que consideramos también establece que en la Central Nacional de Inteligencia o en el Consejo de Seguridad, como se lo quiera llamar, debe estar representado el Parlamento. En el proyecto que consideramos se dice que serán los presidentes de cada una de las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado y agrega dos senadores más: uno por la mayoría y otro por la primera minoría.

Así se contempla, señor presidente, lo que surge de las legislaciones italiana y francesa, con la única diferencia de que en la primera el número de miembros del Parlamento es superior al que establece el proyecto al que me estoy refiriendo.

Debo expresar, señor presidente, que la Central Nacional de Inteligencia, de la que dependerá el SIDE, es más que un problema militar, una cuestión política.

(Lee) "Señor presidente: en los últimos tiempos la opinión pública y el gobierno nacional en sus tres poderes se han visto sorprendidos y conmovidos por una serie de irregularidades que van desde la verdad a medias —que por ello deja de ser tal—, a hechos de suma gravedad por su carácter delictivo y rayanos en esta calificación que pusieron en peligro la estabilidad

democrática, teniendo como protagonistas principales a los servicios de inteligencia en su más amplio espectro. Ello ha puesto en duda la credibilidad de los mismos.

Concretando, daré como ejemplo por su resonancia, los secuestros extorsivos del industrial Pescarmona y del empresario Sivak, así como el caso del ex agente de los servicios Guglielminetti, en los cuales se vieron involucrados los servicios de inteligencia con ecos tales que sus consecuencias son aún impredecibles y que echaron un cono de sombra sobre la eficacia y pureza de procedimientos de los mismos a grado tal de hacer estremecer hasta los cimientos, ante la probanza de hechos espurios y manejos equívocos, a organismos, personalidades y ministerios del Poder Ejecutivo nacional, quedando al descubierto algo sospechado y advertido —aunque no escuchado— por la oposición desde tiempo ha, en el sentido de que en los servicios existen marginados enquistados en los mismos. Sabido es que una porción de impureza, por mínima que sea, corrompe la más noble intención, rebajándola al nivel de su propia degradación. Ello acaeció en la comunidad informativa de la República y si de algo debemos felicitarnos es de que la realidad haya surgido en toda su crudeza y que las palabras sensatas hayan hecho mella en los poderes del Estado.

La desorganización que presentan los servicios de inteligencia, su ineficiencia, su falta de coordinación y sus nefastas consecuencias son demostrables, sin ahondar en profundidad en el tiempo.

Ello surge trágicamente para la República en la guerra de las Malvinas con Gran Bretaña, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Ninguno de los servicios de inteligencia de nuestras fuerzas armadas en sus hipótesis de conflicto pudo trazar las coordenadas a que estaban obligados para pretender un objetivo de victoria y, por el contrario, su incoordinación, impericia y negligencia grave nos impulsó a una guerra que trajo como consecuencia inmediata que nuestras tropas enfrentaran el combate en condiciones de inferioridad, y la mediata, fue la derrota.

Que algo está podrido en Dinamarca surge claramente debido a la desorganización reinante en los servicios de inteligencia que pululan inorgánicamente en todo el cuerpo de la Nación con graves falencias que atentan contra su eficacia y organicidad al actuar desarmónicamente y en compartimientos estancos. Tenemos así que del Ministerio del Interior dependen los servicios de Policía Federal (seguridad federal) y los de las policías provinciales. La dispersión es total

y la desorientación, como resultas de ello, no es menor.

Es tal el número de fuentes directas e indirectas que componen la comunidad informativa, a grado tal de ser dificultoso hasta para el más informado señalar, de manera precisa, cuál es la totalidad de la misma así como el número de agentes, que se calcula en algo más de tres mil.

Estoy cierto de que el actual gobierno recibió una herencia sin beneficio de inventario. Ha sido heredero forzoso de largos años de autoritarismo y de dictaduras que fueron distorsionando el objetivo básico de la inteligencia. Pero no menos cierto es que el actual gobierno no supo o no pudo enfrentar la realidad.

El advenimiento de la democracia no impidió que quedaran resabios de estas nefastas etapas de la historia argentina enquistados en los diversos servicios de inteligencia. Súmase a ello la inexperiencia o ingenuidad del gobierno en la materia, que explica lo acaecido pero jamás lo justifica, y tendrán con claridad el cuadro de los servicios de inteligencia muchos de cuyos componentes han volcado sus afanes, no a defender los valores de la Nación para los que fueran convocados sino espurios intereses personales o de grupos organizados para delinquir.

Los ecos de los casos ya mencionados demuestran que es preciso reorganizar los servicios y la SIDE que los agrupa, dado que al margen de la buena fe y voluntad de la gran mayoría de sus componentes surge con carácter de imperiosa esta necesidad de la que —parafraseando a lord Keynes— podemos decir que en los servicios de inteligencia se puede hacer cualquier cosa menos evitar las consecuencias. La reorganización debe ir mucho más allá del cambio de un titular por otro. Debe ser de fondo y no meramente de forma, estructural y no circunstancialmente coyuntural.

Debemos tener presente como bien lo señala el ordenamiento legal del Servicio de Informaciones para la Seguridad Militar (SISMI), de Italia, que en su parte segunda nos dice: “que el error de evaluación en el campo de la información puede conducir a la actualidad política a decisiones no pertinentes a los fines de la defensa del Estado”. Para evitar ello no sólo es dable considerar el trabajo de información recogido, valuación e interpretación de la misma sino, y sobre todo, el profesionalismo, la experiencia, la cultura, el rigor intelectual y la fuerza moral, como cualidad peculiar del personal de los servicios de informaciones”.

Los grandes problemas del país, considerados en la perspectiva del porvenir, son dinámicos y en su evolución, no se los puede restringir a la

circunstancia y competencia del gobierno cuando menos a la de un Ministerio o Secretaría de Estado. Debemos legislar para hoy pero con miras al mañana.

La oposición, ergo gobierno en pleno ejercicio, procuró buscar la cohesión en sus actos al considerar que ello es uno de los requisitos de la autoridad en una democracia. Es por ello que nos ocupamos del problema que hoy, de manera ecuménica, nos preocupa en la certeza de que no solamente nos asiste la razón sino el hecho de estar en la aptitud de ofrecer soluciones al desorden actual de los servicios de inteligencia en la República.

No es una solución surgida por parte de birli-birloque sino, por el contrario, es producto de una idea madura a través de la experiencia vivida por la República y el análisis de la legislación comparada, verbigracia, de los Estados Unidos de América (CIA) y del Servicio de Información por la Seguridad Militar (SISMI), de Italia, a través de la ley 801 del 24 de octubre de 1977, denominada "Institución y Ordenamiento del Servicio de Información y la Seguridad y Disciplina del Secreto de Estado", legislaciones ambas que de una manera u otra establecen el control parlamentario.

La ley italiana a través de su artículo número 11 determina que el gobierno semestralmente remitirá al Parlamento, a través de una relación escrita, un informe sobre la política informativa, la de seguridad, y el resultado obtenido.

Un comité parlamentario constituido por cuatro diputados y cuatro senadores nombrados por los presidentes de cada Cámara sobre la base de la proporcionalidad, ejercerá el control sobre la aplicación del principio establecido por la ley.

Si a la legislación comparada nos debemos referir, mal podemos eludir —aunque más no sea en una muy prieta síntesis— a la comunidad informativa de los Estados Unidos de América. La importancia del país al que nos referimos en el concierto internacional de las naciones y los consecuentes efectos de todo su accionar en las relaciones internacionales obvian cualquier comentario al respecto y justifican de por sí esta mención.

La Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos se establece por Acta de Seguridad Nacional en el año 1947. Se halla bajo la égida del Consejo de Seguridad Nacional habiendo sufrido modificaciones a través de su tradicional sistema de enmienda. Las actuales funciones fueron establecidas por orden ejecutiva número 12.333 del 4 de diciembre de 1981 y por otras leyes, regulaciones y directivas.

El director de la Seguridad Nacional es el director de la CIA, a la vez que miembro del gabinete presidencial. Es el principal portavoz de la agencia y de la comunidad informativa.

La CIA, bajo la dirección del presidente de los Estados Unidos o del Consejo de Seguridad, tiene como funciones, entre otras, las siguientes:

a) aconsejar al Consejo Nacional de Seguridad en lo atinente a las actividades de la inteligencia de los departamentos del gobierno y agencias de la seguridad nacional; b) hacer recomendaciones al Consejo Nacional de Seguridad para la coordinación de actividades de inteligencia de los departamentos y agencias del gobierno en lo relativo a la seguridad nacional; c) evaluar la inteligencia relativa a la seguridad nacional y controlar la apropiada distribución de la misma; d) recoger, producir y distribuir inteligencia exterior y la interior del país coordinada, esta última con el FBI; e) recoger, producir y distribuir inteligencia exterior concerniente a la distribución y tráfico de drogas; f) conducir las actividades de la contrainteligencia fuera de los Estados Unidos y, sin asumir ni efectuar función alguna de seguridad interna, conducir la contrainteligencia interna en coordinación con el FBI, de acuerdo con normas aprobadas por el director de la CIA y el procurador general; g) conducir actividades especiales aprobadas por el presidente de los Estados Unidos con intervención del Consejo de Seguridad Nacional y del procurador general. Ninguna agencia, excepto la CIA (o las fuerzas armadas de los Estados Unidos en tiempo de guerra declarada por el Congreso o durante algún período cubierto por un informe del presidente al Congreso bajo los poderes de guerra que determina la resolución número 87), puede conducir actividad especial alguna, a menos que el presidente determine que otra agencia es más apropiada para arribar a un objetivo particular; h) la agencia no reviste carácter de policía y carece de poder para aplicar la ley y de autoridad para el ejercicio de funciones de seguridad interna.

Los servicios de inteligencia de los Estados Unidos supieron del escándalo, del avance de la organización sobre los derechos ciudadanos y de las medidas correctivas que se adoptaron para contrarrestarlos. Vietnam y Watergate, son dos hitos de triste recordación en los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.

Las investigaciones llevadas a cabo por el Senado respecto a las actividades de la CIA y del FBI le valieron a éste —a mediados de 1970—, la reputación de ser un duro y severo

investigador de ambos organismos de ejecución.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la CIA y el FBI habían sido excluidos de las revisiones parlamentarias, incluyendo las sesiones referidas al presupuesto de "este tipo de agencias".

Pero en el año 1975 un comité especial del Senado creado para estudiar las operaciones gubernamentales con respecto a las agencias de inteligencia reveló que la CIA, entre otras violaciones legales, había utilizado venenos mortales, violado correspondencias de ciudadanos americanos y conducido una vasta red de espionaje doméstico violando, de esta manera, el acta constitutiva de estas agencias.

Este comité, en la primavera de 1976 produce un informe mediante el cual hace saber que desde la Segunda Guerra Mundial, tanto las administraciones republicanas como las demócratas habían usado al FBI para el control secreto de ciudadanos americanos.

El Senado, el 7 de febrero de 1973, inicia la investigación del *affaire* Watergate al aprobar por 77 votos contra 0 la resolución de crear un comité sobre actividades de la campaña presidencial (era Nixon); su fin era investigar el grado de ilegalidad de algunas de esas actividades durante la campaña presidencial de 1972.

Desde 1955 hasta 1973 las investigaciones del Congreso sobre la materia, eran llevadas con discreción y mínima publicidad. Pero la campaña periodística y las revelaciones del comité Watergate conmovieron a la opinión pública y a los tres poderes, creando una de las crisis institucionales más severas que recuerda la historia americana. Su resultado es conocido: el presidente Richard Nixon se vio obligado a dimitir.

Durante la administración del presidente Carter, éste firma el 24 de enero de 1978 la orden del Ejecutivo número 12.036, mediante la cual se reorganizaba toda la comunidad de inteligencia. Se abría una nueva etapa en que, so pretexto de la defensa de los derechos humanos, se restringen actividades de inteligencia en particular que hacen a la seguridad nacional y a la tranquilidad ciudadana en general. Como todo extremo tuvo sus consecuencias negativas.

En el período 1975-1976 se dieron a conocer a la opinión pública, a través de la prensa y de los comités parlamentarios varios informes respecto de los abusos cometidos por los servicios de inteligencia. Se emite una orden prohibiendo expresamente algunas de las actividades ilegales encubiertas llevadas a cabo por los servicios de inteligencia, particularmente la CIA, de las cuales habían sido acusados en años anteriores. La

cionarios gubernamentales antes de dictar prohibiciones procurando con ello evitar que las agencias de inteligencia violaran los derechos constitucionales dentro del país e interfirieran en la política exterior de los Estados Unidos.

La orden centralizó la responsabilidad en el director de la CIA, otorgándole poder para elaborar estimaciones sobre el presupuesto para la inteligencia, acciones de inteligencia y producción de inteligencia. Pero la orden estableció que sería el secretario de Defensa quien tuviera el control operativo sobre el área de reconocimientos y de funciones de comunicación, los cuales cubren la mayor parte presupuestaria de la inteligencia.

La orden prohibió el uso de cuatro técnicas para recoger información: vigilancia electrónica, monitoreo televisivo, búsquedas físicas y control postal. Estas técnicas sólo podrán utilizarse si son autorizadas por el presidente y el procurador general, y ello en casos específicamente determinados.

La orden prohibió la participación por parte de los agentes de inteligencia en las organizaciones internas, a no ser que se sospechara de organizaciones compuestas mayoritariamente por extranjeros que estuvieran actuando en favor de otro país.

En 1978 se dicta el acta de control de inteligencia que puede considerarse como uno de los logros más importantes obtenido por el Congreso estadounidense. A través de ella, el ciudadano americano inocente obtiene la protección contra la invasión a su privacidad por parte de las agencias gubernamentales de inteligencia.

El advenimiento de la administración Reagan da un vuelco a esta situación al bregar y obtener un fortalecimiento de los servicios de inteligencia en sus dos grandes objetivos: interno y exterior. La seguridad nacional una vez más predomina sobre los derechos del ciudadano sin que estas palabras signifiquen avasallamiento de los mismos.

Los servicios de seguridad tienen, a través del Poder Legislativo americano, al depender su presupuesto de la aprobación, quita o negociación de partidas, un freno poderoso que hace realidad el juego democrático de los pesos y contrapesos.

Los actos del comité se hallan cubiertos por el secreto. Esta necesidad de control parlamentario que planteo en mi proyecto de ley creando la Central Nacional de Inteligencia, responde a nuestro ordenamiento constitucional, no violenta disposición alguna y, *a contrario sensu*, fortalecerá los servicios de inteligencia al reforzar los

controles mediante la actividad parlamentaria, permitiendo el control del pueblo a través de sus representantes, los señores diputados, y fortaleciendo el principio federalista, siempre proclamado pero raramente efectivizado, a través de los señores senadores. A su vez —y quizá sea ella una de las facetas más significativas— permitirá romper con la hegemonía, en lo que hace a la comunidad informativa, de las fuerzas armadas, y esto no para imponer otra hegemonía de distinto signo, sino para hacer realidad un esfuerzo mancomunado del gobierno, comunidad política y fuerzas armadas en pro del bien común.

Surge a través de lo expuesto la necesidad de centralizar la tarea de inteligencia a través de esta Central, criterio sostenido por el secretario de Inteligencia doctor Facundo Suárez y lo previsto en el artículo 8º del proyecto de ley de defensa nacional, poniendo así tan delicada tarea al servicio espurio de hombres o sectores. Ellos contarán con control parlamentario a través de dos representantes de cada Cámara designados por las respectivas comisiones de Defensa Nacional por partes iguales para el oficialismo y para la oposición.

Los servicios de inteligencia deben observar y controlar el accionar de potenciales enemigos del país y jamás inmiscuirse en las actividades de ciudadanos probos por el mero hecho de pensar de otra manera. Estimamos, o cuando menos aspiramos, a que los resabios de la dictadura y del autoritarismo en el campo de los servicios de inteligencia queden sepultados por siempre jamás en el futuro argentino.

Ello impedirá caer en la realidad de nuestros días: anarquía y compartimientos estancos en la inteligencia que impiden, en última instancia, que la información llegue al único a quien no le debe ser desconocida ni retaceada: al área presidencial.”

Todo esto, señor presidente, como lo señalé al principio, al margen del esfuerzo realizado por la Comisión de Defensa Nacional para vertebrar este proyecto que deroga una disposición del gobierno de facto, merece mi aprobación en general, con las observaciones respecto de las que insistiré en su tratamiento en particular, especialmente con relación a los artículos 5º, 15, 45 y 46.

Señor presidente: podría continuar con la enumeración de ciertas deficiencias legislativas. No creo que sean producto de la Comisión de Defensa Nacional de nuestro Senado sino de la de la Cámara de Diputados.

Las deficiencias legislativas en el sentido orgánico de la ley ya fueron señaladas por los se-

ñores senadores por Salta y por Corrientes, de modo que considero inútil seguir insistiendo en ellas.

La premura en la sanción de este proyecto, necesario para que no sigamos manejándonos con una ley dictada por los gobiernos militares, hace que lo apruebe en general, con las observaciones que formularé durante el tratamiento en particular.

Los hechos producidos y que he señalado —que son conocidos por todos— tornan necesario que se dicte a la brevedad la ley que crea la Central Nacional de Inteligencia en la forma en que lo estipulo en mi proyecto. Así quedará balanceada la opinión de uniformados profesionales capaces y de los representantes del pueblo argentino que, en definitiva, son los custodios y ejecutores de la voluntad popular que nos ha traído a este recinto. Esto constituye, evidentemente, una revisión total de lo realizado por las dictaduras militares que precedieron a nuestra gestión legislativa.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por San Juan.

Sr. Bravo. — Señor presidente: los señores senadores que se han referido a este proyecto de ley de defensa han dado argumentaciones en uno y otro sentido, y debemos reconocer que han resultado realmente muy ilustrativas.

Dado el deseo de esta Cámara de agotar el debate en general para entrar en la consideración en particular, trataré de ser muy concreto y breve.

(Lee) “Nadie ignora que el proyecto de ley de defensa venido en revisión para su consideración por este cuerpo ha sido largamente debatido durante toda su tramitación parlamentaria, y ha seguido las alternativas de la contradictoria política que en materia militar llevó a cabo el gobierno actual desde su instalación en el poder. Tal vez por eso, en estos cuatro años que lleva el régimen constitucional en el país, el proyecto que nos ocupa no ha logrado la sanción legislativa.

Eso ha contribuido a que las instituciones estuviesen en mora respecto de la solución definitiva de lo que ha dado en llamarse la cuestión militar. No se han establecido en su momento reglas de juego claras para la definitiva inserción de nuestras fuerzas armadas en el quehacer nacional; no se han definido las hipótesis de conflicto, imprescindibles para cualquier planeamiento militar; no se han medido las consecuencias de la anticipada renuncia al uso de la fuerza por parte de nuestro país ante la eventualidad de un conflicto. En consecuencia, el tema militar ha vegetado, huérfano de la con-

sideración legislativa, no obstante las periódicas muestras de intranquilidad que se han advertido en filas de las fuerzas y de las cuales los sucesos de la Semana Santa de 1987 y los de Monte Caseros han sido las manifestaciones más explosivas.

La reciente Mesa del Consenso Democrático abordó el tema de la defensa nacional en una comisión especial y llegó a emitir un comunicado que por su generalidad contó con el asentimiento de la casi totalidad de los partidos representados. Pero allí se aclaró que ese acuerdo no significaba adhesión al proyecto de ley de defensa que habían convenido los partidos mayoritarios. Más aun, el proyecto quedó tal cual estuvo redactado antes de la Mesa del Consenso y no obstante que la mayor parte de los partidos representados en ella objetó no sólo su filosofía general sino varias de sus cláusulas fundamentales.

El tema esencial que define la orientación del proyecto es la limitación de la acción de las fuerzas armadas a las agresiones de origen externo.

Respecto a esto los teóricos del problema imbuidos más de una ideología anacrónica que de una bibliografía actualizada— han querido distinguir la defensa nacional de la seguridad interior como si fuesen materias esencialmente distintas que no contribuyen entre sí a la fortaleza única de la Nación.

Desconocen también esos teóricos que la guerra moderna ha alterado las reglas clásicas de los combates y que hoy se libran fronteras adentro de numerosos países conflictos armados de indiscutible origen exterior ¿Qué fue si no entre nosotros el Ejército Revolucionario del Pueblo que, aunque operando en el país y con argentinos en sus filas, obedecía a una estrategia elaborada a miles de kilómetros de nuestra patria? ¿Cómo se puede pretender combatir a ese ejército irregular apelando a los escasos recursos de las fuerzas policiales preparadas profesionalmente para otro tipo de lucha contra el delito?

¿Y qué pasaría en el futuro, pregunto, señor presidente, si ante una nueva manifestación de violencia guerrillera tuviesen que reunirse los poderes del Estado para debatir si se trata de una agresión externa o interna, a efectos de poder resolver recién entonces si se movilizan o no las fuerzas armadas?

Por eso, señor presidente, no existe para mí ninguna duda de que sancionar la ley de defensa tal cual se encuentra redactada implica hipotecar el futuro de la Nación, posponiendo definitivamente llegar tarde en el momento en que golpee una eventual agresión. Las fuer-

das en el instante en que el poder político lo considere necesario, sin poder obligarlo por imperio de la ley a que tenga que discutir —quizá tan largamente como nosotros ahora— la naturaleza de la agresión. El sistema propuesto es poco práctico y podría llegar a ocasionar en su momento un grave estado de indefensión para la Nación.

Pero además de estos argumentos que surgen del más elemental sentido común, la propia Constitución Nacional ha resuelto el tema con proverbial sabiduría. Dice en efecto el artículo 86, inciso 17) de nuestra Carta Magna que "... el presidente de la Nación... dispone de las fuerzas militares marítimas y terrestres, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación". Repito: según las necesidades de la Nación. Vale decir, la Constitución —y los hombres que la redactaron algo sabían de conflictos internos y externos— no entra a discriminar entre agresiones de carácter exterior o de carácter interior: deja en amplia libertad de acción al poder político para decidir el uso de la fuerza de acuerdo con lo que necesita la Nación. La Constitución no ata al poder político ni lo somete a la obligación de sentarse a discutir académicamente si quienes están poniendo en peligro la integridad de la Nación provienen de afuera o de adentro de sus fronteras.

Esa sabiduría centenaria de la Constitución Nacional no puede ser limitada o desconocida por una ley que sancione este Congreso, cuyos integrantes han jurado defender el estado de derecho. Por eso, considero que el proyecto de ley de defensa que estamos analizando contraviene en su letra y en su espíritu el mandato constitucional.

Por otra parte, ésta ha sido la posición invariable del Partido Bloquista cada vez que en estos últimos años se ha abordado el tratamiento de este proyecto que hoy nos ocupa. En efecto, ya fuese en la Honorable Cámara de Diputados o en la Mesa del Consenso Democrático, los representantes del bloquismo se opusieron a esa discriminación absurda que establece el artículo 2º y que como he dicho, orienta todo el articulado del proyecto de ley.

También lo entendió así el entonces senador por San Juan y actual gobernador de mi provincia, doctor Carlos Gómez Centurión, acompañado por el senador nacional don Francisco Gil cuando en la sesión de este honorable cuerpo celebrada el 23 de octubre de 1986, pidió la modificación del referido artículo 2º para que la futura ley de defensa contemplase la acción de

agresión, anunciando su voto negativo en caso de insistirse en la redacción propuesta por el dictamen en mayoría.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia, senador Luis Rubeo.

Sr. Bravo. — Dijeron en esa oportunidad los señores senadores por San Juan —citando los casos de Perú y Colombia, donde las fuerzas armadas combaten activamente a la guerrilla que pretende derrocar a los gobiernos constitucionales— que, de aprobarse el proyecto sin modificaciones, se estaría afectando la seguridad de la Nación frente a un eventual rebrote guerrillero.

Por todo ello, desprovisto de todo ideologismo malsano y con la intención de no legar problemas a las generaciones que habrán de sucedernos, creyendo interpretar fielmente la Constitución y a la luz de mi experiencia de más de cincuenta años de vida política activa, no he de dar mi voto favorable al proyecto de ley de defensa en tanto no se modifique el artículo 2º que orienta todo el texto, al impedirle al poder político usar libremente y según las necesidades de la Nación el poder de fuego de las fuerzas armadas.

En consecuencia, la bancada bloquista propone que al final del primer párrafo del artículo 2º y después de las palabras “para enfrentar” se agregue: “cualquier clase de agresión”, quedando entonces redactada la parte final de ese párrafo, de la siguiente forma: “para enfrentar cualquier clase de agresión”.

Podría entrar en otras consideraciones —he tomado nota del meduloso informe del miembro informante, senador Berhongaray—, pero como dije al principio he tratado de hacer un resumen muy concreto para fijar la posición de los dos integrantes del bloque de mi partido.

Sr. Presidente (Rubeo). — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Señor presidente, señores senadores: después de cuatro años de vida constitucional, vamos a agotar hoy el debate que nos conducirá a la aprobación de la ley de defensa nacional.

Pienso que hemos tenido hasta el momento un gran vacío que la democracia no podía darse el lujo de seguir permitiendo. Lo mismo ha ocurrido también con otras leyes importantes, como la sindical, que aprobamos hace pocas semanas, pero en definitiva nuestra misión trascendente y

fundamental de ir sustituyendo la legislación autocrática dictada en los periodos de facto por leyes apropiadas y adecuadas al sistema constitucional en que vivimos.

Como en su momento dijo el presidente de la República, doctor Raúl Alfonsín, había que cejar de lado las ideas relativas a la doctrina de la seguridad nacional que tanto daño han hecho a nuestro país en los últimos años, y había también que otorgar a las fuerzas armadas una capacidad disuasiva con un margen de seguridad adecuado para la defensa de nuestra República.

Un objetivo básico de nuestro gobierno ha sido la inserción de las fuerzas armadas en la sociedad y dentro del sistema institucional reglamentado por la Constitución. No podría decir que esto se ha logrado porque ni siquiera ha sido un objetivo del gobierno lograrlo a corto plazo. Pensamos que es una tarea de largo aliento; no en vano desde 1930 se han sucedido diferentes capítulos de una terrible distorsión de nuestra vida constitucional como para que ahora pretendamos lograr la transformación casi mágica en un escaso lapso de una mentalidad autoritaria muy arraigada. Pero lo importante es destacar que se ha avanzado, y se ha avanzado mucho en este terreno.

Si alguna prueba nos faltaba la tuvimos con la actuación de las fuerzas armadas del país en los sucesos de Monte Caseros, donde aplastaron, conforme a las órdenes impartidas por el presidente de la República como jefe máximo de las mismas, un intento sedicioso que terminó para sus protagonistas, diría, si no fuera por el desprestigio que esto conlleva para el país, de una manera grotesca. Tal conclusión sacamos al menos si se compara el contraste entre las declaraciones altisonantes de lo que prometían los jefes rebeldes y lo que en realidad hicieron, que fue concluir rindiéndose sin pena ni gloria.

Sin duda, para la inserción definitiva de las fuerzas armadas en la vida del país, la educación militar ha de jugar un papel de gran trascendencia en el transcurso de los años. Para lograrlo tiene una gran importancia la reforma de los planes de estudio de los colegios militares y también el espíritu que anime a los profesores que dicten estas materias para que abandonen los viejos conceptos autoritarios que durante años se inculcaron a los jóvenes aspirantes a oficiales.

El proyecto de ley de defensa que hoy estamos analizando es ajeno a estos objetivos que estoy enunciando, pues esta norma tiene que dar la exacta ubicación de las fuerzas armadas en la sociedad argentina, delimitando claramente

sus funciones y también encuadrándolas en el sistema constitucional.

No es del caso hacer ahora la historia de los golpes de Estado. Se han hecho alusiones aquí —yo mismo, en algunas interrupciones, que tuvo la gentileza de concederme el señor senador por Salta, del bloque justicialista, he formulado breves referencias—. Pero tampoco podemos pasar absolutamente por alto la situación de los golpes de Estado que se han consumado en el país, puesto que ellos han sido una causa de la distorsión que hemos vivido en materia de defensa nacional. Estos golpes de Estado, y especialmente los últimos —el del 66, que derrocó al presidente Illia, y el del 76, que derrocó a la señora de Perón—, han tenido un insistente anhelo de restauración conservadora de las ideas más retrógradas que puede haber no sólo en el país sino en el mundo, tanto en el campo económico, adhiriendo a doctrinas económicas ultraliberales, con historia secular, como también en el campo de la política, sosteniendo ideas totalitarias que fracasaron en el mundo en forma catastrófica cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin.

Entonces, aunque no nos agrada volver al pasado, no se puede prescindir de tener en cuenta para el análisis de la ley defensa estas graves distorsiones que han provocado los golpes de Estado en la materia.

Es en ese contexto del apartamiento del sistema constitucional en la Argentina que se llegó al gobierno del general Onganía. Este gobierno hizo suyo el enfrentamiento Este-Oeste y adoptó las prácticas de la guerra fría a las que desgraciadamente habían adherido las grandes potencias en un momento de grandes tensiones. Al mismo tiempo, y lo que ha sido peor, hizo suya la doctrina de la seguridad nacional.

Pero no fue fruto de la casualidad que asumiera como propia esta doctrina de la seguridad nacional, puesto que la misma venía siendo inculcada desde hacía años a nuestros oficiales en la Escuela de las Américas, de Panamá; y en otras norteamericanas en las cuales se formaban los hombres de nuestras tres armas.

Lo peor de todo, señor presidente, fue que nuestras fuerzas armadas adoptaron tardíamente una doctrina que ya había sido derrotada en Argelia cuando los franceses la intentaron aplicar, y lo mismo había ocurrido a los norteamericanos en Vietnam. Es decir que tarde y mal nuestras fuerzas armadas hicieron propia una doctrina de la derrota y del fracaso militar.

Esto no tendría tanta importancia si no hubiera el saldo de desencuentros de

sangre y de dolor que nos ha dejado a los argentinos, del que tendremos que seguir sufriendo las consecuencias durante años.

Parecía que las fuerzas armadas se consideraban, por entonces, como poseedoras de un mandato superior, de origen divino. Ellas eran las únicas que creían estar capacitadas para decidir cuándo el gobierno obraba bien y cuándo andaba mal. Actuaban como si fueran las únicas depositarias de la verdad.

Así fue cómo, en consecuencia, con estas ideas envejecidas, al ocurrir el golpe de estado del 28 de junio de 1966, las fuerzas armadas de aquel entonces se aseguraron la suma del poder público ocupando permanentemente y masivamente el aparato de la administración del Estado.

Los que usurparon el poder dijeron que no tenían plazos sino, solamente, objetivos. Ya no afirmaron, como en ocasiones anteriores, que su propósito era restaurar el sistema constitucional, así fuera una alegación falsa.

Las consecuencias en el seno de las fuerzas armadas las pudimos comprobar todos los argentinos. Las internas propias de los partidos políticos, de los sindicatos y de las instituciones civiles, se trasladaron a las fuerzas armadas, que deberían estar ajenas —y preservadas— del juego de facciones. Pero no fue así.

No solamente tuvieron lugar enfrentamientos dentro de cada arma, sino también en las fuerzas entre sí. Estas disputas —como es lógico— también distorsionaron el concepto de defensa que, por aquel entonces, se aplicó y que todavía tiene alguna sobrevivencia legislativa en el país que concluirá cuando aprobemos la ley en debate.

Hubo feudos propios de cada arma, especialmente en el último gobierno militar. Una fuerza ocupaba el Ministerio de Relaciones Exteriores; otra, el de Interior y, así sucesivamente, llegando hasta los más diversos ámbitos.

Así, por ejemplo, había licitaciones en las radios, y una de ellas se adjudicaba a los amigos de la Marina, otra a los del Ejército y una tercera a los de la Aeronáutica.

Recuerdo este caso porque tiene cierta actualidad, que todavía hay algunos que quieren rescatar como ejemplo la Ley Nacional de Radiodifusión que impuso Jorge Rafael Videla, y que es una de las normas de facto más autoritarias que nos legó aquel sistema.

Pero no sólo ocurrió que se instituyeran y distribuyeran feudos entre las armas, sino que también creció desproporcionadamente el presupuesto militar, ampliándose en forma considerable los complejos industriales militares. Com-

plejos que, en muchos casos, iban acompañados de empresas subsidiarias que nada tenían que ver con lo militar, ni siquiera con la fabricación de los armamentos.

Tengo presente estadísticas de un instituto que funciona en Suecia, que efectúa un control internacional bastante objetivo acerca de las compras de armamentos. Este organismo señalaba, por ejemplo, que entre 1979 y 1983 la Argentina gastó más de 24 mil millones de dólares en equipos bélicos.

Entonces, cómo no podemos nosotros también atribuir a esta causa el enorme incremento de la deuda externa que hemos sufrido en aquellos años, deuda que hemos heredado y que compromete nuestro futuro desarrollo, el esfuerzo de nuestra generación y aun de futuras generaciones de argentinos.

También se deformó la diplomacia. Resulta que nuestros países vecinos eran todos nuestros potenciales enemigos. Se ha citado en varios tratados de especialistas que una de las causas del retraso que en aspectos fundamentales sufrió la Mesopotamia se debe a esas erróneas tesis de defensa que consideraban a aquella más que una región del país que teníamos la obligación de desarrollar como un territorio por el cual podían invadirnos nuestros vecinos y el Brasil. Desde ese enfoque convenía que la Mesopotamia no dispusiera de grandes rutas ni de medios de transporte ni de otros objetivos fundamentales para el crecimiento.

La guerra de las Malvinas destruyó todas estas tesis. Entonces, pudimos comprobar las inconveniencias de que la diplomacia se base en presuntas doctrinas de defensa.

En ese momento advertimos que los países latinoamericanos eran nuestros amigos. Lo estamos viendo en estos días cuando tuvieron lugar las recientes maniobras que realizó la nación usurpadora en las islas Malvinas. Y también vimos que quienes pasaban por ser nuestros amigos, como lo Estados Unidos de América —al menos amigos de la dictadura gobernante entonces— se convirtieron en aliados de la nación usurpadora que estaba en guerra con la Argentina y contribuyeron también a que muchos jóvenes argentinos perdieran la vida en las Malvinas.

Yo también me inclino reverente ante el recuerdo de estos jóvenes a los cuales se les rindió homenaje el 2 de abril; pero creo que nuestro país los necesitaba vivos y no muertos. De manera que no puedo aprobar la intervención bélica por más justos que sean, como sin lugar a dudas lo es el país que lleva ya ciento cincuenta años recordándolo—, los derechos in-

alienables jurídicos, geográficos, históricos, que respaldan la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur.

Así fue como el presidente de facto, el dictador Onganía, sancionó una ley con sus ideas, con su minúscula visión de la defensa, que fue la llamada ley 16.970. Pero al mismo tiempo dictó un conjunto de disposiciones vinculadas a esa ley, como fueron los decretos reglamentarios 738 y 739 de 1966; la llamada ley 19.101, del personal militar; la llamada ley 17.649, de movilización, con su modificatoria, la ley 18.734; la denominada ley 17.531, de servicio militar; y la llamada ley 20.318, del servicio civil de defensa.

Además, en consonancia con la doctrina Mc Namara, entonces en boga, el CONADE —Consejo Nacional de Desarrollo— y el CONASE —Consejo Nacional de Seguridad— se constituyeron en los pilares de ese sistema de defensa absurdo que en su momento estructuró el país.

Por esa ley de facto 16.970, el señor Onganía, su ministro de Defensa y también sus sucesores —me refiero a sus sucesores de facto, obviamente— renunciaron a ejercer las atribuciones constitucionales y legales que les eran propias.

Tal política militar tuvo al mismo tiempo consecuencias económicas. Por ejemplo, en el período constitucional del presidente Illia, de 1963 a 1966, los gastos de defensa alcanzaron al 2,05 por ciento del producto bruto interno. En 1983, hasta la asunción del gobierno constitucional, los gastos de defensa llegaban al 5,98 por ciento del mismo producto, sin dejar de reconocer que había además otros gastos de defensa disimulados en otros rubros del presupuesto: la cifra indicada responde solamente a los gastos oficialmente reconocidos.

En relación al presupuesto, en 1981 los gastos de defensa alcanzaron a un 29,6 por ciento, cuando lo normal sería que alcanzaran al 2 por ciento del producto bruto interno y que no superaran con relación al presupuesto, el 10 por ciento; excepcionalmente podrían llegar al 12 por ciento como máximo.

En aquel período de facto también se dio un alto vuelo a las denominadas empresas militares. A veces, es cierto, con el sano objetivo de lograr el autoabastecimiento militar, se llegó a subordinar las actividades de la Nación a objetivos militares. Yo pienso, con un criterio actual, que las industrias militares no deben ser monopolizadas por el Estado, que tienen que estar en manos privadas. Y quiero ser muy claro: si queremos apoyar un pacifismo real, coherente y ético, los argentinos no debemos sustentar el

crecimiento de una industria bélica. ¿Por qué no hacerlo? Porque si hay algo que nos falta en este país son inversiones. Pero no debemos hacerlas en la industria bélica, sino en montones de industrias que son fundamentales para nuestro desarrollo, empezando por la agroalimentaria y terminando por la informática. Mi opinión es, insisto, que de ninguna manera debemos impulsar industrias bélicas, aunque otros países lo hagan. Cada cual elige el modelo de desarrollo que le conviene.

Tenemos, sí, como un aporte a esta legislación de defensa, que estudiar la manera de lograr que nuestra industria nacional se adapte rápidamente a la producción bélica para el caso desgraciado de que tengamos que afrontar algún conflicto armado. Así ha ocurrido por ejemplo en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria se adaptó para la fabricación de armamentos. Esto sería lo lógico y lo consecuente con nuestra política pacifista en resguardo de nuestra defensa.

También se ampliaron durante los gobiernos de facto las actividades bajo control militar. Los aeropuertos de la aviación civil, por citar sólo un ejemplo, siguen estando en manos militares a pesar de que deberían estar en manos civiles. Yo no juzgo que estén mal administrados. De ninguna manera. Siento respeto por las fuerzas armadas y pienso que sus integrantes cumplen de la mejor manera que pueden con las funciones que se les encomienda. Pero creo que debemos colocar a las fuerzas armadas en sus funciones específicas, y que tenemos que poner los aeropuertos civiles, como todas las naciones importantes y desarrolladas del mundo, en manos civiles.

Podría hacer más las palabras iniciales que pronunció en su disertación el señor senador por Catamarca, doctor Amoedo, cuando manifestaba la satisfacción que sentía al poder derogar hoy la legislación de facto, o al menos crear las condiciones para hacerlo. Me refiero a la derogación de la ley 16.970 y sus modificatorias, las leyes 17.649, 19.276 y 20.194, entre otras disposiciones de facto.

El sistema de defensa que creó esa legislación de facto de la época de Onganía facilitó que los mandos de las fuerzas armadas ejercieran el control sobre las decisiones del presidente de la Nación, impidiendo que él las condujera con plena autoridad. Esta es la diferencia que existe, por ejemplo, entre la ley de facto 17.649 que estoy criticando y el proyecto del presidente que firmó el señor senador por Salta.

Es posible que algunos párrafos de este proyecto tuvieran una redacción textual a las de algún punto de aquella legislación; sin embargo, la idea que sustentaba era diametralmente distinta porque el proyecto del presidente Illia rescataba como fundamental la vigencia de la Constitución Nacional, colocando al presidente en el lugar que le corresponde, es decir, como jefe máximo de las fuerzas armadas.

Lo más nefasto de la llamada ley 16.970 fue la institucionalización de la doctrina de la seguridad nacional, a la que ya me he referido. Tal designio se llevó especialmente a cabo a través del sistema de planeamiento y acción para la seguridad, que fue concebido y elaborado para apoyar un sistema autoritario que definió por se los intereses vitales de la Nación, sin ninguna participación de la sociedad.

Esa legislación, al confundir la seguridad del gobierno con la del Estado, terminó consagrando la defensa nacional a la seguridad del régimen político absolutista de turno, tanto al de aquel entonces como otros de igual carácter que le sucedieron.

También se crearon mecanismos ad hoc, con lo cual el sistema de la ley de facto 16.970 contribuyó a la extrema burocratización de los mandos de las fuerzas armadas, ocasionando un grave perjuicio a la labor específica de la defensa nacional. Esta situación pudo ser comprobada con el devenir de los años cuando debimos enfrentar la guerra de las islas Malvinas, en la cual las fuerzas armadas no actuaron en forma unida y homogénea, sino que lo hicieron cada una por su cuenta con el resultado negativo que ha quedado a la vista, sin perjuicio de reconocer los actos de arrojo y heroísmo.

Por otro lado, esa ley de facto prácticamente ha quedado en desuso porque la mayor parte de sus normas son inaplicables. De allí la importancia que tiene este debate y la alegría que nos embarga al contribuir a derogar esa legislación.

A su vez, tal derogación de la ley de defensa autoritaria obliga a realizar un ajuste de todas las normas vigentes en esa materia derogando también, como lo propone el artículo 38 del proyecto, la ley de movilización, que es la 17.649, la de servicio civil de defensa, que es la 20.318, la de comisión de zonas de seguridad y otras leyes vigentes en ese caduco sistema aplicado desde hace tantos años.

El gobierno del presidente Raúl Alfonsín, aunque no haya logrado hasta este momento por diversos vaivenes que se aprobara una ley de defensa nacional, se ha visto obligado a intro-

ducir reformas que han sido fundamentales para cambiar la estructura autoritaria de defensa.

Todos hemos hecho un esfuerzo. El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley de defensa al Congreso y el Senado lo aprobó. Todo pareciera indicar que no era el proyecto más adecuado, pero finalmente se ha logrado uno que sí tiene consenso mayoritario y que es el que estamos tratando, que cuenta con sanción de la Cámara de Diputados.

Sra. Gurdulich de Correa. — ¿Me permite una interrupción para formular una aclaración, señor senador?

Sr. Solari Yrigoyen. — Con todo gusto.

Sra. Gurdulich de Correa. — Quiero aclarar que el proyecto del Poder Ejecutivo fue enviado a la Cámara de Diputados, en donde fue aprobado. Cuando se lo trató en el Senado se lo compatibilizó con el que habíamos presentado con el señor senador Saadi en su oportunidad, lo que fue hecho de acuerdo con una decisión de los presidentes de bloque dada la importancia del tema. Entonces, se llegó a un proyecto común que fue aprobado y remitido finalmente a la Cámara de Diputados. Allí se compatibilizaron los dos proyectos tratando de aunar los criterios de ambos.

Sr. Presidente (Rubeo). — Continúa en el uso de la palabra el señor senador por el Chubut.

Sr. Solari Yrigoyen. — Lo dicho por la señora senadora no hace más que ratificar lo que he dicho sobre el deseo permanente que ha tenido este Parlamento de dictar al país de una ley de defensa democrática que sustituya a la autoritaria que todavía no ha sido derogada.

El gobierno del presidente Alfonsín ya por la ley de ministerios 23.023, por supuesto con la colaboración innegable del Parlamento, introdujo modificaciones en aspectos fundamentales por cuanto recuperó las funciones usurpadas por los ex comandantes a través de la ley 16.970.

Por otra parte, por el decreto 436/84 el presidente delegó atribuciones en el Ministerio de Defensa y aun en los jefes de los estados mayores. Y por el decreto 2.770/84 modificó la estructura orgánica del Ministerio de Defensa y creó la Secretaría de la Producción para la Defensa para dirigir el complejo industrial de fabricaciones militares.

Es decir que aunque no hayamos modificado hasta ahora la ley de defensa ha habido otras reformas para tratar de sustituir el desuso necesario en que cayó la ley de facto.

El señor senador por Salta, del bloque justicialista, hacía hoy la defensa de la intervención de las fuerzas armadas en las cuestiones inter-

nas del país. Con todo el respeto que me merecen sus ideas y la persona del señor senador, creo que olvidó el acuerdo político que ha existido para que hoy tratemos este proyecto al que recién hacía mención la señora senadora Gurdulich de Correa. El nos invitaba a realizar un esfuerzo que ya se ha llevado a cabo. Nos decía que tratemos de buscar un consenso para aprobar una ley en la que todos estuviéramos de acuerdo. Ese consenso lo constituye precisamente el dictamen con el que estamos de acuerdo en lo fundamental, aunque parcialmente podamos creer que tal o cual artículo debe ser objeto de mejoras.

También quisiera decir que a mi juicio, el señor senador por Salta y el señor senador por San Juan, que me ha precedido en el uso de la palabra, han confundido en sus disertaciones una vez más la defensa nacional con la seguridad interna.

El país no tuvo una guerra contra la subversión. Tuvo sí una lucha contra la subversión, una lucha que desbordó los límites constitucionales en los cuales debió haberse mantenido y terminó, al final, en una represión salvaje e indiscriminada dirigida contra supuestos enemigos ideológicos. Si tal vez algún día se pudiera hacer el recuento de las víctimas de este enfrentamiento, llegaríamos a la conclusión de que sólo en una escasa proporción fueron elementos subversivos o terroristas y que la inmensa mayoría eran personas que nada tenían que ver con la violencia ni con el terrorismo y que, por el contrario, reprobaban estas actitudes.

Pero si he hecho la cita es para demostrar que a mi juicio esta triste experiencia que vivió el país probó que las fuerzas armadas no estaban capacitadas para enfrentar la agresión guerrillera y terrorista, y que por eso incurrieron en todos los errores —errores sangrientos— que nos tocó vivir en el país.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, senador Adolfo Gass.

Sr. Solari Yrigoyen. — Los objetivos de esta reforma son amplios. Hizo referencia a ellos el señor senador Berhongaray y contribuyen a insertar a las fuerzas armadas en el orden institucional.

En una publicación que he recibido, que es muy seria, y que he leído con detenimiento, titulada "La reforma militar, fuerzas armadas y sociedad democrática", del partido Acción Transformadora, que entre otros dirigen los doctores Alfredo Vítolo, Néstor Grancelli Cha, Horacio Salduna y Enrique Vera Villalobos, se ha resu-

mido muy claramente cuáles son los objetivos de la reforma militar.

Para abreviar mi exposición diré que todos estos objetivos giran en torno a lograr la reincorporación de las fuerzas armadas en una sociedad democrática y pluralista.

A efectos, repito, de no extenderme en el uso de la palabra solicito la inserción de la parte pertinente de esta publicación en el Diario de Sesiones.

—Asentimiento¹.

Sr. Solari Yrigoyen. — Es fundamental destacar del proyecto de ley en examen el hecho de que se ajusta a los principios de la Constitución Nacional y a las normas específicas enunciadas por nuestra Carta Magna.

Se desprende de esta iniciativa la vigencia del orden constitucional como condición sine qua non de la defensa nacional. Este es el objetivo fundamental del cambio que hoy estamos considerando.

Se respeta en esencia el principio de la separación de los poderes, cosa que jamás podría hacer un gobierno autocrático que toma en sus manos la suma del poder público, como lo hicieron Onganía, Videla, Viola y todos estos personajes de la historia autoritaria reciente de nuestro país.

Por eso es que esta iniciativa da participación al Congreso Nacional, tal como lo ordena nuestra Constitución, en el tratamiento de las decisiones que son propias del Poder Legislativo, reservando también para el Poder Ejecutivo la conducción de las instituciones y de los órganos que componen el sistema de defensa nacional.

Todo esto está muy bien explicitado en diversos artículos —9º, 14, 26, 29 y 30, entre otros— del proyecto de ley.

En materia de movilización de defensa civil, requisiciones de bienes, convocatorias y sus excepciones, se regulan los alcances del poder administrador, señalando siempre la necesidad de la intervención del Congreso, en general la intervención previa y en algunos casos que yo estimo deben ser excepcionales, a posteriori. Es beneficioso para el afianzamiento del sistema democrático que la intervención sea previa y no posterior.

En materia de defensa es más importante prevenir los conflictos que enfrentarlos. Esta es una norma elemental de las doctrinas modernas de defensa. Es por eso que la disuasión es un

objetivo principal y fundamental del proyecto en examen. Si la disuasión no diera resultado, entonces sí es el rechazo de la agresión lo que corresponde.

Hubo épocas en la historia en que la guerra era el medio ordinario en la vida de los pueblos, pero actualmente debemos considerarlo como extraordinario y excepcional. Las doctrinas de defensa deben ajustarse a estas nuevas ideas en boga en el mundo, que tienen también una fundamentación científica dado el alto desarrollo de los armamentos nucleares, que en caso de una conflagración mundial pueden poner en peligro la existencia misma del género humano.

La guerra de las Malvinas nos dejó muchas enseñanzas. Una de ellas es que un ejército de conscriptos no está en condiciones de enfrentar a uno profesional. Da la impresión de que armamentos tan sofisticados como los que se emplean hoy en día en la guerra no pueden estar en manos de aficionados y de que hacen falta verdaderos profesionales para manejarlos.

Con estos juicios fundamento mi opinión contraria al servicio militar obligatorio, si bien estoy de acuerdo con que la desaparición del mismo no puede ocurrir de un día para el otro sino que tiene que hacerse en forma gradual. Sé que importantes naciones desarrolladas, como Francia, por ejemplo, tienen una ley de servicio militar obligatorio, pero hay países, como Estados Unidos y otros anglosajones que lo han suprimido, pese a la gravitación que como grandes potencias tienen en el mundo.

Considero que nuestros países —y me refiero a las naciones en vías de desarrollo— deben dar prioridad a los gastos productivos y de crecimiento porque ellos contribuyen a afianzar la paz y a poner a la República en mejores condiciones para el caso en que tengan que enfrentar un conflicto bélico. El desarrollo de la educación, la cultura, la tecnología, la ciencia no sólo afianza la paz —reitero— sino que nos coloca en una situación más apropiada frente a cualquier hipótesis de conflicto o de agresión externa.

La defensa nacional es un componente más de la política de un país y como tal se ve influida por el funcionamiento de todas las áreas gubernamentales. Esto debe ser tenido en cuenta especialmente cuando se reclama con insistencia el aumento del presupuesto de Defensa —y algunos señores legisladores lo han hecho— como si fuera lo único que puede garantizar una mejor defensa para el país. Y no es así. El aumento del presupuesto de Educación, de Ciencia y Tecnología y del correspondiente al área universitaria también contribuye —en gran ma-

nera— a afianzar los sanos criterios de defensa que resguarden la paz del país.

Este concepto resulta afirmado por lo dispuesto en el artículo 14 del proyecto y en otros, como del 20 al 24, que legislan la organización de las fuerzas armadas.

Todo esto destaca el carácter civilista e institucional que tiene este proyecto. Las fuerzas armadas de la Nación tienen una misión muy importante que cumplir, pero la definición de la política de defensa a seguir, de acuerdo con lo que es de práctica cotidiana en las naciones más avanzadas, corresponde al poder político, con arreglo a las normas constitucionales como se hace en el proyecto en examen.

Para abreviar el debate cuando se realice el análisis en particular, brevemente formularé en este momento de mi exposición algunas referencias respecto de determinados artículos.

Quiero señalar, por ejemplo, que una de las partes más fundamentales del proyecto, que aplaudo, es la que objetó el señor senador por San Juan; me refiero al último párrafo del artículo 15 que descarta la política interna del trabajo de la inteligencia militar.

Este texto constituye una de las esencias primordiales que tienden a resguardar y desarrollar el concepto moderno de defensa que fundamenta este proyecto.

Con respecto al artículo 25 quiero decir, una vez más, que no es de buena técnica legislativa colocar "y/o". El lenguaje escrito de las leyes tiene que ser claro, como lo es el hablado. Debería decir: "Todas las personas de existencia visible y jurídica..." es decir, suprimiendo "y/o".

En el artículo 26, advierto que el servicio de conscripción no se identifica con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Nacional. Si diéramos esta interpretación —que no es la de la ley—, llegaríamos a la conclusión de que no podríamos suprimir el servicio de conscripción obligatoria.

El artículo 29 habla de la aplicación por excepción del artículo 6º de la Constitución Nacional que legisla las intervenciones provinciales. La norma es que las autoridades constitucionales mantendrán la plena vigencia de sus atribuciones y que la aplicación del artículo 6º debe ser hecha con una interpretación restrictiva.

El artículo 34 establece que en caso de guerra o ante su inminencia, el Poder Ejecutivo nacional podrá disponer requisiciones de servicios o de bienes. Si no me equivoco, señor presidente, debería decir "requisiciones de bienes y requerir servicios", porque la requisición

de acuerdo con la acepción que le da el diccionario de la Real Academia Española es sólo de bienes, definiéndola de la siguiente manera: "Recuento y embargo de caballos, bagajes, alimentos, etcétera, que para el servicio militar suele hacerse en tiempo de guerra".

Finalmente, con respecto al artículo 45 quiero señalar una objeción. No estoy de acuerdo con que se haga una delegación innecesaria que, a mi juicio, se encuentra en pugna con el inciso 23 del artículo 67 de la Constitución Nacional.

Dicho artículo del proyecto delega en el Consejo de Defensa, como función transitoria, la elaboración de anteproyectos de ley que se enumeran en el artículo siguiente. El artículo 68 de nuestra Constitución es muy claro; establece que sólo los legisladores o el Poder Ejecutivo tenemos la facultad de presentar proyectos de ley.

Los anteproyectos de ley pueden ser elaborados por cualquier ciudadano que anda por la calle; entonces, ¿por qué el Parlamento va a delegar o circunscribir expresamente esta facultad en el Consejo de Defensa?; dejemos que esto lo haga el Poder Ejecutivo que, por el artículo 68 de la Constitución, está facultado para presentar en el Congreso los proyectos mencionados en el artículo 46 de la disposición que estamos considerando, sin perjuicio de las propias facultades que tenemos los legisladores y a las que no debemos renunciar porque si no este Parlamento se reservaría sólo para sí las facultades de dictar proyectos de comunicación sin importancia. No debemos delegar exclusivamente en el Poder Ejecutivo la facultad de redactar e iniciar los proyectos fundamentales para el país.

Para terminar, señor presidente, este proyecto —como ya lo he dicho— viene a llenar un vacío, pero es además fruto del acuerdo de las dos grandes mayorías parlamentarias con el apoyo de otros partidos políticos. Se ha gestado en la Mesa del Consenso convocada por el gobierno nacional. Nos hubiera gustado que el consenso fuera del ciento por ciento de las fuerzas políticas. No ha podido ser así, pero podemos exhibir con orgullo que sí es el consenso de las principales fuerzas políticas en la tesis fundamental que refleja esta ley de defensa, por encima de los pequeños errores de redacción que podamos señalar. Es el consenso de las fuerzas mayoritarias del país y éste es un hecho muy importante. Su aprobación —cuando ocurra— consolidará uno de los primeros aciertos de la estrategia de la concertación que

se ha adoptado en el país en los últimos tiempos.

Al aprobar este proyecto —ojalá que el número de señores senadores permitiera que lo hiciéramos esta tarde— habremos aprobado un instrumento adecuado para cumplir con el mandato constitucional de proveer a la defensa común que consagra tan clara y enfáticamente el Preámbulo de nuestra Carta Magna.

Sr. Presidente (Gass). — Tiene la palabra el señor senador por Santiago del Estero.

Sr. Salim. — (Lee) "Señor presidente: la concepción del presente proyecto, que pretendemos transformar en ley, no contempla en su conjunto el problema de la defensa nacional. Es así que para interpretar su estructura como tal, debemos limitarnos a un diagnóstico sobre defensa nacional que nos permita profundizar conceptos sobre el sistema existente y que afecte a la realidad nacional.

Desde allí, y con profundo conocimiento del problema, recién podemos normar a través de la ley sobre el tema que nos ocupa.

A efectos de aclarar conceptos me permitirá exponer algunas conclusiones sobre el tema de la defensa nacional.

La ley de defensa nacional debe ser integral y entender sobre todos los componentes del sistema. La participación de las fuerzas armadas en su condición de componente militar no debe limitarse de tal manera que en su aislamiento estemos negando su propia existencia, con el grave riesgo de que en el momento en que las fuerzas de seguridad o policial se vieran superadas por las características del conflicto, las mismas fuerzas no se viesen naturalmente integradas al sistema.

El proyecto de ley en análisis acredita la posibilidad de conflictos graves, tales como conflicto social localizado, conflicto social generalizado, agresión militar y agresión interna. Surge entonces el interrogante de cómo merituar la dimensión de cada uno y fijar en la frialdad del proyecto la participación o no de determinada fuerza.

El concepto de defensa nacional lo es meramente formal en cuanto a la participación de las fuerzas armadas ante una agresión de origen interno. El proyecto de ley no define el sistema de inteligencia nacional negando la participación de los organismos de inteligencia militar en cuestiones políticas internas.

Sobre este particular, señalo que el artículo 15 del texto del proyecto dice lo siguiente: «Las cuestiones relativas a la política interna del país no pueden constituir en ningún caso hipótesis

de trabajo de organismos de inteligencia militares».

En el diario «Ambito Financiero» del 7 de abril de 1986 —en «La Nación» de ayer también hay un texto similar— se señala lo siguiente: «La SIDE es un organismo totalmente ineficaz y el radicalismo no cuenta con los cuadros suficientes para convertir al organismo en algo confiable, afirmó una alta fuente de la Casa Rosada, bajo la condición de que se reservara su anonimato». No es ésta la primera, posiblemente tampoco sea la última, crítica que se desliza contra la Secretaría de Inteligencia del Estado.

Más allá de las críticas cotidianas contra la Secretaría, la ola de terrorismo de la semana pasada originó que dentro del propio gobierno o del radicalismo partieran innumerables dardos envenenados contra Facundo Suárez y el jefe de la Central Nacional de Inteligencia, Ricardo Natale.

Sin embargo, no todo lo que emana de la SIDE huele a ineficiencia o ausencia de respuestas. Así, por ejemplo, pudo conocerse que por expresa disposición del presidente Raúl Alfonsín los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas han recibido la autorización de volver a centrar su atención en el frente interno.

El organismo transmisor de la directiva presidencial fue la Central Nacional de Inteligencia, quizá debido a que concentra toda la información que surge de la comunidad informativa, aunque no se sabe por ahora si las fuerzas armadas elevarán a Natale el cúmulo de información necesaria como para tener un panorama completo."

Para no hacer tan tediosa esta sesión que lleva ya muchas horas en el tratamiento de este importante problema, solicito que se inserten en el Diario de Sesiones los capítulos que forman parte del resto de mi exposición, para pasar a citar algunas conclusiones sobre este tema.

—Asentimiento.¹

Sr. Salim. — Con todo respeto voy a responder algunos conceptos al señor senador por el Chubut en cuanto a la acción de las fuerzas armadas en las Malvinas.

Al parecer este proyecto de ley va a ser aprobado pero no he podido sustraerme al deseo y obligación como argentino, y en mi carácter de senador, de expresar mi pensamiento en este im-

¹ Ver el Apéndice.

portante asunto que indudablemente es fundamental para asegurar la paz y la seguridad de nuestro pueblo.

(Lee) "Mientras las naciones del mundo utilizan todos los medios posibles para fortalecer las fuerzas armadas para la defensa de la soberanía, nuestras fuerzas están virtualmente anarquizadas y colocadas casi en un total estado de indefensión.

Entrando un poco en el túnel del tiempo, recordemos la guerra del Atlántico Sur cuando el gobierno militar de entonces decidió recuperar las islas que fueron usurpadas por la fuerza hace más de ciento cincuenta años."

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edilson Otero.

Salim. — "El pueblo total de Argentina, sin excepción, llenó todas las plazas de la República festejando al grato acontecimiento. Y como imitando a las heroicas mujeres mendocinas cuando aportaron sus joyas y pertenencias para posibilitar la epopeya sanmartinniana, también en esta oportunidad de la guerra de las Malvinas, niños, mujeres, hombres y empresarios de todo orden donaron sus joyas y medios económicos en apoyo de la noble gesta.

Desde entonces se sucedieron los permanentes reclamos ante las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad y otros foros internacionales con el vano intento de reivindicar nuestros indiscutibles derechos.

Prueba de ello es que siempre se expresaron dándole la razón al más fuerte y todas las gestiones diplomáticas formuladas tuvieron como respuesta solamente expresiones de buenos deseos sin exigir el retiro del invasor.

Posteriormente, una resolución del gobierno de facilitar a la Unión Soviética hacer pie en la Patagonia, ocupando algunos puertos y facilitando la pesca indiscriminada, permitió que el usurpador británico, en una actitud de autodefensa, ampliara la zona de exclusión a 150 millas, con lo que la Argentina perdió virtualmente su soberanía en el gran mar del sur.

Quiero dejar bien en claro que al adoptar la patriótica actitud que menciono de toma de las Malvinas, que finalizó con una honrosa derrota de nuestros heroicos soldados, tuvimos que lamentar la muerte de muchos de ellos, que dieron su vida por la patria así como también un ejemplo al mundo de valor y de heroísmo frente a un enemigo que nos superaba en medios, hombres y armamentos. Como consecuencia de ello, al retirarse nuestro ejército del teatro de opera-

ciones, el enemigo usurpador, haciéndose eco del peligro que se cernía por nuestra presencia cercana, afectó la zona de exclusión de sólo 50 millas y posteriormente, por las razones que expreso, se amplió a 150.

En resumen, pretendo ser consecuente con el pensamiento y la filosofía del general Perón, cuando expresaba: a las instituciones de la República hay que preservarlas, porque son las bases de sustento donde se nutre la Nación, porque para ellas tenemos reservado un papel importante en el modelo argentino para el proyecto nacional. Entre ellas, colocaba en primer término a las fuerzas armadas y a la Iglesia."

Señor presidente: con esta breve exposición y con el pedido que he hecho anteriormente, doy por finalizadas estas palabras.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa

Sr. Vidal. — (Lee) "Señor presidente: llega hoy en revisión un proyecto de ley de defensa que no supera los graves errores conceptuales que, a nuestro juicio, contenía aquel otro votado por esta Cámara durante las sesiones ordinarias de 1986, que fuera congelado en la Comisión de Defensa de Diputados.

En efecto, no subsana las graves falencias de concepción del anterior, por cuanto éste insiste en fracturar el concepto de defensa nacional, separando los aspectos internos de los externos, contrariando la tendencia actual, nuestra experiencia histórica y la realidad del mundo en que vivimos.

Lo cierto es que los ideologismos y los prejuicios se han convertido en escollos insalvables para la elaboración legislativa de un rol para las fuerzas armadas; un rol que les permita articularse a la tarea común de preservar la unidad nacional y que sea a la vez conducente a la seguridad y al despegue de nuestra comunidad.

La Argentina de nuestros días atraviesa por un período de severo compromiso en su condición nacional. Superarlo requiere de todas las capacidades y de todos los esfuerzos para cerrar las vías a la disgregación y, simultáneamente, abrir los caminos de la transformación. No creemos que quede margen para el menosprecio del papel de las instituciones armadas ni para la indefinición de las hipótesis de conflicto en torno de las cuales éstas deben alistarse y organizarse. Sin embargo, observamos que se sigue sin consultar a estas realidades.

En oportunidad de tratar, en enero de 1984, las reformas al Código de Justicia Militar, nosotros advertimos que se abrían riesgos de graves enfrentamientos entre la civilidad y sus fuerzas armadas, si se dejaban de lado preceptos de

rango constitucional, como el del juez natural. Lamentablemente se eligió un sinuoso sendero en lugar de seguirse el recto camino de circunscribir los extremos de la responsabilidad penal y de determinar las debidas reparaciones con celeridad en su ámbito jurisdiccional natural. Dicho sendero, como podría corroborarse luego, no conducía a solución alguna y menos aún a reparaciones, sino a salidas de emergencia que a nadie satisfacen en su afán de justicia y que, en consecuencia, han terminado por dejar abiertas las dolorosas heridas del pasado. El efecto de transitar este sinuoso sendero ha sido el mantenimiento y aun la profundización del desencuentro entre civiles y militares.

A este inadecuado tratamiento de la cuestión militar se suma una pertinaz acción psicológica sobre la opinión pública, a la que se le niega la posibilidad de asumir el pasado con objetividad. Se la desinforma y por esta vía se estimula el ahondamiento del rechazo y la desconfianza. Se la instrumenta mediante maniobras agitativas, con consignas demagógicas —al estilo de democracia o dictadura— tendientes a mostrar a las fuerzas armadas como enemigas de la voluntad soberana del pueblo. Se induce a la desconfianza respecto de lo militar, sus valores, sus procedimientos y hasta su estilo, favoreciendo así abroquelamientos retardatarios, tanto en el ámbito civil como en el militar.

Este no puede ser el fundamento de una política de unidad militar. Pero nosotros, los desarrollistas, la defensa nacional representa la voluntad de todos los sectores y clases sociales que integran la comunidad nacional, de sostener su cohesión, enfrentando toda interferencia a su seguridad —entendida ésta como la situación en la cual los intereses vitales de la Argentina se hallan a resguardo de perturbaciones sustanciales— mediante el empleo coordinado de todo su potencial espiritual y material. Esta concepción global y dinámica concierne a la necesidad de preservar nuestra autodeterminación en un mundo cambiante y complejo y supone la superación de toda idea de aislamiento falsamente defensivo para insertar a la defensa nacional en el rango de posibilidades que brinda el desarrollo, en cuanto éste le da el sustento necesario y la fuerza suficiente. Ello supone fluidas relaciones tanto en el plano interno como en el externo, a fin de sentar las bases de una paz permanente y del aprovechamiento integral de todas nuestras potencialidades. Supone también la ejecución de tareas fuera de lo común para todos los sectores, conducentes a asegurar que el Estado sin cuestionamientos ni limitaciones, presida la vida nacional en una comunidad que

debe superar aceleradamente su subdesarrollo, que debe integrar su economía, sus riquezas y a todos sus sectores sociales. Este desafío plantea a las dirigencias y al pueblo en su conjunto conductas creativas e imaginativas, no rutinarias, afines con un programa de realizaciones que convoque a todas las energías nacionales.

El componente militar debe ser incorporado a esta gran tarea, ubicándolo mediante claras directivas de manera tal que pueda asumir la responsabilidad de sostener la plena vigencia del Estado nacional. Por ello los desarrollistas concebimos a la defensa nacional como el sistema mediante el cual se garantiza la seguridad de la Nación; por el que se preserva la organización nacional, sus instituciones, su patrimonio material y espiritual y el mandato de sus autoridades legítimas, de interferencias ilegítimas, provengan éstas de donde provinieren.

De allí que el Estado nacional disponga de la atribución constitucional de usar la fuerza conferida a las instituciones armadas, toda vez que sea un recurso inevitable frente a una agresión encaminada a destruir el Estado o a disputarle el monopolio de la fuerza.

Si el poder es por definición la suprema potestad rectora y coactiva del Estado, su cuestionamiento impune no es admisible, a menos que se esté dispuesto a asistir al derrumbe del sistema. La forma de resguardarlo es asegurando el monopolio legal del uso de la fuerza en manos del Estado. Obviamente, no se trata de un uso indiscriminado o que pueda ser abordado fuera del marco de la legalidad. Pero tampoco se trata de imponer limitaciones indebidas a la facultad de utilizar todo el potencial de que dispone el Estado nacional y su brazo armado ante un eventual intento de sustituir por medios violentos nuestras formas de vida y nuestro sistema republicano.

Sólo la agitación de los fantasmas del pasado, un pasado al que los argentinos no deseamos retornar, puede alimentar prevenciones que conducen a ignorar nuestra propia experiencia, así como los cruentos episodios que viven otros países en donde la guerrilla y el terrorismo operan en magnitudes antes desconocidas, prevenciones que terminan oscureciendo una cuestión que, en definitiva, es de sentido común.

Desafortunadamente, el sentido común no es lo que abunda. El proyecto venido en revisión, como el anterior, discrimina en materia de conflictos internos, admitiendo sólo las hipótesis de conflicto de carácter externo.

Es preciso dejar debidamente aclarado que en la Mesa del Consenso hubo acuerdo en no dar tratamiento a un proyecto de ley de defensa si-

milar al que estaba en consideraciones en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados.

Aquí se dio a entender que los diez puntos consensuados coinciden con lo establecido en el proyecto en revisión, pero en la Mesa del Consenso ocurrió exactamente lo contrario. Precisamente, para alcanzar el acuerdo sobre los diez puntos que finalmente firmaron las fuerzas políticas, es que fue retirado aquel proyecto que, básicamente, era el mismo que debatimos hoy.

Sobre ese proyecto no hubo consenso y sí lo hubo en la declaración genérica que, a nuestro juicio, admite la posibilidad de participación de las fuerzas armadas en hipótesis de conflicto interno.

Esa posibilidad es cuestionada por la letra y el espíritu del proyecto, en tanto se fractura el concepto de defensa nacional, que es un concepto integral y, como tal, abarca también lo que hace a la seguridad interior.

Que aceptemos la separación en dos cuerpos legales de estos aspectos de una misma cuestión es una simple formalidad. Lo que no admitimos —y esto es lo sustancial— es que se mutile el concepto de defensa nacional.

Para los desarrollistas, la integridad y globalidad del concepto de defensa nacional no se sustentan en aspectos jurídicos formales. Radican en el dato fundamental de que, planteada una hipótesis de conflicto o guerra de cualquier origen, capaz de comprometer la seguridad de la Nación, el monopolio del uso de la fuerza o el mandato de sus legítimas autoridades, el Estado nacional deberá recurrir a todo su potencial.

El proyecto de ley que estamos examinando no contiene, a nuestro juicio, una correcta interpretación del documento de diez puntos de la Mesa del Consenso. Ello es así, en tanto obstaculiza, traba, cuestiona la hipótesis de intervención de «todas las energías y fuerzas morales y materiales ante cualquier forma de agresión», como claramente especifica, sin prejuicios, la ley española que rige la materia. Se trata de una ley tomada parcialmente como modelo, pero sentando con respecto a la misma esta diferencia fundamental que condiciona, a nuestro juicio, en forma inadmisiblemente, las propias facultades constitucionales del presidente de la Nación, limitando la correcta concepción integral de la defensa nacional.

Se persiste así en transitar la senda oblicua que sólo conduce a que nuevas dificultades se precipiten en cascada. Mientras tanto, con o sin hipótesis encuadrada legalmente, el conflicto interno se dibuja en el horizonte; con mayor o

menor inmediatez, pero siempre con indeseables consecuencias, toda vez que el conjunto social, pese a haber conquistado la formalidad democrática, no cesa de sufrir la constante agresión del subdesarrollo con sus correlatos de achicamiento, marginación y pobreza. El envilecimiento de las condiciones de vida de las masas es caldo de cultivo para que la subversión se mimetice con las más justas reclamaciones.

Las prevenciones y prejuicios que tiñen el espíritu y la letra del proyecto en examen no nos permiten abrigar esperanzas respecto de que este instrumento contribuya a la pretendida integración de las fuerzas armadas a la sociedad democrática y al proceso constitucional.

Las ataduras a un pasado de desencuentros continúan dificultando el camino que los argentinos queremos transitar hacia el futuro. Este proyecto constituye un obstáculo más en el camino hacia la unidad nacional.

Valga, como ejemplo de las limitaciones que en este plano también descalifican el proyecto, la exclusión de los representantes de las fuerzas armadas como miembros natos del organismo encargado de asesorar al presidente en la determinación de las hipótesis de conflicto y de guerra, así como en las correspondientes estrategias.

En efecto, no existe otra explicación para la exclusión de quienes, por razones profesionales, deberían ser integrados como consultores necesarios, dadas sus funciones específicas.

Pero no sólo las prevenciones que esterilizan el proyecto sometido a examen ensombrecen el panorama de la defensa nacional. Más allá de las normas, es la situación concreta de nuestro sistema de defensa la que se encuentra comprometida, hasta un punto tal que es posible afirmar que la Argentina se encuentra en situación de franca indefensión.

De allí la imperiosa necesidad de aventar prejuicios y dejar de lado consideraciones contingentes para abordar la cuestión militar, diferenciando lo legítimo de lo espurio y dotando a quienes deben ser instrumento de la potestad rectora y coactiva del Estado, de los elementos legales y técnicos que les permitan enmarcar y desenvolver su acción, a la vez que les impidan confundir sus verdaderos objetivos.

Como lo señaláramos en anteriores debates, reiteramos en esta oportunidad que una solución global de la cuestión militar debe apuntar a: 1) concretar la responsabilidad política gubernamental de restañar las heridas en el cuerpo de la sociedad, superando la antinomia entre civiles y militares; 2) fortalecer y modernizar el sistema de defensa nacional, atendiendo al equi-

pamiento y jerarquización de las fuerzas armadas, así como a su preservación y prestigio, y trazar hipótesis de conflicto que se correspondan con la realidad; 3) articular las políticas de defensa y seguridad con la política de desarrollo nacional.

Por todos los fundamentos expuestos, señor presidente, que he expresado con toda sinceridad, voy a votar negativamente el proyecto de ley en consideración”.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra la señora senadora por Santa Fe.

Sra. Gurdulich de Correa. — (Lee) “Señor presidente: después de tres años consecutivos de tratamiento en ambas cámaras de este proyecto de ley de defensa nacional que hoy consideramos, se han llegado a compatibilizar, en el grado máximo, los distintos puntos de vista existentes en la materia.

Desde el comienzo pusimos de manifiesto la importancia del tema que entendemos constituye la piedra angular de cualquier sistema institucional que aspire a la continuidad y que refleje los intereses permanentes de la Nación.

El justicialismo concibe a la defensa nacional como un hecho integral en el que todos los argentinos somos protagonistas en alguna medida y que excede ampliamente el marco del instrumento militar de la defensa, que son las fuerzas armadas.

Cuando juntamente con el señor senador Vicente Saadi presentamos nuestro proyecto, lo hicimos con la convicción de que debía superarse una concepción restringida al instrumento militar, una concepción reglamentarista en este sentido y que debía plantearse en un marco más integral.

De este modo planteamos en ese proyecto de ley un sistema integral de defensa que fuera desde los aspectos doctrinarios hasta la producción para la defensa, la reorganización de las fuerzas armadas y de seguridad, los servicios de inteligencia, la defensa civil y la movilización.

A partir de estas circunstancias se tomó la decisión de llegar a una compatibilización de los puntos de vista, ya que se consideró imprescindible contar con este instrumento. Esto dio lugar a un proyecto común que obtuvo la sanción del Senado en octubre de 1986.

En el campo político coincidieron no sólo los proyectos sino también los señores senadores en la necesidad de superar el ordenamiento legal vigente que correspondía a la doctrina de la seguridad nacional, la que básicamente está sustentada en el Decreto ley 16.970 de 1966.

En realidad, para nosotros esta doctrina es anterior y se remonta a 1955, cuando organizaciones nacionales y populares fueron caracterizadas como enemigas de la Nación y tratadas como tales. Esto mereció el repudio unánime a nivel internacional.

Podemos tomar como ejemplo el documento de la Conferencia Episcopal de Puebla, que la definiera, más que como una doctrina, como una ideología que se impuso desde el exterior a los países latinoamericanos, y que tenía como uno de sus instrumentos la utilización de las fuerzas armadas.

Señor presidente: del mismo modo consideramos necesario terminar con la contradicción, que tanto daño ha hecho en nuestro país, entre las fuerzas armadas y el pueblo, entre lo que se ha dado en llamar «el poder militar» y «el poder civil», contradicción que a los únicos a quienes puede servir es a los enemigos de la patria, a los que atentan contra nuestro país y que han perjudicado tanto a nuestra vida política en los últimos años. Creo que debe terminarse esta contradicción y que esta legislación que tratamos hoy intenta aportar algo en este sentido.

En otros términos, y como base fundamental, hemos considerado a la defensa como la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas morales y materiales de la Nación, sin restringirnos a un enfoque netamente militarista. Esta idea de la defensa como integración de las fuerzas nacionales está presente en el artículo 2º del proyecto que hoy nos ocupa. Ello implica la necesidad de sancionar una ley básica, o ley marco, a fin de establecer las bases doctrinarias y un sistema de conducción que permita cubrir en un futuro la totalidad de la problemática de la defensa, la reorganización de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad, la necesidad de recomponer la producción para la defensa y la creación de un sistema nacional de información e inteligencia y la organización territorial y movilización entre otras cosas. Todos estos instrumentos legales son indispensables para sostener, como decíamos antes, esta concepción integral.

Señor presidente: las coincidencias conceptuales apuntadas han hecho posible establecer un criterio compartido en torno a la problemática de la defensa, y nos han permitido ubicar las diferencias en el plano operativo que tenían ambos proyectos en un plano no protagónico.

En los artículos 1º y 2º del Título I del proyecto compatibilizado, llamado «Principios básicos», queda aclarado el carácter integral y per-

manente de la defensa, estableciéndose los medios y los objetivos a alcanzar.

En el artículo 5º se define con exactitud el ámbito geográfico en que la Argentina debe desarrollar su política de defensa.

El artículo 6º, por su parte, expresa el doble contenido de la defensa. Por un lado, como derecho de todos los argentinos a participar en la defensa como una prolongación de su defensa propia en el campo colectivo. Y, por otro lado, como deber establecido en el artículo 21 de la Constitución, que en su primera parte expresa: «Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo nacional».

En el artículo 4º se establece la necesidad de deslindar los aspectos que hacen a la defensa nacional de los de la seguridad interior. Se intenta con este artículo evitar la puesta en práctica de doctrinas como la de la seguridad nacional, a que hicimos referencia anteriormente, lo que se pone de manifiesto claramente más adelante en el artículo 13 y en el cuadro anexo sobre mecanismos de alerta.

Señor presidente: consideramos que con estos artículos queda suficientemente aclarado lo que hay que defender, los medios a emplear y el ámbito geográfico de aplicación, así como también el doble sentido de derecho y deber que encierran para los argentinos las previsiones y acciones de un sistema de defensa concebido, como decíamos, en esta forma integral.

En el Título II del proyecto se establecen las finalidades del sistema de defensa, desarrolladas en todos sus aspectos de tipo técnico, hipótesis de conflicto, de guerra, de confluencia, los planes estratégicos, la movilización de recursos humanos y materiales y las acciones de la posguerra. Esto es lo reglado por el Título II, que habíamos llamado «Órganos y misiones».

En el Título III, llamado ahora «Estructura del sistema de defensa», se establecen cuáles son los integrantes de dicho sistema. El artículo 9º, en sus incisos a) a h), menciona al presidente de la Nación, al Consejo de Defensa Nacional, al Congreso de la Nación, al Ministerio de Defensa, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a las tres fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad y, finalmente, al pueblo de la Nación, tanto en la paz como en la guerra. El inciso h), que es el que precisamente se refiere al pueblo, fue en su momento muy debatido pero, a nuestro juicio, es correcta su inclusión en el presente proyecto y recalco, como decíamos antes, el carácter integral del problema de la de-

fensa que excede el campo específicamente militar.

En el artículo 10 se ratifican la atribución del presidente de la Nación como jefe supremo de ella y sus competencias y responsabilidades en la conducción de la defensa, de acuerdo con nuestros enunciados constitucionales. Esto aclara muchas dudas que se han planteado en este recinto.

Por los incisos a) y b) del artículo 10 se crean organismos dependientes del presidente. Me refiero al Consejo de Defensa Nacional para la conducción integral de la guerra y el Comité de Crisis para la conducción militar de la misma. Con esto también queda aclarada otra de las dudas que se plantearon en su momento.

El artículo 11 establece las atribuciones del ministro de Defensa y el 12 define las del Consejo de Defensa Nacional.

El artículo 13 establece con precisión un conjunto de situaciones de determinado carácter y gravedad y especifica, a su vez, el conjunto de medios para hacer frente a tales situaciones. El presidente de la Nación, asesorado por el Consejo de Defensa, determinará los medios a emplear en cada ocasión. Tales situaciones y medios se articulan entre sí, formando mecanismos de alerta que responden con medios determinados a situaciones determinadas. Asimismo, estos mecanismos de alerta limitan en algunas situaciones el empleo de algunos medios.

Todo esto puede apreciarse en el cuadro anexo al presente proyecto que describe en sentido horizontal las posibles situaciones de conflicto, a través de tres áreas: en primer lugar, la internacional que se subdivide, a su vez, en los sectores diplomático, económico, político y militar. La segunda área corresponde a la situación de conflicto nacional, subdividida a su vez en cuatro partes: conflicto social localizado, conflicto social generalizado, agresión interna y agresión militar. Esta última está definida como el alzamiento contra las autoridades constitucionales por parte de los integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad. La tercera área corresponde a la situación de desastres y comprende los siguientes aspectos: inundaciones, terremotos, epidemias, incendios y hambre.

Por su parte, cada una de las situaciones indicadas, a través de las subdivisiones que he señalado, se vuelve a dividir en una escala de gradación para el nivel de alerta, compuesta por tres estadios: mínimo, medio y grave.

En el plano vertical de ese cuadro figuran los medios posibles con que cuenta este sistema de defensa; es decir, para cada una de las divisiones, subdivisiones y niveles de gravedad

de las situaciones de conflicto se determinan los distintos medios que se pueden emplear y que tenemos a disposición en dicho sistema.

Como vemos, estamos en desacuerdo con algunas afirmaciones que se hicieron en este recinto en el sentido de que este proyecto de ley no contempla un sistema de defensa. A nuestro juicio, no sólo lo contempla sino que también plantea cuáles son todos los medios que tiene a su alcance este sistema de defensa y todas las posibles situaciones de conflicto que se pueden presentar expresadas en forma explícita en este cuerpo. Se enumeran como tales medios a las fuerzas armadas —incluido sus servicios de inteligencia—, la fuerzas de seguridad —Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina—, defensa civil, el sistema de informaciones e inteligencia no militar, la movilización de recursos, producción y servicios públicos y privados.

Como se verá en el cuadro, en algunas intersecciones de las situaciones de conflicto y los medios existentes figura una equis. En tales casos se establece que está vedada la utilización del medio en cuestión para la situación de conflicto dada.

Puede apreciarse que se veda expresamente la utilización de las fuerzas armadas para afrontar cualquier tipo de conflicto social, sea éste localizado o generalizado. Se evita así que se pretenda utilizar a las fuerzas armadas para sofocar conflictos sociales que deben tender a ser resueltos por otros medios, clausurando expresamente la aplicación concreta de la doctrina de la seguridad nacional.

A la vez, se habilita la utilización de las fuerzas armadas para afrontar toda situación de conflicto internacional o de desastre y en todos los casos posibles de agresión militar.

Pretendemos así restablecer la que debe ser la naturaleza de las instituciones castrenses en el sistema constitucional y volverlas a la jerarquía de su misión dentro de este sistema.

Se veda igualmente la utilización de las fuerzas de seguridad en las situaciones de conflicto caracterizadas como de conflicto social localizado de niveles mínimo o medio de conflicto social generalizado de nivel mínimo. Igua- les restricciones se establecen para esos casos en la utilización de la movilización de recursos, producción y servicios tanto públicos como privados. De tal manera, se tiende a garantizar la legítima defensa de sus derechos e intereses por parte de los diversos sectores de la comunidad, aun cuando generen situaciones de conflicto, ya que los mismos deben resolverse con mecanismos propios del sistema democrático

y sin apelar a instrumentos propios del autoritarismo.

Cabe aclarar que la autorización para recurrir al sistema de información e inteligencia —importa recalcar que no se incluye a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas que como dijimos están dentro de las propias fuerzas— en todas las situaciones de conflicto descritas en este programa de mecanismos de alerta se explica por cuanto sin contar con los elementos proporcionados por ese sistema no se podría en muchos casos siquiera tomar conocimiento de la existencia misma de esa situación de conflicto.

Recalcamos que este programa describe las situaciones de posible conflicto y los medios a emplear en ellas, vedando la utilización de algunos en determinadas situaciones, lo que por supuesto no implica, como es evidente, imponer la obligatoriedad de su utilización por cualquiera de las otras situaciones.

Por lo demás, juzgamos que el cuadro que grafica el programa de mecanismos de alerta se explica por sí mismo. Consideramos de especial importancia la inclusión de este cuadro como parte del proyecto de ley, por cuanto permite conjugar en forma armónica los valores de libertad y de orden; evita que el ejercicio abusivo de las libertades particulares mal entendidas conspira contra el orden constitucional o resienta los mecanismos de defensa de la Nación atentando así contra la libertad de todos, y, a la vez, preserva el ejercicio legítimo de las libertades y derechos particulares, en tanto éstos forman parte esencial e inseparable del sistema constitucional y de la Nación que se procura defender.

De tal modo, acudiendo a una metodología moderna y a un mecanismo objetivo, se puede hacer coincidir en adecuado equilibrio la defensa integral del sistema democrático con la defensa integral de la Nación.

En el artículo 14 se define que el presidente de la Nación es el que decide en definitiva los medios a emplear; ya que las elaboraciones del Consejo de Defensa Nacional se elevan para que él adopte la resolución que juzgue pertinente, a la vez que se define la integración del citado Consejo con la participación, como ya se ha dicho, del señor vicepresidente de la Nación y de los ministros del gabinete nacional; como representantes parlamentarios participan tres senadores y tres diputados de las comisiones de Defensa de las Cámaras respectivas.

La presencia de representantes de las organizaciones empresarias y de la producción en el citado Consejo, propuesta por nuestro pro-

yecto original, no ha sido compartida en principio por el oficialismo y su participación ha quedado librada a la facultad del presidente de la Nación. Nosotros confiamos en que siendo coherentes con la política del gobierno nacional, que ha pretendido dar mayor participación a las organizaciones sociales, éstas sean llamadas.

Del mismo modo lo planteamos para el Estado Mayor Conjunto, propuesta que también había sido incluida en nuestro proyecto original, porque creemos en la importancia de su participación.

Este Consejo de Defensa Nacional, tendrá además como función transitoria —y como tal está incluida en el Título VIII, de “Disposiciones transitorias”, artículos 45 y 46— la elaboración en el plazo de un año de los anteproyectos de ley que compondrán lo que para nosotros debe ser el Código Nacional de Defensa, los que se elevarán al Poder Ejecutivo para su presentación al Congreso Nacional.

El artículo 46 define los anteproyectos a presentarse, que constituirán el código citado. Los primeros serán los de las leyes orgánicas de las fuerzas armadas, incluyendo las disposiciones relativas al planeamiento, la logística, la educación y conducción de ellas.

La norma legal que encuadra el instrumento militar de la defensa integral, cuál debe ser el régimen al que se sometan, cómo deben constituirse, cuál debe ser su despliegue, su operatoria y su conducción, es de tan fundamental importancia, extensión, complejidad y detalle que como las restantes en esta enunciación excede el título de una ley integral.

Por eso se recomienda al Consejo la elaboración de los anteproyectos respectivos que permitirán adecuar a las fuerzas armadas a los principios, necesidades y criterios fijados en el presente proyecto de ley de defensa integral y a las circunstancias que vive la Argentina.

En segundo lugar está la ley orgánica de producción para la defensa. Obviamente, éste es un aspecto primordial de un sistema de defensa nacional, sobre todo en las actuales circunstancias de acelerado desarrollo tecnológico. Baste mencionar a Mosconi, Savio, el brigadier San Martín o los almirantes Domecq García y Portillo para comprender la importancia de los insumos y producciones vitales que condicionan la autodeterminación de la voluntad de nuestro país en cumplimiento de sus objetivos de defensa.

La tercera es la ley de organización territorial y movilización para la defensa. Desde luego que en la medida que debe pensarse en la organi-

zación territorial en función del teatro de operaciones y sus normas de funcionamiento. Tan importante o más que eso es una normativa para la ocupación pacífica de los espacios vacíos de nuestro territorio, que hacen a la estrategia de organización territorial.

También, señor presidente, hemos tenido en cuenta las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad —Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina—. Cabría reiterar aquí gran parte de lo expresado respecto de las leyes orgánicas de las fuerzas armadas, particularmente en cuanto a la necesidad de actualizar y compatibilizar con el sistema de defensa integral lo que hace a la misión, organización y función de las fuerzas de seguridad.

También hemos definido la ley de creación de un sistema nacional de información e inteligencia. Desde muy antiguo es conocida la importancia decisiva de estar bien informados para actuar con eficacia en las situaciones de conflicto.

Es necesario que este sistema nacional asegure una información oportuna y ajustada y, por otra parte, que los sistemas de control de sus estructuras impidan maniobras delictuosas como aquellas en las que se han visto involucrados recientemente funcionarios de estos organismos. A tales efectos de control resulta pertinente la intervención del Poder Legislativo como ya lo expresamos y adelantamos.

Hemos definido asimismo la necesidad de una ley de secreto de Estado, que debe procurar el adecuado equilibrio entre la norma republicana de publicidad de los actos de gobierno y la preservación del secreto que, de ser conocido por los adversarios potenciales o reales de la Nación, podría hacer peligrar su defensa.

Como expresamos anteriormente, lo referente a la legislación futura sobre defensa nacional figura en el presente proyecto en los artículos 45 y 46 del Título VIII llamado “Disposiciones transitorias”.

Volviendo al artículo 15, en él se establece el régimen de los organismos de inteligencia, que funcionará hasta tanto se sancione la legislación correspondiente, de acuerdo con lo que se establece en los artículos 46 y 47.

En los artículos 16 a 19, inclusive, se establecen las atribuciones del Estado Mayor Conjunto, que funcionará además como órgano de trabajo del comité de crisis.

En el Título IV, sobre organización de las fuerzas armadas, se establecen elementos para su actual desenvolvimiento, hasta tanto se concrete su reorganización de acuerdo con lo previsto en los artículos 45 y 46.

Otro tanto se establece en el Título V, sobre servicio de defensa nacional y en el Título VI, sobre organización territorial y movilización, que prevén disposiciones para su funcionamiento actual, hasta tanto se sancione la legislación futura.

El Título VII se refiere a "Disposiciones generales", modificatorias de la legislación hasta hoy en vigencia.

El Título VIII, como ya lo manifestamos, corresponde a las disposiciones transitorias.

En el anterior proyecto compatibilizado se había establecido, en su artículo 36, que debían contar con la aprobación del Congreso todos los tratados, acuerdos o convenios de carácter militar o de inteligencia.

Considerábamos a este respecto que la constante y prolongada presencia de gobiernos de facto, que signó la vida argentina en los últimos años, dejó entre sus muchos saldos negativos la existencia de vínculos militares con potencias extranjeras que, al no haber sido aprobados por el Congreso de la Nación, carecen en verdad de efectiva validez jurídica y pueden comprometer la independencia nacional. De allí este artículo que proponía abolir en forma genérica esta irregularidad.

Posteriormente, y por expresa manifestación del Ministerio de Defensa, se lo eliminó por considerar que la presencia del mismo dificultaba en grado sumo cualquier tipo de vinculación comercial o tecnológica, que nuestro país necesita establecer para potenciar nuestra producción para la defensa. Se consideró entonces que la presencia de legisladores de ambas Cámaras en el Consejo de Defensa Nacional daría al Congreso un grado de participación en este tipo de vínculos y se optó por no interponer ninguna traba al desarrollo de nuestras industrias para la defensa, lo que estimamos de relevante necesidad.

Señor presidente: Como expresamos inicialmente, el proyecto que hoy nos ocupa ha tenido un prolongado trámite de casi tres años. En octubre de 1986 se llegó a un proyecto compatibilizado en el marco de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, en la que trabajamos con el senador Berhongaray y otros señores senadores de los distintos bloques, y con la participación del Ministerio de Defensa.

Recién a fines de 1987 se logró obtener el actual proyecto, en el marco más amplio de las comisiones de Defensa de ambas Cámaras y contando también con la participación del Ministerio de Defensa.

La importancia misma del tema, la necesidad de definición perentoria para nuestro actual sistema institucional, la situación heredada del pasado y las agitaciones producidas recientemente en el campo militar han comprometido en todo momento nuestra voluntad para dotar a la Nación de este instrumento sobre la base de un consenso lo más amplio posible.

Dado su trasfondo ideológico, no ha sido fácil acordar un texto único que reflejara las coincidencias fundamentales. Más allá de las imperfecciones que pueda tener su texto, debemos confiar en que los organismos creados, como el Consejo de Defensa Nacional, a través de su funcionamiento y de las leyes a elaborarse en forma integral, inicien un proceso de consolidación de esta área que acompañe la consolidación efectiva de nuestro sistema institucional.

Debemos pensar en esta disposición como una ley-marco que funcionará como la piedra fundamental del sistema de defensa que debemos construir en forma simultánea con el perfeccionamiento de nuestro sistema institucional.

Consideramos que el actual proyecto que viene nuevamente con sanción de la Cámara de Diputados respeta en grado sumo la sanción del Senado, de octubre de 1986. En aquella ocasión dijimos que habíamos legislado con eficacia y en dirección de las coincidencias que hoy nos convocan y que manifestamos desde el primer momento.

Me voy a permitir solicitar, como parte de la conclusión final, que se inserte en el Diario de Sesiones la síntesis conceptual de los fundamentos de nuestro proyecto original, con la que habíamos coincidido en sus rasgos fundamentales y que responde, en buena medida, al proyecto que hoy nos ocupa.

—Asentimiento.¹

Sr. Gurdulich de Correa. — Para finalizar, considero que el actual proyecto sienta las bases para hacer posible un sistema de defensa que el país realmente necesita, y esperamos que nuestro esfuerzo para lograr el consenso más amplio posible sirva también para sentar las bases de la unidad nacional a la que todos aspiramos como integrantes del pueblo argentino.

Sr. Presidente (Otero). — Como no hay más senadores anotados en la lista de oradores, so llamará para votar.

—Así se hace.

¹ Ver el Apéndice.

Sr. Rubeo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Rubeo. — Solicito que por Secretaría se informe cuántos señores senadores hay en la casa.

Sr. Presidente (Otero). — Se está averiguando, señor senador.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Solicito que se pase lista de los presentes y se informe el número de senadores en la casa.

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se pasará lista.

— Así se hace.

— Están presentes los señores senadores: Aguirre Lanari, Amoedo, Berhongaray, Bravo, del Villar, Falsone, Cass, Gil, Gurdulich de Correa, Lafferrière, Malharro de Torres, Mazzucco, Nápoli, Otero, Romero Feris, Rubeo, Sánchez, Solari Yrigoyen, Trilla, Velázquez y Vidal.

Sr. Lafferrière. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

Sr. Lafferrière. — Simplemente, deseo recordar a la Presidencia que el senador por Entre Ríos, doctor Brasesco, se encuentra en este momento enfermo y en consecuencia está justificada su inasistencia.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — ¿Por Secretaría se ha hecho el recuento definitivo?

Sr. Secretario (Macris). — Hay 21 señores senadores presentes.

Sr. Presidente (Otero). — La Presidencia informa que en la casa hay 22 señores senadores. Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

Sr. Berhongaray. — Quiero expresar mi profunda desazón por el fracaso de esta sesión y mi incompreensión por la actitud adoptada por algunos señores senadores que permaneciendo en la casa hasta hace pocos minutos, no se presentan a votar en este momento un proyecto de ley que fue compatibilizado y consensuado por los dos partidos mayoritarios y por dos fuerzas políticas más, con el respaldo de los respectivos organismos políticos, tanto del Comité

Nacional del radicalismo como del Consejo Superior Justicialista.

Quiero rescatar también la actitud de los senadores de partidos provinciales aquí presentes que, pese a tener discrepancias leales, como públicamente lo dijeron, permanecieron en el recinto largas horas, asumiendo su responsabilidad, igual que el senador Amoedo y el senador Vidal, con quienes podemos discrepar, sin por ello dejar de rescatar su sentido de responsabilidad.

Es lamentable esta vieja deuda que tiene el Parlamento argentino con el país y con las fuerzas armadas, con nuestras queridas fuerzas armadas, a las cuales debemos desde hace cuatro años esta ley de defensa; la debemos a todo el país, pero a las fuerzas armadas en especial.

Es lamentable que a pocos minutos de la votación desaparezcan muchos de los integrantes de este cuerpo. Algunos tendrán sus motivos, pero no queremos pensar que los que han inducido a otros a no estar presentes en este momento se encuentran relacionados con algún...

Sr. Rubeo. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Berhongaray. — Cuando termine de hablar.

Sr. Rubeo. — Yo le ruego...

Sr. Berhongaray. — No quisiera pensar que la motivación estuviera vinculada con alguna otra cuestión que no sea la estrictamente relacionada con esta ley.

Sr. Presidente (Otero). — Para hacer manifestaciones en minoría tiene la palabra el señor senador por Santa Fe.

Sr. Berhongaray. — No he terminado, señor presidente.

Sr. Rubeo. — Se trata de una exhortación, una respetuosa exhortación que quería hacer al señor senador a fin de no entrar al fondo de la cuestión y llegar a calificaciones que nos obligaran en minoría a verter conceptos que tendrían vinculación con la problemática nacional en su conjunto, y no con este tema en particular.

Como considero que la ponderación del señor senador interpreta lo que yo quiero decir, y en mérito a que nuestra presencia de alguna manera confirma lo que es el espíritu partidario en la materia, ruego al señor presidente que por favor declaremos levantada la sesión.

Sr. Presidente (Otero). — En cuanto termine el señor senador.

Yo exhorto también a que no se repita...

— Hablan varios senadores a la vez.

Sr. Presidente (Otero). — Yo exhorto a la Cámara...

Sr. Berhongaray. — Continúo...

Sr. Presidente (Otero). — ...a que no se produzcan las manifestaciones en minoría, que están dando lugar...

Sr. Rubeo. — Nos vamos a ver obligados a retirarnos o a afrontar un debate en minoría, como corresponde...

Sr. Cass. — No es nuestra intención, señor senador.

Sr. Berhongaray. — Continúo, señor presidente.

Sr. Presidente (Otero). — No hay nada en discusión, así que...

Sr. Berhongaray. — Continúo con mis expresiones...

Sr. Presidente (Otero). — ...concluya, señor senador.

Sr. Berhongaray. — El señor senador por Santa Fe, que me conoce desde hace bastante tiempo, sabe que siempre la prudencia y la moderación han sido elementos que han marcado constantemente mi conducta.

Quédese tranquilo; no vamos a repetir algunas tristes sesiones en minoría que ocurrieron en este recinto. Tenemos un alto concepto de este cuerpo y un alto sentido de la responsabilidad.

Lamentablemente tenemos que expresar nuestra desazón; lamentablemente seguimos con esta deuda. Ojalá esto sirva una vez más para aprender...

Sr. Presidente (Otero). — Queda levantada...

Sr. Sánchez. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por...

Sr. Rubeo. — Pido la palabra para verter breves conceptos. Perdón, señor senador Sánchez.

Sr. Presidente (Otero). — En minoría tiene la palabra el señor senador por Santa Fe, y luego el señor senador por La Rioja.

Sr. Rubeo. — Le agradezco, señor presidente.

Creo que una circunstancia sumamente difícil hace que tomemos todos conciencia de la situación singularísima que estamos viviendo en los actuales momentos.

Una situación de extrema delicadeza hace que meditemos para la búsqueda del concepto acertado a fin de no instalar una polémica que se convierta en tendenciosa y desbarate ese es-

seer en mérito, repito, a la situación delicadísima que vive la República en el marco de su tremenda problemática.

No podemos desconocer, señor presidente, que aquí están faltando senadores de todas las bancadas. No quiero que quede flotando en el ambiente que solamente se encuentran ausentes senadores de la bancada justicialista, sino también del partido oficial, que tienen tanta obligación como cualquier otro de estar presentes en el recinto; y algunos de sus integrantes también se hallan ausentes.

En segundo lugar, creo que no podemos desconocer que frente a este tema se ha realizado una tremenda tarea de acción psicológica que a nosotros, como partido de la oposición, nos deprime sobremanera, entendiéndolo que se vulneran aspectos, potestades y facultades del Poder Legislativo, cuando se pone en boca de un ministro de la Nación la posibilidad de que el presidente de la República vete la ley de asociaciones profesionales. Esto ha provocado una clara y profunda sensibilidad en los hombres de mi partido y merecerá que en las próximas horas existan las aclaraciones pertinentes...

Sr. Presidente (Otero). — Le ruego al señor senador...

Sr. Rubeo. — ...porque si no, quedará desvirtuada la función de cada uno de nosotros.

Sr. Presidente (Otero). — El señor senador conoce mi trato especial para con todos los senadores.

Sr. Rubeo. — Ello explica esta hipersensibilidad que expusimos y que tiene razones valederas.

Sr. Presidente (Otero). — Acá no hay nadie que tenga derecho a decir que esto está a cambio de lo otro.

Sr. Rubeo. — No estoy diciendo eso.

Sr. Presidente (Otero). — Absolutamente nadie.

Sr. Rubeo. — Yo le ruego, señor presidente...

Sr. Presidente (Otero). — Yo declaro levantada la sesión.

Le pido perdón al señor senador por La Rioja, pero no quiero que avancemos.

Sr. Rubeo. — Usted levante la sesión, pero deberíamos avanzar...

Sr. Presidente (Otero). — Queda levantada la sesión.

—Son las 18 y 7.

MARIO A. BALLESTER.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

A P E N D I C E

INSERCIONES

1

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO FERIS

Aclaración de dirigentes del Pacto Autonomista Liberal

A raíz de una información sobre el anuncio del debate en la Cámara de Diputados sobre la ley de defensa, publicada anteayer en este matutino, los delegados del Pacto Autonomista Liberal de Corrientes a la Comisión de Defensa de la llamada Mesa del Consenso Democrático, diputado nacional Carlos Tomasella y doctor Diego Martínez Estrada, formularon la siguiente aclaración:

"En la página 6 del día 28 del corriente, se informa que el proyecto de ley de defensa acordado entre justicialistas y radicales, actualmente en tratamiento en el Parlamento Nacional y presentado en forma previa a la Mesa del Consenso Democrático "se aprobó por unanimidad por todos los partidos políticos representados en ella, salvo la Ucedé...".

"Lo expuesto es absolutamente inexacto. En la Comisión de Defensa de la multipartidaria arriba mencionada, desde un primer momento, la Ucedé, el Pacto Autonomista Liberal, el MID, el bloquismo, los demócratas progresistas y el Partido Federal hicieron observaciones de fondo y de forma con diferencias de matiz en la gran mayoría de los casos. Luego del retiro de la Ucedé con posterioridad a la redacción del comunicado citado las objeciones subsistieron advirtiéndose con claridad la postura defendida por los dos partidos mayoritarios con apoyo del PI y de la democracia cristiana y la sostenida por los otros partidos arriba mencionados con alguna diferencia de grado menor.

"Cabe destacar que las objeciones más importantes al proyecto se centraron en el restringido concepto de defensa nacional que adopta; la no inclusión en el CODENA (Consejo de Defensa Nacional) de los jefes de los Emgffaa y del jefe del EMC; la falta de previsión expresa en el marco interno de las facultades que otorga al presidente de la Nación el artículo 86 inciso 17 de la Constitución Nacional, para mencionar sólo algunas. El comunicado de 10 puntos efectuado por la comisión aludida con respecto a la ley de defensa acordada por radicales y justicialistas no dijo absolutamente nada sobre el texto expreso del proyecto, ya que sólo se señalaban pautas muy generales sobre la materia, expresándose tan solo en el punto 1: «Es necesario sancionar las normas legales que provean a la defensa común y a garantizar la paz interior».

"A partir del comunicado genérico se advirtió una dilación en reunir la comisión citada, y al manejo peculiar de la información de lo allí ocurrido, que exhibía logros donde había disenso, junto con otros factores, derivaron entre otras cosas en que la reunión de cierre efectuada por el presidente de la Nación no contara

con la presencia de los representantes del Pacto Autonomista Liberal ante la mesa del plenario.

"Para terminar, el disenso de la Comisión de Defensa de la Mesa del Consenso fue recogido ampliamente por diversos medios de información."

2

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SOLARI YRIGOYEN

Partido Acción Transformadora. Texto del documento "La Reforma Militar - Fuerzas Armadas y Sociedad Democrática".

Objetivos de la reforma militar

De todo lo que antecede se desprende que los objetivos de la reforma militar consisten básicamente en:

- a) Lograr la reinserción de las fuerzas armadas en una sociedad democrática y pluralista;
 - b) Asegurar la subordinación y el acatamiento de las fuerzas armadas a las autoridades constitucionales;
 - c) Adecuar la organización, doctrina, despliegue, armamento y equipos a las reales necesidades de la defensa nacional y a las posibilidades de la economía;
 - d) Establecer una cadena de mandos efectiva y flexible;
 - e) Compatibilizar el gasto militar con los recursos presupuestarios y con los requerimientos de las demás áreas;
 - f) Modernizar el equipamiento de las fuerzas armadas para convertirlas en un dispositivo de gran movilidad y máximo poder de fuego;
 - g) Racionalizar la estructura de mandos reduciendo al mínimo el número de jefes superiores;
 - h) Reformar profundamente los planes, programas y métodos de enseñanza de los institutos militares, y revisar la composición de sus cuadros docentes;
 - i) Excluir de la órbita militar todas las actividades industriales, financieras y de servicios, así como todas las propiedades inmuebles, que no respondan directamente a necesidades del servicio;
 - j) Limitar la competencia de los tribunales militares a los delitos y faltas específicamente militares;
 - k) Reducir, reformar y aun suprimir el servicio militar obligatorio en tiempo de paz como método principal de reclutamiento de tropas;
 - l) Planear y ejecutar la gradual integración operativa y logística de las fuerzas con un criterio estratégico moderno, adecuado a las características actuales de la acción bélica;
 - m) Limitar la acción de los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas al campo de la información militar en el exterior, bajo la dirección y coordinación
 - n) Desarrollar una doctrina militar conjunta.
- de la Central Nacional de Inteligencia;

3

SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SALIM

Informe de comisión Nº 1

Tema: "Conclusiones sobre el sistema de defensa nacional".

1. Introducción

Las bases doctrinarias y políticas del justicialismo buscan en su esencia que el país se desarrolle en paz, que su crecimiento sea una verdad ineludible y que la defensa de sus intereses vitales y del grupo humano que lo sustenta, haga realidad las expresiones históricas del Movimiento Nacional Justicialista: soberanía política, independencia económica y justicia social.

En ese criterio, el sistema de defensa nacional busca en la figura del conflicto, desarrollar todos los mecanismos y estructuras que sirvan para imponer la voluntad política de la Nación. En primera instancia durante la paz y si fuera menester durante la guerra.

En este último caso, uno de los mecanismos privilegiados es el orden militar, considerado instrumento de confrontación final, al mejor estilo de definición de la guerra: "...continuación de la política por otros medios...".

Conclusiones sobre defensa nacional

2. Concepto

La defensa nacional es una actitud permanente, de carácter integral y con sentido abarcativo, hacia áreas que confluyen y que dominan el panorama político de una nación. No puede haber defensa nacional si se ignora la cultura de un pueblo, su educación, su salud, su economía, su sistema jurídico, la existencia de sus fuerzas armadas, etcétera.

En tal sentido, podemos ensayar una definición, sería la siguiente: "Es una actitud ciudadana, que obliga a la integración y acción coordinada de todos los componentes del sistema, con la finalidad de garantizar de manera permanente la soberanía política, la independencia económica y la justicia social de la Nación Argentina".

3. Vigencia

Al tratarse de la Nación, en sí misma, la concepción del sistema tiene vigencia permanente y su aplicación es de carácter integral en todo su recorrido. En consecuencia, todos sus componentes recrean sus líneas de proyección en ese marco.

4. Fundamento legal

La Constitución Nacional, en su contenido, es determinante en cuanto a fijación de conceptos que regulen y brinden el marco legal para el normal desarrollo del sistema.

De ella, se desprenden leyes, reglamentaciones y códigos, que en su conjunto son los instrumentos institucionales que habilitan a los componentes del sistema en un comportamiento ideal. Como tales, requieren su revisión permanente, por cuanto, de su actualización, de-

penderá la dinámica del sistema, llevándolo a una rápida interpretación y justa aplicación de sus términos.

Para el caso del "componente militar", se visualiza de mayor interés, en la legislación de las fuerzas armadas, los siguientes aspectos:

- Código de Justicia Militar y su reglamentación.
- Despliegue territorial y movilización de reservas.
- Bases presupuestarias.
- Modernización y equipamiento.
- Bases de formación, capacitación y perfeccionamiento.
- Legalización y consolidación patrimonial de estructuras históricas.
- Servicio militar.
- Doctrina militar.
- Inteligencia militar.

5. Jurisdicción política y geográfica

En el marco de las instituciones democráticas y en el límite cierto de nuestra soberanía territorial el sistema de DN, encuentra campo útil para su conveniente desarrollo.

En esa jurisdicción, teniendo como escenario el país mismo y a su exclusivo servicio, se extienden todos sus componentes. Es así, que la educación forma y prepara el elemento humano del futuro, la economía busca las mejores posibilidades de desarrollo y bienestar garantizando una soberanía posible, las relaciones exteriores la mejor inserción en un mundo libre y al margen de condicionamientos ajenos a nuestro ser, las instituciones políticas formulando los mejores proyectos para un desarrollo creciente y dinámico, las fuerzas armadas integradas en un marco jurídico que regule y precise su comportamiento en el tiempo de la paz y en el de la guerra.

6. Integración del sistema

De qué manera se concibe la funcionalidad de un sistema, si no es a través de la integración de sus componentes. Ello es así, y a través de fórmulas simples buscaremos esa participación, que resulta útil y necesaria. No podemos pretender la presencia de un argentino imbuido de esa fe que debe caracterizar a un ciudadano responsable de sus manifestaciones de adhesión hacia la Nación, si previamente en su formación no se cimentaron los valores de una cultura, que sea el sostén obligado del sistema. Simultáneamente, deberán prevalecer exigencias que se dispongan en forma ordenada y coadyuvantes al logro de un resultado racionalmente elaborado.

No debemos aceptar que cada componente se desarrolle individualmente, sin contar en su momento con la influencia u opinión de los restantes, sin correr el grave riesgo de alcanzar un producto diferenciado y carente de la identidad del conjunto.

Allí, en ese momento crítico, deberá estar presente la figura del conductor político, para fijar las bases de equilibrio y de justa participación de los componentes, sin privilegios de un sector en desmedro de otros. Prevalece, sin duda, la afirmación doctrinaria: "La organización vence al tiempo".

7. Políticas de aplicación

Son las que orientan en forma inequívoca la institución país y plenamente aceptadas por la sociedad a través de los poderes constituidos.

La "Institución país", precedentemente referida, requiere una determinada política económica, educativa, jurídica, etcétera, que determine en forma concreta el perfil del país que pretendemos imponer y mantener a través del sistema de defensa nacional en análisis.

En consecuencia, dicho sistema habrá de ajustar su presencia a las exigencias políticas, impuestas al conjunto, para su desarrollo armónico y crecimiento permanente.

8. Revisión del sistema vigente

a) En relación con el componente militar:

1. Urgente definición de la HC / HG.
2. Recreación de la figura del secretario y comandante del arma respectiva.
3. Participación de las fuerzas armadas en el desarrollo del país (educación, salud, tecnología, producción, etcétera).
4. Integración participativa de las fuerzas armadas en el proyecto político del país.
5. Unificación de la logística militar.
6. Legislación y doctrina técnico-profesional actualizadas al momento político del presente y del futuro.
7. Modernización y equipamiento de las fuerzas armadas.

b) En relación con:

- Educación.
- Economía
- Justicia
- Salud
- Relaciones exteriores
- Población, etcétera.

LEY DE DEFENSA NACIONAL

Comentario sobre las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados

Artículo 1º — La eliminación del segundo párrafo le ha quitado mayor fundamento como concepción doctrinaria integral siendo conveniente que se especifique que esta norma legislativa reglamenta la doctrina que como objetivo establece la Carte Magna.

Artículo 2º — El agregado sobre las fuerzas armadas la parcializa casi totalmente quitándole integralidad. Es por eso que a partir de este artículo se legisla casi exclusivamente sobre las fuerzas armadas. Es erróneo legalizar que la defensa nacional es patrimonio de las fuerzas armadas.

Se ha quitado el último párrafo "así como el patrimonio..." que no limita, por el contrario ratifica conceptos que es necesario remarcar.

El artículo 4º ha sido agregado como un concepto discrecional que es muy peligroso. La defensa nacional de por sí involucra la seguridad nacional y la seguridad interior. Existen circunstancias donde se ve afectada la seguridad interior por intromisión desde el exterior en forma parcial o regional sin llegarse a la agresión total contra el país. De ahí la necesidad de normalizar la defensa nacional en forma integral.

Artículo 5º — Transcribe el artículo 3º anterior más el agregado del último párrafo que no es objetable.

El título II ha sido agregado en forma completa. No es correcto que las acciones que establecen los artículos 7º y 8º sean una "finalidad", que quiere decir: "Fin con que se hace una cosa", o sea "objetivo" y esto ya está especificado en el título I. Estas acciones que se proponen en este título II están especificadas de forma más conceptual y orgánica en los artículos 5º y 8º del proyecto anterior del Senado.

El título III ha sido agregado como "estructura" del sistema y luego establece los integrantes. Estos términos no son sinónimos ni abarcativos. La estructura es el "modo" como está hecho algo y su composición material. Está mejor expresado y más coherente en los artículos 7º (que fue sacado) y el 10 del proyecto del Senado. En el artículo 9º de este título III agregado se incluye como integrantes del sistema de defensa nacional a la Prefectura y Gendarmería. Esto se contradice con lo expresado en el cuestionado artículo 4º donde separa totalmente la defensa nacional de la seguridad interior (III). El inciso h) es demagógico y está incluido en el artículo 2º nuevo. Por eso es más clara, coherente y conceptual la redacción de los artículos 2º, 7º y 10 de la propuesta del Senado.

Artículo 10. — Es el anterior artículo 5º donde se cambió el inciso b) estableciendo un comité de crisis que no está definido en ningún lado. Es más lógico y de acuerdo con la experiencia en el tema establecer el comité militar que propone el anterior artículo 5º y que además define con precisión en el artículo 13 y 14.

Artículo 13. — Es el anterior artículo 9º que fue cambiado haciéndolo confuso y por ello contradictorio pues habla de un cuadro agregado como anexo sin definir sus elementos orgánicos, lo que da motivo a polémicas interpretativas. Es más completa y clara la anterior redacción.

Artículo 14. — Es el anterior artículo 10 cambiado.

Es lógico que lo integren todos los ministros pensando en el concepto integral y total de la defensa nacional como así también la autoridad de inteligencia. Lo que no es necesario ni tampoco conveniente especificar que el ministro de Defensa podrá ser acompañado por las autoridades militares en actividad. Por un lado sectoriza y redundante el concepto expresado en el último párrafo. Por otro lado la decisión en el máximo nivel de la estrategia nacional en defensa no debe ser participativa de las fuerzas armadas. Con el mismo criterio cualquier ministro puede ser acompañado de alguno de sus secretarios de Estado. Para ello lo establecido en el último párrafo.

Artículo 15. — Es el anterior artículo 19. Conceptualmente no hay diferencias pero es más claro el anterior artículo 19. Se "lee" mejor.

Artículo 19. — Ha sido agregado pero sin definir el comité de crisis.

Artículo 31. — Es el anterior artículo 28 cambiado. Establece como función "el control y vigilancia de las aguas jurisdiccionales de la Nación". Nuestro país reclama las 200 millas como límite de sus aguas jurisdiccionales y la Prefectura debe ejercer su función policial hasta las 12 millas, el resto es responsabilidad de la Armada.

¿Soberanía y jurisdicción?

Artículo 46. — Es el anterior artículo 12.

En el inciso e) se agregó "que contemple el control, parlamentario".

Es más lógico y conducente hablar de participación y no control.

4

SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GURDULICH de CORREA

Síntesis conceptual del proyecto original

1. En realidad estamos más que nadie contra la doctrina de seguridad nacional. No queremos ejércitos de ocupación.

2. No queremos que las fuerzas armadas intervengan para reprimir al pueblo, cuando se manifiesta en defensa de sus legítimos intereses, sofocando por la fuerza conflictos sociales que deben solucionarse por otras vías.

3. Queremos una política integral de defensa, sustentada no solamente en las fuerzas armadas, sino en todos los recursos de la Nación.

4. Creemos en la existencia de un orden internacional injusto en que los imperialismos imponen zonas de pobreza y dependencia.

Creemos que es necesario obtener el máximo de recursos y el máximo de libertad de acción, para luchar contra esta situación.

5. Por eso proponemos un sistema integral de defensa que incluye una serie de leyes en forma de código que abarquen el conjunto de los problemas de defensa.

Desde los aspectos doctrinarios hasta la producción para la defensa, pasando por la reorganización de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, los servicios de inteligencia, la defensa civil y la movilización.

6. Creemos que el mejor procedimiento es sancionar una ley básica que establezca las bases doctrinarias y un sistema de conducción.

A partir de esto, en el plazo de un año el presidente de la Nación, con el asesoramiento del Consejo de Defensa Integral de la Nación, a crearse, elaborará las otras leyes, para su aprobación parlamentaria.

Este consejo de defensa, estará constituido por miembros del Parlamento, fuerzas armadas, organizaciones de la producción y sociales y otras personas o instituciones que se considere pertinentes.

En este caso a instancias de la posición oficial, se ha optado, como dije antes, por una posición abierta en lo que respecta a la participación de las organizaciones empresarias, obreras y las fuerzas armadas, dejándolo a criterio del presidente de la Nación.

7. Esta ley básica definirá los conceptos centrales de la defensa y establecerá un conjunto de situaciones de determinado carácter y gravedad. A la vez un conjunto de medios para hacer frente a estas situaciones.

El presidente de la Nación, primer mandatario del Ejecutivo y comandante en jefe de las fuerzas armadas, asesorado por el Consejo de Defensa, determinará los medios a emplear en cada situación.

8. Las situaciones y los medios se articulan entre sí, formando mecanismos de alerta que responden con medios determinados a situaciones determinadas.

9. La doctrina de seguridad nacional queda reemplazada en la ley y en la práctica, por una doctrina de defensa nacional.

En esta última doctrina, tienen posibilidades de existir las fuerzas armadas de Savio, de Mosconi, del brigadier San Martín y creemos que también las de todos sus actuales integrantes, porque son argentinos y porque desean participar de este sistema de defensa de la Nación, y no aquellas fuerzas armadas que buscan destruir a los gobiernos legitimados por la voluntad popular.

10. Consideramos que este planteo integral contiene las precisiones necesarias para resolver adecuadamente las relaciones entre el poder militar y el poder civil en todas las áreas que hacen a la defensa y para terminar con el largo desencuentro entre pueblo y fuerzas armadas, reencauzando a estas últimas en la misión para la cual han sido formadas y que les corresponde como parte integrante de la Nación.